

---


## RV: CONTESTACION PARA RADICAR

---

**Desde** Juzgado 04 Civil Municipal - Risaralda - Dosquebradas <j04cmpaldosq@cendoj.ramajudicial.gov.co>

**Fecha** Vie 9/05/2025 7:01 AM

**Para** Nicolas Augusto Moreno Vargas <nmorenov@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 6 archivos adjuntos (3 MB)

ContestacionDemanda - COOQUITRANS - COLDETRANS.pdf; - Poder - COOQUITRANS.pdf; -SentenciaPrimeraInstancia.pdf; -SentenciaTribunalSegundaInstancia.pdf; - SentenciaTutelaPrimerInstancia.pdf; -SentenciaTutelaSegundaInstancia.pdf;

Buen día.

Por medio del presente remito.

Cordialmente.



**JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL**  
**DOSQUEBRADAS - RISARALDA**

CAM, Av. Simón Bolívar No. 36-44, Oficina 305  
j04cmpaldosq@cendoj.ramajudicial.gov.co  
(606) 3169011 Ext. 1191

Conforme al artículo 109 del Código General del Proceso los memoriales remitidos por correo electrónico como mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si son recibidos en el buzón del correo antes del cierre del Juzgado el día que vence el respectivo termino, que es a las **CUATRO DE LA TARDE (04:00 p.m.)**, hora establecida por el Consejo Seccional de la Judicatura para el cierre de los despachos judiciales en el Distrito Judicial de Pereira. Por directriz del Consejo de la Judicatura el buzón de correo electrónico del Juzgado fue configurado para recibir mensajes solamente entre las 7.am y las 4 p.m de lunes a viernes.  
(Acuerdo PSAA06-3334 del 02-03-2006 del CSJ.)

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el capítulo VII—notificaciones; artículo 197 de la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**PRUEBA ELECTRÓNICA:** al recibir el acuse de recibo por parte de este despacho se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario. (Ley 527 del 18/08/1999). Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos en forma electrónica a través de las redes telemáticas. “La información adjunta es exclusiva para la persona a la cual se dirige este mensaje, la cual puede contener información confidencial y/o, material privilegiado. Cualquier revisión, transmisión, diseminación o uso del mismo, así mismo cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted recibe este mensaje por error, por favor notifíqueme y elimine este material. Gracias.

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:** Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

---

**De:** Marcela Ballen Ceron <abogadamarcela@hotmail.com>

**Enviado:** jueves, 8 de mayo de 2025 14:41

**Para:** Juzgado 04 Civil Municipal - Risaralda - Dosquebradas <j04cmpaldosq@cendoj.ramajudicial.gov.co>

**Cc:** christianandresguevara <christianandresguevara@hotmail.es>; jaugustorioso@hotmail.com <jaugustorioso@hotmail.com>; nicolas.rios01@hotmail.com <nicolas.rios01@hotmail.com>; notificacionesjudiciales@allianz.co <notificacionesjudiciales@allianz.co>; maria.romero <maria.romero@externos.allianz.co>

**Asunto:** CONTESTACION PARA RADICAR

No suele recibir correo electrónico de abogadamarcela@hotmail.com. [Por qué es esto importante](#)

 [Expediente Juzgado Tercero Administrativo.zip](#)

Buenas Tardes,

Comedidamente me permito remitir contestación para radicar dentro del proceso de la referencia, muchas gracias.

JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

DEMANDANTE: COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTADORES SA

DEMANDADO: COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTES - COOQUITRANS Y OTROS

RADICADO: 202500171

Cordialmente,

Marcela Ballen Ceron

Abogada

Señores

**JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL**

Dosquebradas

**REF:** Poder especial

**JOSE IGNACIO VARÓN CÁRDENAS**, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, domiciliado y residente en Armenia, Quindío, en mi calidad de representante legal de la **COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES - COOQUITRANS**, identificada con NIT 890.000.442-1, por medio del presente escrito confiero **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente a la abogada **GLORIA MARCELA BALLÉN CERÓN**, mayor de edad, domiciliada en Armenia, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.933.921 y tarjeta profesional No. 105.542 del Consejo Superior de la Judicatura, correo electrónico: [abogadamarcela@hotmail.com](mailto:abogadamarcela@hotmail.com) para que, en nuestro nombre y representación, conteste y lleve hasta su culminación el proceso que se adelanta en su despacho bajo radicado **04-2025-00171** y asuma la vocería judicial de la causa que le ha sido incoada a la **COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES – COOQUITRANS**.

Así mismo, designo como apoderado subsidiario al abogado **LUIS EDUARDO MORA BOTERO**, mayor de edad, domiciliado en Armenia, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.390.360 y tarjeta profesional No. 157.781 del Consejo Superior de la Judicatura, correo electrónico: [abogadoluiseduardo@hotmail.com](mailto:abogadoluiseduardo@hotmail.com)

Mis apoderados quedan expresamente facultados para actuar en todas las etapas del proceso y podrán, recibir, transigir, conciliar, renunciar, sustituir, reasumir, desistir, y ejercer todas las facultades propias del mandato judicial conferido.

En mérito de lo anterior, solicito se les reconozca personería para actuar en los términos y con los alcances del presente poder.

Cordialmente,

  
**JOSE IGNACIO VARÓN CÁRDENAS**

C.C. No. 7.514.609

Representante Legal

COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES - COOQUITRANS

NIT: 890.000.442-1

**ACEPTAN:**

**GLORIA MARCELA BALLÉN CERÓN**

C.C. No. 41.933.921 de Armenia

T.P. No. 105.542 del C.S.J.

**LUIS EDUARDO MORA BOTERO**

C.C. No. 18.390.360 de Calarcá

T.P. No. 157.781 del C.S.J.

Señor  
JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL  
Dosquebradas, Risaralda  
E.                      S.                      D.

Proceso:                      Verbal de menor cuantía  
Demandante:                Coldetrans SA  
Demandado:                Cooperativa Quindiana de Transportadores LTDA y otros  
Rad:                          2025-00171

Gloria Marcela Ballén Cerón, obrando en mi calidad de apoderada judicial de la **Cooperativa Quindiana de Transportadores LTDA – COOQUITRANS** identificada con el NIT 890.000.442-1 representada legalmente por Jose Ignacio Varón Cardenas, dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito y dentro de la oportunidad procesal pertinente, me permito dar contestación a la demanda propuesta por la parte demandante, así:

A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

AL HECHO PRIMERO: Es cierto.

AL HECHO SEGUNDO: Es cierto.

AL HECHO TERCERO: Es cierto.

AL HECHO CUARTO: Es parcialmente cierto, pues en efecto el señor Juan Augusto Ríos Rincon, realizo el llamamiento en garantía de **ALLIANZ SEGUROS** y que la **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTADORES SA**, llamó en garantía mi representado, sin embargo, si en la responsabilidad contractual adquirida por el propietario y un tercero, no se reconoce la solidaridad o responsabilidad civil, tampoco debe reconocerse en la extracontractual, adquirida por el mismo propietario y una empresa que lo único que realizó, fue despacharlo con una mercancía, desde un origen a un destino.

AL HECHO QUINTO: No corresponde a un hecho, sin embargo, mediante Sentencia de primera instancia el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales dispuso:

*“PRIMERO: DECLARAR administrativamente responsable a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL, por la muerte del ciudadano Israel Gutiérrez Valencia ocurrida como consecuencia de accidente de tránsito presentado el día 12 de Junio de 2013, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.*

*SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADAS, las excepciones de “Culpa exclusiva y determinante de la víctima” y “Rompimiento del nexo causal”, propuestas por LA POLICIA NACIONAL, por lo expuesto en la parte motiva.*

*TERCERO: DECLARAR probada la excepción de “culpa de un tercero”, en este caso de la POLICÍA NACIONAL, propuesta por Transportes COLDETRANS S.A y por Juan Augusto Ríos Osorio, por lo que se niegan las pretensiones de la demanda en contra de estos dos demandados.*

*CUARTO: NEGAR el llamamiento en garantía realizado en contra de ALLIANZ SEGUROS S.A y la Cooperativa Quindiana de Transporte LTDA, conforme a lo descrito en la parte motiva de esta sentencia.*

*QUINTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL por concepto de perjuicios materiales sufridos con ocasión de la muerte de Israel Gutiérrez Valencia así: para OMAIRA GUERRERO LARGO (compañera permanente), la suma de \$213.388.909,17.*

**SEXTO: NEGAR** el reconocimiento de perjuicios materiales reclamado por ARSOMAN GUTIÉRREZ NAVARRETE y BERTILDA ROSA VALENCIA, en su calidad de padres del fallecido, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. **SÉPTIMO:** Como consecuencia de lo anterior, **CONDENAR** a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL por concepto de perjuicios morales sufridos, con ocasión de la muerte de Israel Gutiérrez Valencia así: (...)

**OCTAVO: NEGAR** las demás pretensiones de la demanda.

**NOVENO: CONDENAR EN COSTAS a LA POLICIA NACIONAL**, en consecuencia por la secretaría del despacho, se liquidarán las costas por expensas y como agencias en derecho, dando aplicación al Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se fija la suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la condena al momento de la ejecutoria de la sentencia.

**DÉCIMO: DISPONER** que se efectúen las comunicaciones del caso para el cabal cumplimiento de la sentencia (inciso final, Art. 192 del C.P.A.C.A.). Anótese en el Sistema Informático de Justicia XXI y; procédase al archivo del mismo, previa liquidación y devolución de remanentes de gastos del proceso, si los hubiere

**DÉCIMO PRIMERO: PREVENIR** a las entidades demandadas acerca del contenido de los artículos 187 inciso 4, 194 y 195 del C.P.A.C.A.

**DÉCIMO SEGUNDO: DISPONER** que se notifique la sentencia en los términos del artículo 203 del C.P.A.C.A.

**DÉCIMO TERCERO:** Expídanse a costa de la parte interesada, las copias auténticas que sean solicitadas, con observancia de los parámetros legales establecidos en el artículo 114 del Código General del Proceso.”

**AL HECHO SEXTO:** No se trata de un hecho, sino de una cita literal tomada de la parte considerativa de la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, la que entre otras no es vinculante.

**AL HECHO SEPTIMO:** Es cierto.

**AL HECHO OCTAVO:** No corresponde a un hecho, sin embargo, mediante sentencia de segunda instancia el Honorable Tribunal Administrativo de Caldas dispuso:

*“Primero. MODIFÍCASE la sentencia del cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, dentro del proceso de reparación directa promovido por los señores Omaira Guerrero Largo y otros contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, COLDETRANS S.A. y el señor Juan Augusto Ríos Osorio, en el cual fueron llamados en garantía Allianz Seguros S.A. y la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda.*

*Lo anterior, en el siguiente sentido:*

**Segundo. MODIFÍCASE el ordinal primero** de la providencia recurrida, el cual quedará así:

*“DECLÁRASE administrativa y patrimonialmente responsables a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, en un 50%, y de manera solidaria al señor Juan Augusto Ríos Osorio y a COLDETRANS en el 50% restante, por los perjuicios causados a la parte actora, con ocasión del fallecimiento del señor Israel Gutiérrez Valencia.”*

**Tercero. ADICIÓNANSE los siguientes incisos al ordinal segundo** del fallo apelado, así:

**DECLÁRANSE no probadas** las excepciones propuestas por el señor Juan Augusto Ríos Osorio y COLDETRANS, que denominaron: **“HECHO DE UN TERCERO”, “CONCURSO DE LA VICTIMA (sic) DEL**

**DAÑO”, “INEXISTENCIA DE LOS DAÑOS ALEGADOS POR LOS DEMANDANTES”, “INEXISTENCIA DE PRUEBA DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS DEMANDADOS” e “(...) INNOMINADA”.**

**DECLÁRANSE no probados** los siguientes medios exceptivos formulados por Allianz Seguros S.A.: **“PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO” y “FALTA DE CONFIGURACION (sic) ACTUAL DEL SINIESTRO”.**

**DECLÁRANSE probadas** las excepciones propuestas por Allianz Seguros S.A. y que denominó: **“LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA ALLIANZ SEGUROS S.A. SE ENCUENTRA LIMITADA” y “EXISTENCIA DE DEDUCIBLE”.**

**DECLÁRASE probado** el siguiente medio exceptivo formulado por la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda.: **“INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD”** y, en consecuencia, **ABSUÉLVESE** de responsabilidad a la citada llamada en garantía.

**Cuarto. REVÓCASE el ordinal tercero** de la providencia objeto de debate, con el cual se negaron las pretensiones de la demanda respecto del señor Juan Augusto Ríos Osorio y COLDETRANS.

**Quinto. MODIFÍCASE el ordinal cuarto** de la sentencia de primera instancia, el cual quedará así:

**CONDÉNASE** a Allianz Seguros a que con cargo a la póliza de autos nº 021226541/41 suplemento 1, y teniendo en cuenta en todo caso el límite del valor asegurado, así como el deducible que el asegurado deba pagar por dicho concepto, asuma la condena impuesta de manera solidaria contra el señor Juan Augusto Ríos Osorio.

**Sexto. MODIFÍCANSE los ordinales quinto y séptimo** del fallo objeto de apelación, en el sentido de disponer que la condena por concepto de perjuicios, tanto materiales como morales, se predica en un 50% frente a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, y en un 50% y de manera solidaria respecto del señor Juan Augusto Ríos Osorio y de COLDETRANS S.A.

**Séptimo. En lo demás, CONFÍRMASE** la providencia recurrida.

**Octavo. ABSTÍENESE** de condenar en costas en esta instancia, por lo brevemente expuesto.

**Noveno. NOTIFÍQUESE** conforme lo dispone el artículo 203 del CPACA.

**Décimo. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen y **HÁGANSE** las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”

**AL HECHO NOVENO:** Es cierto.

**AL HECHO DECIMO:** No es cierto, se trata de opiniones del apoderado de la parte demandante, las cuales debieron haber sido expuestas y sustentadas con pruebas dentro del proceso tramitado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

En cuanto a la “afiliación” del vehículo automotor a la empresa COLDETRANS S.A., se trata de un hecho que fue considerado probado por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas. Cualquier observación relacionada con dicha situación debió haberse planteado y discutido dentro de esa misma instancia procesal, siendo esta una decisión que tiene efectos de cosa juzgada, conforme a la excepción que se expondrá.

Por lo anterior, se reitera que cualquier consideración relacionada con este asunto debió ser planteada oportunamente en dicha instancia procesal.

Cabe destacar ante este honorable despacho que **COLDETRANS S.A.** interpuso **acción de tutela** contra la referida decisión judicial, la cual fue declarada **improcedente**. En consecuencia, resulta aún más evidente que cualquier aspecto relativo a la responsabilidad discutida en ese proceso ya ha sido **objeto de cosa juzgada**.



En lo que concierne a la responsabilidad atribuida a COLDETRANS S.A. o a la COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTES LTDA., se trata de un aspecto que fue declarado probado por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas. Por tanto, cualquier consideración al respecto debió haber sido formulada dentro de esa misma etapa procesal, siendo una decisión que adquiere el carácter de cosa juzgada, conforme a la excepción que se expondrá más adelante.

**AL HECHO DECIMO PRIMERO:** No es cierto, **El Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas** no dejó sin resolver ningún aspecto relacionado con la responsabilidad solidaria de las partes dentro del proceso de reparación directa.

Por el contrario, dichas responsabilidades fueron **claramente establecidas** en la **sentencia de segunda instancia**.

Cualquier discusión sobre este punto debió haberse planteado en ese mismo proceso, cuya decisión tiene **efectos de cosa juzgada**.

**AL HECHO DECIMO SEGUNDO:** No es un hecho que me conste.

**AL HECHO DECIMO TERCERO:** No es cierto, lo planteado por la parte demandante no es más que una interpretación personal que desconoce abiertamente los efectos **jurídicos vinculantes de la cosa juzgada** y del carácter de título ejecutivo que ostenta la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas.

Las afirmaciones que allí se hacen, lejos de aportar hechos nuevos, replican cuestiones ya discutidas y resueltas dentro del proceso contencioso administrativo.

- Esta afirmación fue examinada y resuelta en el proceso de reparación directa, donde el Tribunal concluyó de forma expresa que tanto el señor Juan Augusto Ríos Osorio como COLDETRANS S.A. reconocieron como cierto el vínculo del automotor con dicha empresa en sus respuestas a la demanda.

Además, en la audiencia de fijación del litigio no se presentó inconformidad alguna sobre el hecho de que el vehículo de placas TTG200 estuviera registrado en COLDETRANS. En consecuencia, no corresponde ahora reabrir un debate que ya tuvo lugar.

- Debe tenerse en cuenta que, conforme al artículo 824 del Código de Comercio, los contratos en materia mercantil se perfeccionan por el consentimiento de las partes, sin requerir necesariamente un documento físico, salvo que la ley disponga lo contrario. Por tanto, la inexistencia de un contrato escrito no implica la inexistencia del acuerdo, y menos aun cuando existen actos objetivos que reflejan una relación jurídica en la práctica.
- La alegación del demandante no tiene sustento, pues los temas relativos a la afiliación, responsabilidad, usufructo y demás aspectos relacionados con el vínculo entre el vehículo y COLDETRANS S.A. fueron debidamente tratados y definidos por el Tribunal, con carácter de cosa juzgada.
- Finalmente, estas afirmaciones repiten el mismo patrón se trata de una interpretación de la parte actora que desconoce deliberadamente que los puntos relacionados con la vinculación, responsabilidad y demás aspectos del vehículo ya fueron objeto de pronunciamiento judicial definitivo, y por tanto, están cobijados por el principio de cosa juzgada.

**AL HECHO DECIMO CUARTO:** No es cierto, La afirmación realizada se desprende del contenido mismo de la demanda y de las pretensiones formuladas. Sin embargo, dicha solicitud resulta inadmisibles, ya que los hechos en los que se basa fueron objeto de examen y decisión en un proceso judicial anterior,

cuya sentencia quedó en firme y hoy goza de autoridad de cosa juzgada.

**AL HECHO DECIMO QUINTO:** No es cierto, Lo señalado por el apoderado de la parte demandante ya fue objeto de alegación por parte de COLDETRANS S.A. dentro del proceso de reparación directa. No obstante, como ha quedado expuesto a lo largo de esta contestación, el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas fue claro al concluir que el hecho en cuestión fue expresamente reconocido como cierto tanto por el señor Juan Augusto Ríos Osorio como por la propia empresa COLDETRANS.

Adicionalmente, durante la etapa de fijación del litigio no se presentó oposición alguna frente a la circunstancia de que el vehículo identificado con placas TTG200 se encontraba vinculado a COLDETRANS S.A., por lo cual tal situación fue tenida como pacífica.

En consecuencia, los argumentos de hecho y de derecho que hoy se pretenden reabrir ya fueron plenamente debatidos en sede contenciosa, en un proceso que culminó con una sentencia ejecutoriada, revestida del carácter de cosa juzgada, lo cual impide que sean nuevamente objeto de discusión.

Además en la sentencia de Primera instancia se dispuso lo siguiente:

*“(...) En el mismo sentido, las entidades Cooperativa Quindiana de Transporte y Aseguradora ALLIANZ, no se les atribuirá imputación alguna, en la medida en que por parte del despacho no se encontró responsabilidad de quienes las llamaron en garantía. (...)”*

Lo que termina de dar fe que el Honorable Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales resolvió de manera completa lo que hoy pretende el demandante vuelva a ser objeto de controversia.

**AL HECHO DECIMO SEXTO:** Es cierto.

#### **A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA**

En consecuencia de los anterior, nos oponemos a todas y cada una de las pretensiones elevadas por el demandante y solicito respetuosamente al Honorable Despacho que se rechacen íntegramente las formuladas en la demanda, por cuanto no cuentan con respaldo fáctico ni jurídico que justifique su admisión o eventual prosperidad.

Se trata de solicitudes infundadas, carentes de sustento probatorio y, además, referidas a hechos que ya fueron objeto de análisis y decisión en un proceso anterior, el cual concluyó con una sentencia en firme.

En consecuencia, manifiesto mi oposición frontal y expresa a todas y cada una de las pretensiones, tanto de carácter declarativo como de condena, las cuales deben ser denegadas en su totalidad.

#### **EXCEPCIONES DE FONDO**

##### **1. TRANSITO COSA JUZGADA**

En palabras del procesalista español Jaime Guasp, para indagar el contenido de la cosa juzgada material se parte de una tesis muy extendida: la de las llamadas tres identidades de la cosa juzgada. Según esta doctrina,

*“[p]ara que el fallo goce de la autoridad de la cosa juzgada en un proceso ulterior, es preciso que entre el primer pronunciamiento y el nuevo litigio se dé perfecta concurrencia de tres elementos comunes: **los sujetos** (eadem personae), **el objeto** (eadem res) y **la causa o razón de pedir** (eadem causa petendi) existiendo, en consecuencia, tres clases de límites de la cosa juzgada: límites subjetivos, límites objetivos y límites causales”*

Esta tríada de identidades fue recogida en nuestro ordenamiento legal, y por ese motivo el artículo 303 inciso 1° del C.G.P. establece que,

*“La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes”.*

Por su lado, la jurisprudencia patria es conteste con estas concepciones doctrinales y legales, y así lo ha expresado en múltiples y uniformes fallos en los que destaca que:

*“(…) [t]res son los elementos que deben coincidir para que se estructure la institución de la cosa juzgada; esa triple identidad está dada por el objeto, la causa y los sujetos.*

*La identidad de objeto implica que el escrito verse sobre la misma pretensión material o inmaterial de la cual ella se predica; y se presenta cuando, en relación a lo reclamado existe un derecho reconocido, declarado o modificado respecto de una o varias cosas dentro de una relación jurídica. La identidad de causa (eadem causa petendi), alude a que la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada tengan los mismos fundamentos o hechos como sustento. A su turno, la identidad de partes presupone que al juicio concurren los mismos sujetos intervinientes o sus causahabientes o cesionarios que resultaron vinculados y obligados por la decisión que se tome.*

Alusivo a aquellos elementos ha señalado la jurisprudencia de la Corte que,

*“Para que se predique una autoridad con tal extensión la doctrina y explícitamente el Código de Procedimiento Civil en su artículo 332, requieren que en el segundo proceso en el que se pretenda replantear el litigio que fue ya decidido en el primero, se presente, con respecto a este último, **una triple identidad de partes, objeto y causa**. Por lo que hace a la primera –límite subjetivo- ha dicho la Corte que “se refiere no a la identidad personal de los sujetos involucrados, sino a su identidad jurídica, y su fundamento racional se encuentra en el principio de la relatividad de las sentencias, que por vía general vincula a quienes fueron partes en el proceso, a sus sucesores mortis causa o a sus causahabientes por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda, si se trata de derechos sujetos a registro, o al secuestro en los demás casos” (Casación Civil del 26 de febrero de 2001.Exp. C-5591)*

*Pero es indudablemente en el denominado límite objetivo, desdoblado en el objeto de la pretensión y en la causa de pedir, en donde más se presentan los problemas tendientes a dilucidar si el segundo proceso replantea un litigio ya decidido en el primero. Con relación al límite objetivo, la Corte ha explicado que si “bien es cierto... hoy resulta indiscutible que el límite objetivo de la cosa juzgada, lo forman en conjunto, el objeto y la causa de pedir, también lo es que no siempre es fácil escindir lo que es materia de decisión en la sentencia, o sea su objeto en sí mismo considerado, y la razón o motivo de la reclamación de tutela para un bien jurídico, desde luego que se trata de dos aspectos íntimamente relacionados entre sí. De ahí porque sea recomendable examinar tales dos cuestiones como si se tratara de una unidad para determinar de esa forma en todo el conjunto de la res iudicium deductae, tanto la identidad del objeto como la identidad de causa: sobre qué se litiga y por qué se litiga” (sentencia de 20 de agosto de 1985, CLXXX, 302)”. (CSJ SC Sent. Oct. 30 de 2002, radicación n. 6999).*

Lo que recientemente se recordó en CSJ SC5231-2019 ya en vigencia del estatuto procesal vigente al señalar que:

*[I]a norma procesal citada [en alusión al artículo 303 del Código General del Proceso] establece que una sentencia ejecutoriada en un proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre y cuando el nuevo proceso «...**verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes**».*

*La identidad de partes -eadem conditio personarum- también llamada por la doctrina el límite subjetivo, guarda relación con la identidad jurídica de aquellas y no con su identidad física. Por ello, dice el legislador, se entiende que existe también «cuando las [partes] del segundo proceso son sucesores por*

*causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos».*

*Los límites objetivos los configuran la identidad de cosa y causa -eadem res y eadem causa petendi-.*

*La cosa o el objeto atañe a la cuestión de sobre qué litigan las partes. Se ha definido como «el bien corporal o incorporal que se reclama, o sea las prestaciones o declaraciones que se piden de la justicia» (CLXXII, 21). En relación con tal elemento, también ha señalado esta Corporación que:*

*Por el aspecto del objeto consistente en la relación jurídica sobre la cual versa la decisión judicial, el criterio para identificarlo es éste: cuando el derecho ha sido confirmado o negado en un pleito, la identidad del objeto se evidencia si en el nuevo proceso se controvierte el mismo derecho, aun cuando ello se haga para lograr el reconocimiento de una consecuencia que no fue discutida en el primer juicio. Siempre que por razón de la diferencia de magnitud entre el objeto juzgado y el del nuevo pleito se haga oscura la identidad de ambos, ésta se averigua por medio del siguiente análisis: si el juez, al estatuir sobre el objeto de la demanda contradice una decisión anterior, estimando un derecho negado o desestimando un derecho afirmado por la decisión precedente, se realiza la identidad de objetos. No así en el caso contrario, o sea cuando el resultado del análisis dicho es negativo. (G.J. XLVII, número 1942).*

Ahora bien, la doctrina establece que:

*“Para que se configuren los efectos de la cosa juzgada, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, **Sala Civil, Sentencia, Ago. 15/2017** ha precisado que deben concurrir los siguientes elementos:*

- i. La existencia de un fallo ejecutoriado dictado en proceso contencioso.*
- ii. El trámite de un segundo juicio fundado en el mismo objeto, con igual causa e identidad jurídica de las partes en ambos asuntos.*

*Al efecto, para determinar si existe identidad de objeto, **el juez debe estudiar si con su resolución contradice una decisión anterior, estimando un derecho ya negado o desestimando un derecho afirmado** por la decisión precedente.*

*En cuanto al estudio del objeto y la causa, la alta corporación explica que **la mayoría de las veces se encuentran íntimamente relacionados**, a tal punto que, en ejercicio de su discrecionalidad, el juez las puede valorar como una unidad. En dicho raciocinio, se determina si el planteamiento nuevo de determinadas cuestiones y las futuras decisiones que se tomen sobre esos puntos estarán excluidas por generar el desconocimiento del bien jurídico reconocido en sentencia precedente.*

*Con relación a la ejecutoria de la sentencia, la Sala sostiene que generalmente se produce cuando no es procedente recurrirla por haber vencido el término o cuando, pese a ser recurrida, queda en firme la providencia que lo resuelve.*

*Su razón de ser es impedir que quien resultó vencido en un litigio vuelva a plantear la cuestión o asunto sometido a composición judicial hasta que su pretensión o excepción sea aceptada, en aras de preservar el orden público y la seguridad jurídica.*

*El deber de verificación que entraña la cosa juzgada exige hallar en la sentencia pasada las cuestiones que ciertamente constituyeron la materia del fallo, **ya que en ellas se encuentra su fuerza vinculante (M. P. Luis Alonso Rico Puerta).**”*

Para el efecto se procederá con la explicación de los elementos que cumplen a cabalidad con los requisitos requeridos para consolidar la Cosa Juzgada en el caso en concreto:

Es preciso observar que el demandante en la **demanda que nos ocupa** pretende:

“1. Que se declare la responsabilidad del pago realizado por mi prohijado a los señores JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO, mayor de edad, identificado con la CC No 10.225.828, como propietario del vehículo de placas TTG-200; la Cooperativa Quindiana de transportadores Ltda, empresa identificada con Nit No 89000442-1, empresa ubicada en la ciudad de Armenia en la calle 53 No 16-04, representada legalmente por el señor JORGE LUIS CADAVID ROMERO, mayor de edad, identificado con la CC No 7535429 y la compañía de seguros ALLIAZ SEGUROS SA sucursal Manizales, ubicada en la Cra 23 B No 64-22 piso 5 y 60 barrio laureles.


2. Que a consecuencia de lo anterior se declare que para la fecha de los hechos en accidente de tránsito ocurrido el pasado 12 de junio de 2013, el vehículo de placas TTG-200, estaba bajo el cuidado y custodia del señor JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO y la empresa COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADRES LTDA, bajo un contrato de transporte.

3. Que no existe ni ha existido vínculo alguno entre el vehículo de placas TTG200 y mi prohijada.

4. Que se ordene el reembolso del dinero pagado por mi prohijada de \$ 213.000.000, los cuales fueron pagado a consecuencia de la solidaridad a los herederos del difunto ISRAEL GUTIERREZ, y en contra de JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO, COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA Y ALLIANZ SEGUROS SA.


5. Que se condene en costas al demandado.”

Ahora bien dentro de la **demanda adelantada ante el Juzgado Tercero Administrativo de Manizales Caldas** se tuvo dentro de las pretensiones la siguiente:



1. Previa las declaraciones y condenas a que haya lugar le Solicito Señor Juez con todo respeto que se **DECLARE ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE** LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE LA DEFENSA - POLICIA NACIONAL Y EN FUERO DE ATRACCIÓN LA EMPRESA COLDETRANS COLOMBIANA DE TRANSPORTES S.A - JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO, por la muerte violenta del señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA, en hechos ocurridos el día 12 de Junio de 2013, cuando se desplazaba en calidad de conductor del vehículo Motocicleta de Placas XFG83A y colisionara con el Vehículo Tractocamión de Placas TTG-200 de propiedad del señor JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO, en la vía Cauya - La Pintada, Kilómetro 31 + 750 Vereda la Sierra del Municipio de Riosucio (Caldas)

El hoy demandante fungió en dicha demanda como demandado mediante la cual se pretendió que se declarara la persona o la entidad **administrativamente responsable** de la muerte del señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (QDEP), dentro de la contestación aportada por la hoy demandante denunció el pleito a mi representada **COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA** tal y como se puede apreciar a continuación.



**CARLOS ARTURO ZULUAGA CAMACHO**, mayor vecino de Manizales, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi calidad de representante judicial del **CODEMANDADO COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTES S.A. “COLDETRANS S.A.”**, representada legalmente por la señora **ERICA MARCELA SERNA DUQUE**, en calidad de **CODEMANDADO** por ser la empresa usufructuaria del vehículo de placa TTG200, conforme a poder que obra en el expediente, dentro del término legal, respetuosamente **DENUNCIO EL PLEITO** a la **COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA**, representada legalmente por el Señor JORGE LUIS CADAVID ROMERO, identificado con cedula de ciudadanía #7.535.429 mayor vecino de Armenia, Quindío.

Además, debemos de tener presente que dentro de la Audiencia celebrada el **15 de mayo del año 2017** el **Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales** procedió a fijar litigio en el cual dispuso:

“¿Es procedente declarar la responsabilidad administrativa de los demandados por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la muerte del señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA, en hechos ocurridos el día 12 de junio de 2013 en la vía Cauya a la pintada Kilómetro 31 + 750 vereda la sierra en el Municipio de Rio Sucio Caldas con fundamento en la falla del servicio?”


*Estando conformes las partes con la fijación del litigio, se procede a continuar con la diligencia”*

Tal como se puede observar en la grabación que consta en el expediente digital el cual se adjunta a la presente, específicamente en el **Documento Número 12**.

Ahora bien, para probar que las pretensiones elevadas dentro del proceso de la referencia ya fueron debidamente resueltas en el proceso que se adelantó en **Primera Instancia** ante el **Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales** y en **Segunda Instancia** ante el **Tribunal Administrativo de Caldas Sala Quinta de decisión** y esto se puede vislumbrar en las sentencias antes referidas así:

- **Sentencia Primera instancia:**


**FALLA**



**PRIMERO: DECLARAR** administrativamente responsable a **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL**, por la muerte del ciudadano Israel Gutiérrez Valencia ocurrida como consecuencia de accidente de tránsito presentado el día 12 de Junio de 2013, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

- **Sentencia Segunda Instancia:**

**Segundo. MODIFÍCASE el ordinal primero** de la providencia recurrida, el cual quedará así:



***DECLÁRASE administrativa y patrimonialmente responsables a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, en un 50%, y de manera solidaria al señor Juan Augusto Ríos Osorio y a COLDETRANS en el 50% restante, por los perjuicios causados a la parte actora, con ocasión del fallecimiento del señor Israel Gutiérrez Valencia.***

Como se pudo constatar tanto en **Primera Instancia** ante el **Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales** como en **Segunda Instancia** ante el **Tribunal Administrativo de Caldas Sala Quinta de decisión**, fue debidamente resuelto a quien correspondía la **responsabilidad administrativa y patrimonial** de la muerte del señor **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (QDEP)**.

Como se puede advertir, las pretensiones formuladas en la demanda giran en torno a la responsabilidad atribuida a los demandados **MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO, COLDETRANS S.A.**, así como a los llamados en garantía **ALLIANZ SEGUROS S.A. y la COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA.**, con motivo del accidente en el que perdió la vida el señor **ISRAEL GUTIÉRREZ VALENCIA (QDEP)**.

En esta oportunidad, la parte demandante busca que se declare la obligación de **reembolso del pago** efectuado por COLDETRANS S.A, no obstante, este asunto ya fue objeto de decisión en el proceso de reparación directa, en el cual el demandante solicitó **expresamente la declaración de responsabilidad**.

En consecuencia, los argumentos destinados a controvertir cualquier declaración de responsabilidad debieron presentarse en el proceso judicial, como efectivamente ocurrió, a través de la acción de tutela interpuesta por el demandante contra dicha decisión, la cual fue resuelta por el juez constitucional sin que se advirtiera irregularidad alguna.


Así mismo, se solicita que se declare que el vehículo involucrado en el proceso precitado se encontraba bajo la custodia y responsabilidad del señor **JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO** y de la empresa **COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA.**, en virtud de un contrato de transporte, y que, en consecuencia, se ordene el reembolso de la suma pagada por **COLDETRANS S.A.**

No obstante, tales circunstancias están estrechamente vinculadas con las pretensiones formuladas en la demanda de reparación directa, así como con el objeto del litigio y la causa petendi.




En este sentido, es evidente que existe una coincidencia sustancial en el objeto de ambos procesos judiciales.

Ahora bien, no debe perderse de vista que en la sentencia de Segunda Instancia el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas de manera clara y expresa determino la responsabilidad de los demandados y exoneró de responsabilidad a mi representada **COOPERATIVA QUINDIANA DE TRASNPORTEADORES LTDA** así:




Al respecto, esta Corporación estima que en el proceso no se acreditó el derecho legal o contractual a través del cual COLDETRANS pudiera exigirle a la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda. que responda por la condena que aquella debe asumir de manera solidaria con el señor Juan Augusto Ríos Osorio. Lo anterior, en la medida en que, independientemente del contrato para la carga de mercancía perteneciente a la cooperativa, que además no fue allegado al expediente, lo cierto es que el vehículo tractocamión siguió estando vinculado a la empresa transportadora, lo que impide que ésta pueda exonerarse de la responsabilidad extracontractual.

Y con base en lo anterior determinó:



Bajo ese entendimiento, esta Sala de Decisión declarará probada la excepción formulada por la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda. y que denominó: ***“INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD”***; absteniéndose entonces de resolver sobre los demás medios exceptivos propuestos por la llamada en garantía.

Ahora bien, menciona el demandante que,



Así las cosas, no puede existir cosa juzgada, pues no se quiere debatir el hecho de la muerte del señor ISRAEL, pues es claro que fue culpa del desempeño del vehículo de propiedad del señor JUAN AUGUSTO, sino de quien al momento del siniestro estaba en cuidado y custodia del vehículo, y son quienes deben responder por el pago realizado en el año 2022 por parte de mi porhijado.

El presente proceso no puede sustraerse de los límites establecidos por el principio de cosa juzgada, pues **existe una evidente identidad entre los elementos esenciales que la configuran**, a saber: las partes, el objeto del litigio y la causa petendi.

Aunque la parte actora insiste en que no se ha configurado cosa juzgada, su argumentación resulta insostenible al examinarse detenidamente el contenido del proceso de reparación directa tramitado previamente. En dicho proceso, **el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas ya analizó y resolvió de fondo los hechos relacionados** con el fallecimiento del señor Israel Gutiérrez Valencia, **incluyendo la atribución de responsabilidades a los distintos sujetos procesales**, así como **la pertinencia de los llamamientos en garantía**.

En efecto, aunque formalmente se pretenda deslindar los temas, el cuestionamiento que ahora se plantea gira en torno a los **mismos fundamentos fácticos y jurídicos analizados anteriormente**, especialmente en lo que respecta a la **responsabilidad de las partes**.

Por tanto, lo que se busca en esta oportunidad **no es más que reabrir una discusión ya resuelta**, lo cual resulta jurídicamente improcedente. El escenario adecuado para haber planteado estas inconformidades ya fue agotado, ya sea dentro del proceso original o, como efectivamente se intentó, a través de la acción de tutela presentada contra la sentencia.

En cuanto a esta última, cabe precisar que COLDETRANS S.A. interpuso acción de tutela contra la

decisión judicial proferida en el proceso de reparación directa. Esta fue resuelta el 17 de mayo de 2023, mediante fallo que negó el amparo solicitado, posteriormente, el 4 de septiembre de 2023, al resolverse la impugnación, el fallo fue modificado para declarar la **improcedencia de la acción**, con base en las razones contenidas en la respectiva providencia.

Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que la identidad de partes no se limita a la coincidencia física de los sujetos procesales, **sino que debe entenderse en términos jurídicos**, de modo que lo determinante es el **rol sustancial que desempeñan dentro del conflicto**. Este criterio se apoya en el principio de relatividad de las sentencias, conforme al cual las decisiones judiciales solo surten efectos respecto de quienes intervienen en el proceso.

En el caso de la acción de reparación directa, los demandantes fueron los familiares del señor Gutiérrez Valencia, y se dirigió contra el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Juan Augusto Ríos Osorio, COLDETRANS S.A., y se llamaron en garantía a Allianz Seguros S.A. y la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda, ahora, en este nuevo proceso, COLDETRANS S.A. figura como demandante, dirigiendo su reclamación contra Juan Augusto Ríos Osorio, Allianz Seguros S.A. y la Cooperativa Quindiana, aunque se excluyen algunos actores del proceso anterior, como el Ministerio de Defensa y los familiares del fallecido, **persiste una coincidencia sustancial en los demás sujetos y en los hechos que originaron el litigio**.

En consecuencia, no puede pasarse por alto que se trata de una **nueva formulación de un conflicto previamente resuelto**. La pretensión actual recae sobre la misma controversia que ya fue decidida con autoridad de cosa juzgada, **razón por la cual debe rechazarse su apertura y reiterarse la imposibilidad de replantear cuestiones ya resueltas en sede judicial**.

## 2. COBRO DE LO NO DEBIDO

El demandante pretende que se declare la improcedencia de ciertos pagos efectuados por **COLDETRANS S.A** y solicita además que se ordene su **reembolso**, al considerar que dichos pagos se realizaron únicamente en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, sin embargo, esta solicitud carece de sustento jurídico, ya que fue precisamente esa autoridad judicial la que **estableció de manera clara la responsabilidad** solidaria entre **COLDETRANS S.A. y el señor RÍOS OSORIO**.

El Tribunal determinó, con énfasis, que existía **prueba suficiente** de que dicho automotor estaba efectivamente vinculado a **COLDETRANS S.A.** con base en ello, se estableció una responsabilidad conjunta del **50%, correspondiendo un 25% a COLDETRANS S.A. y otro 25% al señor RÍOS OSORIO**.

En consecuencia, los pagos realizados por COLDETRANS S.A. se hicieron en **cumplimiento de la distribución de responsabilidad ordenada judicialmente**, y no en exceso o de forma indebida, por tanto, no es procedente solicitar su reembolso. Solo en el evento en que COLDETRANS S.A. hubiese asumido la totalidad del porcentaje correspondiente a los responsables solidarios, podría plantearse un eventual derecho de repetición contra los demás obligados, lo cual no ocurrió.

Si **COLDETRANS S.A.** no estaba conforme con la determinación de su grado de responsabilidad dentro del proceso de reparación directa, debió controvertir dicha decisión por las vías judiciales correspondientes, como los recursos ordinarios o la acción de tutela la cual como ya ha sido puesto en conocimiento del despacho fue interpuesta pero **no prosperó favorablemente**.

Además, cualquier posible participación de la **COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA.** debió ser objeto de análisis dentro del proceso de reparación directa. Si no fue así, ello constituye una eventual falencia en la estrategia procesal de **COLDETRANS S.A.**, pero en ningún caso puede dar lugar a una acción de recobro contra mi representado.



Ahora bien, no se puede perder de vista que dentro del presente caso ya operó la prescripción o, en su defecto, la caducidad de la acción promovida por la parte demandante, conforme a lo establecido en los artículo **2535 del código Civil Colombiano** el cual establece:

***“Artículo 2535. Prescripción extintiva***

*La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones.*

*Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible.”*

Así como en el artículo **2536 del código Civil Colombiano** el cual plasma:

***“Artículo 2536. Prescripción de la acción ejecutiva y ordinaria***

*La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10).*

*La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5).*

*Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término.”*

Es importante tener en cuenta que los hechos que originan esta controversia ocurrieron el **12 de junio de 2013**, y que la **demanda fue radicada en el año 2014** es decir, han transcurrido más de once (11) años desde entonces hasta la fecha en que se radicó la presente demanda. Este lapso supera cualquier término legal de prescripción o caducidad aplicable, sea que se trate de una acción contractual, extracontractual o de naturaleza mercantil.

En este sentido, no existe disposición en el ordenamiento jurídico colombiano que permita extender este plazo, razón por la cual resulta evidente que **la acción interpuesta se encuentra extinguida por el paso del tiempo.**

Por lo anterior, se solicita respetuosamente al despacho declarar fundada la presente excepción de mérito y, en consecuencia, rechazar las pretensiones formuladas en la demanda por haberse extinguido la acción por el transcurso del tiempo legalmente establecido.

### **3. INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD**

De manera respetuosa solicito que se declare probada la excepción de ausencia de solidaridad y de responsabilidad civil extracontractual en favor de mi representada, frente a los hechos materia del presente proceso.

Tal como consta en el expediente y se encuentra debidamente acreditado, el automotor con placas TTG 200 involucrado en el siniestro no pertenece, ni ha estado bajo la administración, explotación económica, dirección o control de mi representada. Por el contrario, su propiedad y vinculación se acreditan a nombre del señor **JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO**, en calidad de propietario, y de la empresa **COLDENTRANS S.A.**, quien funge como su afiliadora y explotadora económica, ostentando por mandato legal la calidad de guardián de la actividad peligrosa de transporte de carga, en los términos establecidos por la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia y la doctrina especializada en la materia.

La jurisprudencia ha definido con claridad que el concepto de “*guardián de la actividad*” recae sobre quien tiene el poder efectivo de uso, dirección, control y beneficio económico del instrumento generador del daño, es decir, el automotor. En el caso que **ya fue objeto de sentencia tanto en primera como en segunda instancia**, se dio por sentado que **dichas condiciones se cumplieron exclusivamente en cabeza del propietario del vehículo y su empresa afiliadora**. La jurisprudencia reiteradamente ha establecido que la responsabilidad solidaria por actividades peligrosas no se extiende a terceros que carecen de dicho poder, uso o administración.

Mi representada no fue ni es propietaria del vehículo, no contrató al conductor involucrado, no ordenó ni realizó mantenimiento preventivo o correctivo del mismo, ni tuvo injerencia alguna en su operación diaria, lo cual **excluye toda posibilidad de considerarla guardiana del automotor**, y por tanto, responsable por los daños ocasionados.

Cabe aclarar que el vínculo entre mi representada y el hecho fue estrictamente comercial, mediante un contrato de transporte de carga, en el cual se contrató el servicio de acarreo, pagándose directamente el flete al propietario del vehículo, **sin que ello transfiriera a mi representada facultades de administración, posesión, explotación económica ni disposición sobre el automotor**. El simple hecho de emitir un manifiesto de carga, exigido por la normativa de transporte, **no constituye título jurídico alguno que configure guarda**, ni **genera solidaridad en caso de un siniestro** cuya causa no sea atribuible a la mercancía transportada.

Así mismo, debe resaltarse que el origen del accidente se encuentra en una violación a normas de tránsito, y no en normas del régimen de transporte. Por tanto, el régimen aplicable no es el regulado por el Decreto 173 de 2001 ni por el Código de Comercio en cuanto a contratos de transporte, sino por el Código Nacional de Tránsito, el cual exige, para establecer responsabilidad, que se acredite **culpa directa** en la infracción cometida. Y en este caso, la culpa es exclusiva del conductor del vehículo y, en su defecto, de los sujetos jurídicamente responsables por él, esto es, su empleador y el propietario de la unidad.

La doctrina autorizada, como la del profesor **Javier Tamayo Jaramillo**, ha señalado que la guarda de la actividad peligrosa recae sobre el explotador económico y el propietario del medio con el que se causa el daño, y no sobre quienes, de manera accesoria o contractual, se relacionan de forma externa con la actividad.

De igual manera, en el caso el cual ya fue materia de sentencia tanto en primera como en segunda instancia no se encontró probado que la carga transportada haya tenido incidencia alguna en la ocurrencia del accidente o en el fallecimiento de la víctima, **por lo que se descarta la posibilidad de extender responsabilidad** a mi representada.

En consecuencia, resulta improcedente pretender extender una responsabilidad solidaria a mi representada por el solo hecho de haber contratado el transporte de una mercancía que no causó el siniestro, que fue entregada en perfectas condiciones y cuyo vehículo ejecutor **nunca estuvo bajo su custodia, control, subordinación o administración**.

Finalmente, se insiste en el caso que ya fue objeto de estudio y por tanto de sentencia tanto en primera como en segunda instancia, así como también en el análisis de la tutela igualmente en primera y en segunda instancia **no existe nexo jurídico alguno** entre mi representada y los demás demandados (propietario del vehículo, conductor y empresa afiliadora), ni tampoco relación laboral, de subordinación o de dependencia. Tampoco se ha demostrado que mi representada haya ejecutado actos u omisiones que hubiesen influido de forma alguna en la producción del hecho dañoso. En consecuencia, de conformidad con el artículo **2341 del Código Civil**, el cual exige culpa para que surja responsabilidad extracontractual, y en concordancia con la jurisprudencia vigente sobre la guarda de actividades

peligrosas, debe desvincularse totalmente a mi representada de este proceso.

Por lo expuesto, solicito respetuosamente al despacho:

1. Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por no ostentar mi representada ninguna de las calidades jurídicas que le atribuyan responsabilidad en los hechos.
2. Exonerar de toda responsabilidad solidaria a mi representada, por no cumplir con los elementos jurídicos exigidos para considerarla guardiana de la actividad ni sujeto responsable por el hecho dañoso.

### **SOBRE LOS MEDIOS DE PRUEBA PROPUESTOS POR LA PARTE DEMANDANTE**

Se solicita respetuosamente al despacho que, en ejercicio de su sano juicio, persuasión racional y sana crítica, tenga en cuenta las pruebas aportadas por el demandante, en cuanto sean pertinentes y en la medida en que la ley lo permita. Esto, siempre que dichas pruebas cumplan cabalmente con los requisitos legales relativos al modo, tiempo y oportunidad de su presentación.

### **PRUEBAS**

En ejercicio del derecho de defensa que le asiste a la parte demandada que represento, para que sean tenidas como tales y que pretendo hacer valer para la demostración de todos los hechos y excepciones, le ruego a ese despacho del conocimiento, que en la respectiva oportunidad procesal se sirva decretar la práctica de las siguientes pruebas:

#### **DOCUMENTALES:**

- Poder especial otorgado a la suscrita
- Copia del expediente del proceso de reparación directa Radicado 170013333003**20140056600**  
[https://etbcsj-my.sharepoint.com/personal/admin03ma\\_cendoj\\_ramajudicial\\_gov\\_co/\\_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadmin03ma%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FJUZGADO%20TERCERO%20ADMINISTRATIVO%20DE%20MANIZALES%2FTERMINADOS%20%2D%20ARCHIVO%2F2014%2F17001333300420140056600%20RD&e=5%3A6cd6111ccd54314b75180216f0a1c39&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=58259ca1%2D4067%2D6000%2Dbfc9%2D88f92c2d0aa9&cidOR=SPO&FolderCTID=0x012000380DD2D4A911484684969D27ED787D1A](https://etbcsj-my.sharepoint.com/personal/admin03ma_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadmin03ma%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FJUZGADO%20TERCERO%20ADMINISTRATIVO%20DE%20MANIZALES%2FTERMINADOS%20%2D%20ARCHIVO%2F2014%2F17001333300420140056600%20RD&e=5%3A6cd6111ccd54314b75180216f0a1c39&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=58259ca1%2D4067%2D6000%2Dbfc9%2D88f92c2d0aa9&cidOR=SPO&FolderCTID=0x012000380DD2D4A911484684969D27ED787D1A)
- Sentencia Primera instancia emitida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales
- Sentencia de Segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Quinta de Decisión-
- Sentencia Tutela De Primera Instancia
- Sentencia Tutela De Segunda Instancia

**TESTIMONIOS** – con el objeto de esclarecer los hechos materia del proceso, le ruego se sirva citar legalmente a las siguientes personas todos mayores de edad, domiciliados, residentes y vecinos de Armenia Quindío, que a continuación relaciono, para que rindan declaración jurada sobre los hechos materia de la excepción y sobre todos aquellos que interesen al proceso, a saber:

Los siguientes testimonios:

- Hector Garcia Suarez, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.546.809,

quien recibe notificaciones en la dirección Carrera 18 numero 58-33 Balcones del Edén Bloque 2 Local 1-3 de Armenia, Quindio, al correo electronico:

Este se solicita con el fin de demostrar la veracidad de los hechos relatados a lo largo del escrito.

- Adriana Maria Montoya Cardona, identificada con número de cedula 41.946.064, quien recibe notificaciones en la Carrera 18 numero 58-33 Balcones del Edén Bloque 2 Local 1-3 de Armenia, Quindio en el correo electrónico [cafesocialcol@hotmail.com](mailto:cafesocialcol@hotmail.com).

Este se solicita con el fin de demostrar la veracidad de los hechos relatados a lo largo del escrito.

### **SOLICITUD DE INTERROGATORIO DE PARTE.**

Le ruego se sirva decretar los siguientes interrogatorios, los que realizare de manera verbal o escrita, el día y hora que su despacho los programe, con el fin de probar las excepciones y desvirtuar las pretensiones.

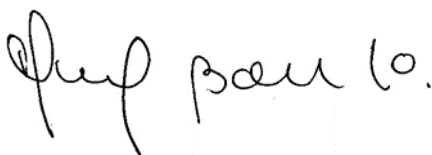
**DEMANDADOS:** Habida cuenta que de los pormenores antes reseñados podrán dar razón detallada el propio demandado, con fundamento en el artículo 198 del *Código General del Proceso*, solicito se le cite a fin de interrogarla sobre los hechos antes referidos.

**DEMANDANTE:** le ruego se sirva decretar el interrogatorio al demandante, con el fin de desvirtuar los hechos de la demanda, las pretensiones y su eventual contestación, además del posible reconocimiento de documentos que sean necesarios.

### **NOTIFICACIONES**

- Las demás partes reciben notificaciones dentro de las direcciones ya informadas dentro del expediente
- Mi representado recibe notificaciones en la dirección electrónica [asistenteadministrativo@cooquitrans.com](mailto:asistenteadministrativo@cooquitrans.com) y [gerencia@cooquitrans.com](mailto:gerencia@cooquitrans.com) y en la dirección física Calle 53 #16 -04 Barrio Arenales, Armenia, Quindio.
- La suscrita recibo notificaciones en mi oficina de abogada ubicada en el Edificio Cámara de Comercio oficina 711 de Armenia Q, teléfono 7412813 y correo electronico [abogadamarcela@hotmail.com](mailto:abogadamarcela@hotmail.com).

Del señor juez,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gloria Marcela Ballén Ceron', written in a cursive style.

**Gloria Marcela Ballén Ceron**  
CC. 41.933.921 de Armenia  
T.P. 105.542 del CSJ





**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS**  
**-Sala Quinta de Decisión-**

**Magistrado Ponente: Augusto Ramón Chávez Marín**

**S.: 126**

<b>Asunto:</b>	<b>Sentencia de segunda instancia</b>
<b>Acción:</b>	<b>Reparación Directa</b>
<b>Radicación:</b>	<b>17001-33-33-004-2014-00566-02</b>
<b>Demandantes:</b>	<b>Omaira Guerrero Largo y otros</b>
<b>Demandados:</b>	<b>Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional Compañía Colombiana de Transporte COLDETRANS S.A. Juan Augusto Ríos Osorio</b>
<b>Llamados en Garantía:</b>	<b>Allianz Seguros S.A. Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda.</b>

**Aprobado en Sala Ordinaria de Decisión, según consta en Acta nº  
033 del 26 de agosto de 2022**

Manizales, veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022).

**ASUNTO**

De conformidad con lo previsto por los artículos 243 y 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)<sup>1</sup>, corresponde a esta Sala de Decisión desatar el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional contra la sentencia del cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso de reparación directa promovido por la señora Omaira Guerrero Largo y otros contra la entidad recurrente, la Compañía Colombiana de Transporte COLDETRANS S.A.<sup>2</sup> y el señor Juan Augusto Ríos Osorio, y en el cual fueron llamados en garantía Allianz Seguros S.A. y la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda.

---

<sup>1</sup> En adelante, CPACA.

<sup>2</sup> En adelante, COLDETRANS.

LA DEMANDA

En ejercicio del medio de control interpuesto el 20 de octubre de 2014 (fls. 13 a 47, 96 y 97, C.1), la parte demandante solicitó lo siguiente:

Pretensiones

- 1. Que se declare administrativamente responsable a la parte accionada por los perjuicios causados a la parte demandante como consecuencia de la muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia, ocurrida el 12 de junio de 2013, cuando se desplazaba como conductor de la motocicleta de placas XFG83A y colisionó con el tractocamión de placas TTG-200, propiedad del señor Juan Augusto Ríos Osorio, en la vía Cauyá – La Pintada, kilómetro 31 + 750, vereda La Sierra del Municipio de Riosucio.
- 2. Que en consecuencia de la anterior declaración se condene a la parte demandada al pago de los siguientes perjuicios a favor de cada uno de los demandantes, en la siguiente proporción:

DEMANDANTE	CALIDAD EN QUE CONCURRE	PERJUICIOS MORALES (s.m.l.m.v.)	PERJUICIOS MATERIALES (Lucro Cesante)
Omaira Guerrero Largo	Compañera permanente	100	\$140'000.000
Arsoman Gutiérrez Navarrete	Padre	100	
Bertilda Rosa Valencia	Madre	100	
Álvaro Antonio Gutiérrez Valencia	Hermano		
Fernando Gutiérrez Valencia	Hermano	100	
Otoniel Gutiérrez Valencia	Hermano	100	
Uber Gutiérrez Valencia	Hermano	100	

- 3. Que se dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192, 193 y 195 del CPACA.

4. Que se ordene el pago de intereses moratorios sobre las sumas de dinero a que resulte condenada la parte accionada.

## **Hechos**

La parte accionante sustentó sus pretensiones bajo los siguientes supuestos de hecho (fls. 18 a 29, C.1), que en resumen indica la Sala y que se permite ordenar cronológicamente para darle mayor entendimiento al relato efectuado:

1. El 12 de junio de 2013, el señor Israel Gutiérrez Valencia se movilizaba en calidad de conductor de la motocicleta de placas XFG83A, marca Auteco Discovery, modelo 2009, color negro-azul, portando todos los elementos de seguridad necesarios, con dirección al Municipio de Quinchía (Risaralda), con el fin de cumplir su actividad laboral.
2. Siendo aproximadamente las 10:30 a.m., en la vía Cauyá – La Pintada, kilómetro 31 + 950, vereda La Sierra del Municipio de Riosucio, cuando el señor Israel Gutiérrez Valencia se disponía a salir de una curva cerrada por su carril de subida con doble línea, en la que se prohíbe adelantar, fue atropellado de manera intempestiva por un vehículo tractocamión que invadió el carril.
3. El vehículo tractocamión que se vio implicado es de placas TTG-200, propiedad del señor Juan Augusto Ríos Osorio, siendo COLDETRANS la empresa usufructuaria, y era conducido por el señor Julián González Valencia.
4. El señor Israel Gutiérrez Valencia sufrió graves lesiones en su humanidad, falleciendo instantáneamente en el lugar de los hechos.
5. En el sitio donde ocurrieron los hechos no existía ningún tipo de señalización que advirtiera que metros más adelante se encontraba un puesto de control de tránsito organizado por la Policía Nacional.
6. Después de la colisión, los miembros de la Policía Nacional que se encontraban cerca a 50 metros más adelante improvisando un retén, procedieron a ubicar dos conos para cerrar la vía y proteger la escena del crimen.
7. Al momento del accidente, el puesto de control sólo contaba con tres (3) agentes y cuatro (4) conos que se desplazaron a la parte superior e



inferior para cerrar la vía y levantar el cadáver del señor Israel Gutiérrez Valencia.

8. Según el Informe Policial de Accidentes de Tránsito nº 1295533, realizado por el agente de tránsito Adrián Esteban Rendón Rincón, la vía en la que ocurrió el accidente es una curva pendiente, en doble sentido, con una calzada y dos carriles, en asfalto, en buen estado y en condiciones secas.
9. El citado agente de tránsito no describió ninguna hipótesis para el accidente, como le era debido, pero sí consignó en observaciones que había un puesto de control de la Policía Nacional aproximadamente a 50 metros del lugar de los hechos.
10. De acuerdo con el Informe Pericial de Necropsia nº 2013010117614000013 del 12 de junio de 2013, el señor Israel Gutiérrez Valencia murió de manera violenta a causa de un trauma contundente que le generó un trauma craneoencefálico severo, fractura de base del cráneo e hipertensión endocraneana severa.
11. Con ocasión de la muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia se abrió investigación preliminar en la Fiscalía Segunda Seccional del Municipio de Riosucio, la cual se encuentra en etapa de indagación.
12. El señor Israel Gutiérrez Valencia nació el 7 de noviembre de 1974 en Quinchía (Risaralda); lo que significa que tenía 37 años de edad para el 12 de junio de 2013.
13. Antes de su muerte, el señor Israel Gutiérrez Valencia gozaba de un perfecto estado de salud, tanto física como psíquica.
14. Al momento de su fallecimiento, el señor Israel Gutiérrez Valencia llevaba más de 14 años conviviendo permanentemente con la señora Omaira Guerrero Largo, con quien no procreó hijos.
15. Los señores Arsoman Gutiérrez Navarrete y Bertilda Rosa Valencia contrajeron matrimonio el 3 de octubre de 1971 en Irra. De dicha unión procrearon, además del señor Israel Gutiérrez Valencia, a los siguientes hijos: Álvaro Antonio, Otoniel, Fernando y Uber Gutiérrez Valencia.
16. El señor Israel Gutiérrez Valencia trabajaba como administrador de la Asociación de Mineros La Montaña del Municipio de Quinchía (Risaralda), devengando unos ingresos mensuales de \$1'500.000, con

los cuales, una vez descontaba sus gastos personales, aportaba el 50% para la manutención de su núcleo familiar y el restante 50% para sus padres, ya que son de escasos recursos.

17. El núcleo familiar del señor Israel Gutiérrez Valencia, compuesto por su compañera permanente, padres y hermanos, se vieron profundamente afectados por su partida, dado los fuertes vínculos afectivos entre la víctima y su familia.

### **Fundamentos de derecho**

Como fundamentos de derecho la parte actora invocó el contenido de las siguientes disposiciones: Constitución Política: artículos 2, 6 y 90; y CPACA: artículos 104 y 140.

Sostuvo que la Policía Nacional omitió e inobservó reglamentos al momento de instalar un puesto de control sin reunir los requisitos mínimos para ello, pues ocupó el carril de bajada con la detención de varios vehículos y dio la orden de continuar al conductor del tractocamión, ocupando el carril en contravía y sobre una curva cerrada, en la que el señor Israel Gutiérrez Valencia no tuvo ninguna oportunidad para proteger su vida.

Manifestó que de acuerdo con la Resolución nº 0911 del 1º de febrero de 2010, contentiva del Manual de Patrullaje de la Policía Nacional, código 2CD-PR-0021 del 12 de julio de 2012, existe el siguiente procedimiento para instalar puestos de control, el cual exige un mínimo de unidades dependiendo de si la zona es urbana o rural, teniendo en todo caso presente la correcta ubicación para no perturbar el tráfico vehicular o generar riesgos para los conductores o los peatones.

Indicó que en la especificación técnica ET-PN-GRUCA-DIRAF.195-A4 de la Policía Nacional, se encuentran las descripciones de los elementos que deben emplearse para los puestos de control, dentro de los cuales se destacan los conos, las paletas y las vallas.

Refirió que la víctima del accidente no tuvo ninguna culpa en los hechos que ocasionaron su muerte.

Consideró que la omisión de la Policía Nacional respecto del Manual de Patrullaje, fue determinante en la muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia; siendo igualmente responsables tanto el propietario del vehículo tractocamión como la compañía COLDETRANS usufructuaria del mismo.

## CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Actuando dentro del término legal conferido para tal efecto y obrando debidamente representadas, la parte demandada contestó la demanda de la manera que se indica a continuación.

**Juan Augusto Ríos Osorio (fls. 132 a 138, C.1) y COLDETRANS (fls. 202 a 208, ibidem)**

Se opusieron a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes excepciones: ***“HECHO DE UN TERCERO”***, en tanto el accidente y, por ende, sus consecuencias, fue provocado por la Policía Nacional al instalar un puesto de control sin reunir los requisitos mínimos para llevar a cabo dicha función, ocupando el carril de bajada con la detención de varios vehículos y dando la orden de continuar al conductor del camión, ocupando el otro carril sobre una curva cerrada; ***“CONCURSO DE LA VICTIMA (sic) DEL DAÑO”***, en la medida en que el señor Israel Gutiérrez Valencia obró con imprudencia al conducir su motocicleta excediendo los límites de velocidad, lo cual le impidió conservar su carril y detener su vehículo para evitar el impacto; ***“INEXISTENCIA DE LOS DAÑOS ALEGADOS POR LOS DEMANDANTES”***, ya que las afirmaciones de la parte demandante al respecto no tienen soporte en el expediente; ***“INEXISTENCIA DE PRUEBA DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS DEMANDADOS”***, en la medida en que la parte demandante se limitó a relatar someramente el evento pero no acreditó en debida forma el vínculo civil de responsabilidad entre la conducta desplegada por el demandado y el perjuicio sufrido por los actores; e ***“(…) INNOMINADA”***, respecto de cualquier hecho que se acredite en el proceso y que constituyan una excepción.

**Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional (fls. 190 a 195, C.1)**

Manifestó su oposición a las súplicas de la parte actora, aduciendo que fue el señor Israel Gutiérrez Valencia quien invadió el carril por el cual debía circular el tractocamión, toda vez que el punto de impacto fue en la persiana de dicho vehículo, justo al lado izquierdo del radiador.

Indicó que el retén policial se encontraba a más de 70 metros de la curva donde perdió la vida el señor Israel Gutiérrez Valencia.

Señaló que aunque el puesto de control no se realizó en los términos que indicó la parte actora, lo cierto es que aquél fue autorizado por el Grupo Unidad de Intervención y Reacción (UNIR) de la Policía Nacional.

Afirmó que la velocidad a la cual viajaba el señor Israel Gutiérrez Valencia fue un elemento preponderante en la ocurrencia del hecho.

Consideró que no existe fundamento para la imputación del daño a la entidad, ya que se presentó una culpa exclusiva y determinante de la víctima.

Formuló como medios exceptivos los que denominó: ***“LA CULPA EXCLUSIVA Y DETERMINANTE DE LA VÍCTIMA”***, teniendo en cuenta que, de un lado, conforme al punto de impacto, la víctima invadió el carril contrario, tal como se desprende del croquis levantado con ocasión del accidente de tránsito, y de otro, la posición de la víctima sugiere que el motociclista se desplazaba a una velocidad considerable que lo sacó incluso de su carril; y ***“ROMPIMIENTO DEL NEXO CAUSAL”***, como quiera que fue la víctima, quien al tomar la curva a considerable velocidad, terminó ocupando el carril contrario por donde circulaba el tractocamión, impactándolo en la persiana parte izquierda.

### **LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

El señor Juan Augusto Ríos Osorio llamó en garantía a Allianz Seguros S.A., con fundamento en la póliza de autos n° 021226541/41 suplemento 1, con vigencia entre el 20 de abril de 2013 y el 19 de abril de 2014 (fls. 140 y 141, C.1).

Con auto del 25 de febrero de 2016 (fl. 233, C.1), el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales admitió el llamamiento en garantía.

### **DENUNCIA DEL PLEITO**

COLDETRANS denunció el pleito a la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda., toda vez que el tractocamión implicado transportaba carga de dicha empresa y, por lo tanto, tiene calidad de solidario y civilmente responsable (fls. 209 a 211, C.1).

A través de auto del 28 de julio de 2016 (fl. 304, C.1A), el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales admitió la solicitud hecha como un llamamiento en garantía.

### **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y DE LOS LLAMAMIENTOS EN GARANTÍA**

Actuando dentro del término conferido y obrando debidamente representadas, las llamadas en garantía contestaron tanto la demanda como los llamamientos en garantía de la manera que se indica a continuación:

**Allianz Seguros S.A. (fls. 282 a 303, C.1A)**

Se opuso a las pretensiones de la demanda, y coadyuvó la oposición que de las mismas hicieron COLDETRANS y el señor Juan Augusto Ríos Osorio en las respectivas contestaciones de la demanda, tendiente a desvirtuar los hechos de la demanda y a demostrar la ausencia de responsabilidad de tales demandados.

Propuso los siguientes medios exceptivos: ***“NO SE ENCUENTRA DEMOSTRADO QUE EL VEHICULO (sic) DE PLACAS TTG – 200, FUE EL CAUSANTE DEL ACCIDENTE ACAECIDO”***, pues los vehículos involucrados desarrollaban la misma actividad peligrosa y, por lo tanto, debe acreditarse cuál de los dos tuvo la influencia causal decisiva en la producción del hecho dañoso; carga que corresponde a la parte actora y que no se cumplió en este caso; ***“(…) PRESENCIA DE CAUSAS EXCLUYENTES DE CULPABILIDAD A FAVOR DEL CODEMANDADO JUAN AUGUSTO RIOS (sic) OSORIO”***, en la medida en que en la demanda se da a entender que la causante del siniestro fue la Policía Nacional y no el demandado, ya que fue imprudente y negligente no sólo en la instalación del retén sino en dar la vía a conductores en el otro carril y en una curva demasiado cerrada; ***“HECHO DE UN TERCERO”***, por cuanto el accidente se debió a la Policía Nacional; ***“CULPA DE LA VICTIMA (sic) Y SU EXPOSICION (sic) IMPRUDENTE AL RIESGO”***, ya que el señor Israel Gutiérrez Valencia iba conduciendo su motocicleta a una velocidad excesiva no permitida, lo que dio lugar a que no conservara su carril y no pudiera detener su vehículo a fin de evitar la colisión con el camión; ***“DILIGENCIA Y CUIDADO”***, pues el conductor del camión se encontraba en perfectas condiciones físicas para conducir, al paso que el vehículo mismo estaba en buen estado para ser utilizado en la actividad peligrosa; ***“AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL CODEMANDADO JUAN AUGUSTO RIOS (sic) OSORIO, DEBIDO AL ROMPIMIENTO CAUSAL COMO CONSECUENCIA DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA (sic)”***, tal como se extrae de las pruebas allegadas al expediente y que evidencian que el señor Israel Gutiérrez Valencia fue quien inobservó las normas de tránsito; ***“(…) LIBERATIVA DEL DEMANDADO JUAN AUGUSTO RIOS (sic) OSORIO, POR PRESENCIA DE UNA CAUSA EXTRAÑA”***, cual fue el comportamiento imprudente y contrario a las normas por parte del conductor de la motocicleta; ***“COMPENSACION (sic) DE CULPAS ENTRE LAS PARTES”***,

teniéndose en cuenta la concurrencia de causas que confluyeron en el hecho dañoso; ***“AUSENCIA DE ELEMENTOS GENERADORES DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL”***, dado que el conductor del tractocamión no infringió norma alguna para la conducción de vehículos; ***“LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES RECLAMADOS POR LOS DEMANDANTES SON INEXISTENTES Y/O SE ENCUENTRAN AMPLIAMENTE SOBREESTIMADOS”***, conforme se desprende al compararse con la sentencia de unificación del Consejo de Estado sobre la materia; ***“REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN. EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR MUERTE O LESIONES A UNA PERSONA, SOLO OPERA EN EXCESO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE TRÁNSITO (SOAT)”***, de conformidad con el artículo 11 del Decreto 1032 de 1991, que autoriza a imputar las indemnizaciones por el SOAT al mayor valor que le corresponde pagar al responsable; y ***“CARGA DE LA PRUEBA”***, atendiendo lo previsto por el artículo 167 del Código General del Proceso (CGP)<sup>3</sup>.

En punto al llamamiento en garantía, la aseguradora propuso las siguientes excepciones: ***“PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO”***, en los términos del artículo 1.081 y 1.131 del Código de Comercio; ***“LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA ALLIANZ SEGUROS S.A. SE ENCUENTRA LIMITADA”*** por el valor de la suma asegurada establecida en el contrato de seguro, por encima de la cual no puede proferirse condena; ***“EXISTENCIA DE DEDUCIBLE”***, según lo pactado en la póliza de vehículos; y ***“FALTA DE CONFIGURACION (sic) ACTUAL DEL SINIESTRO”***, teniendo en cuenta que no se encuentran demostrados los perjuicios reclamados en la demanda.

#### **Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda. (fls. 319 a 338, C.1A)**

Sostuvo que no le constan los hechos de la demanda y que de llegar a ser ciertos, ello por sí solo no generaría la pretendida solidaridad y responsabilidad civil de la llamada en garantía, pues debe probarse que fue la carga que transportaba el tractocamión la causante del daño y de sus consecuencias.

Manifestó que la simple orden de despacho de la mercancía no genera para la cooperativa la calidad de guardiana del vehículo ni su explotadora económica, su usufructuaria, su administradora o su poseedora.

Formuló los siguientes medios exceptivos: ***“INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD”***, por cuanto entre la cooperativa y la llamante en garantía

---

<sup>3</sup> En adelante, CGP.

no existe ni ha existido ningún tipo de relación o contrato que pueda derivar en solidaridad civil por los daños o perjuicios que ocasionen los vehículos que se encuentran bajo su cuidado y administración, ni tampoco respecto del señor Juan Augusto Ríos Osorio (propietario del vehículo) o el señor Julián González Valencia (conductor); “(...) **AUSENCIA DE CULPA**”, fundada en la falta de obligación de la cooperativa de realizar mantenimiento preventivo, correctivo y de conservación del tractocamión implicado, la cual corresponde en su integridad a su propietario; “**HECHO DE UN TERCERO**”, en la medida en que el conductor involucrado no tiene ningún vínculo con la cooperativa; al paso que la carga transportada no fue la causante del hecho y sus consecuencias; e “**INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD**”, ya que no existe dependencia o subordinación de ninguna índole entre el vehículo despachado con la carga, su propietario y su conductor con la llamada en garantía.

### LA SENTENCIA APELADA

El 5 de diciembre de 2019, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales dictó sentencia en el asunto de la referencia (fls. 439 a 454, C.1B), a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que la imputación jurídica por el accidente de tránsito en el que perdió la vida el señor Israel Gutiérrez Valencia se atribuye únicamente a la Policía Nacional, pues ésta, de forma antitécnica y aumentando el riesgo propio de la conducción de vehículos automotores, instaló un retén ocupando de tal manera la vía pública que obligó a quienes transitaban por la misma a ocupar el carril contrario de forma peligrosa.

En efecto, indicó que si el puesto de control no hubiera existido, el tractocamión no hubiera cambiado de rumbo sobre la vía e invadido el carril contrario, con las consecuencias ya conocidas.

Adujo que la curva por la cual transitaba el señor Israel Gutiérrez Valencia era cerrada, de 90 grados, sin que le permitiera observar que por el carril que normativamente le correspondía se desplazaba un tractocamión en sentido contrario, impactando de frente contra éste sin poder tener ninguna reacción para evitarlo.

Refirió que conforme al Manual de Patrullaje Urbano de la Policía Nacional (Resolución nº 0911 de 2010), los puestos de control deben ubicarse sin perturbar el tráfico vehicular o generar riesgos para los conductores o peatones.

Hizo alusión a lo manifestado por los testigos que rindieron declaración en el proceso, los cuales dieron cuenta de lo siguiente: que para adelantar el retén policial los vehículos debían invadir el carril contrario; que los policiales no hicieron uso de señales de pare o siga para controlar los automotores que transitaban por el sector; que ningún policía dio vía o detuvo al tractocamión accidentado; que no había personal señalizando en ambos extremos del puesto de control; que el retén estaba mal ubicado por su cercanía con una curva que impedía la visibilidad.

Señaló que el daño no es imputable al señor Juan Augusto Ríos Osorio ni a COLDETRANS, dado que no se demostró que éstos incumplieran reglamentos o regulaciones en relación con el sistema vial y que hubiesen incidido jurídicamente en la materialización del accidente de tránsito.

Adujo que la policía de carreteras tenía el deber de efectuar la señalización sobre peligro y/o precaución, de conformidad con la obligación impuesta de asegurar la seguridad de la vía con el fin de que dicha carretera pudiera funcionar adecuadamente y que no constituyera un peligro para todo aquel que la transitara.

Acotó que aunque el tractocamión fue quien materialmente causó el accidente, lo cierto es que el impacto se produjo cuando aquél estaba regresando a su carril reglamentario, luego de que fuera obligado a asumir esta acción por un retén de la policía de carreteras que no previó las consecuencias de su ubicación.

Indicó que no se demostró en el expediente que el conductor de la motocicleta hubiese violado reglamentos o normas de seguridad para la conducción de este tipo de vehículos, con incidencia factual en la materialización del daño.

A título pues de indemnización, el Juez de primera instancia reconoció perjuicios morales a favor de los demandantes, por haberse acreditado no sólo que el señor Israel Gutiérrez Valencia tenía una unión marital de hecho con la señora Omaira Guerrero Largo, sino que existían vínculos consanguíneos con los demandantes, que permiten inferir que la muerte de la víctima les generó gran tristeza y congoja. La liquidación de tales perjuicios se realizó adoptando los límites señalados en sentencia de unificación del Consejo de Estado.

De otra parte, reconoció perjuicios materiales únicamente a favor de la compañera permanente de la víctima, liquidados sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 25% por prestaciones



sociales, en tanto consideró que no existía prueba certera de que el señor Israel Gutiérrez Valencia devengara \$1'500.000 por su actividad en la Asociación Mineros La Montaña.

Finalmente condenó en costas acudiendo a un criterio objetivo.

### **RECURSO DE APELACIÓN**

Inconforme con la decisión adoptada por la Juez *a quo* y actuando dentro del término legal, la Policía Nacional interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia (fls. 456 a 460, C.1B), de la siguiente manera.

Manifestó que el conductor del tractocamión fue quien invadió el carril contrario por el que se desplazaba la víctima. Añadió que si bien sobre la vía se encontraba un puesto de control, éste no puede considerarse responsable de la infracción de tránsito que cometiera el referido conductor, pues actuó de forma imprudente al adelantar en una vía que no le era permitido y además esquivó el retén desobedeciendo y haciendo caso omiso a la señal de precaución y de cierre que representaba el cono.

Indicó que la Policía Nacional no obligó al conductor del tractocamión a invadir el carril contrario; quien además tenía conocimiento que al estar en una vía con señal de doble línea, le era prohibido adelantar por el carril contrario, y máxime estando a tan pocos metros de una curva y movilizándose en un vehículo de gran tamaño.

Expuso que la colisión era un acto más predecible para el conductor del tractocamión, por lo que le era exigible a éste que detuviera su marcha y esperara que los vehículos que estaban siendo registrados continuaran o que un miembro de la Policía Nacional lo autorizara a seguir.

Cuestionó que sólo se responsabilice a la Policía Nacional de lo ocurrido, desconociendo que fue el conductor del tractocamión el que infringió la norma nacional de tránsito.

Solicitó entonces revocar la providencia recurrida, ya que la causa directa del accidente de tránsito no fue la ubicación del puesto de control sino la imprudencia del conductor del tractocamión.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA**

**Parte demandante (fls. 10 a 18, C.5)**

Inicialmente hizo referencia a las razones por las cuales considera que se encuentran acreditados los perjuicios morales y materiales reclamados en la demanda.

A continuación, sostuvo que del material probatorio allegado se desprende la falla en el servicio por parte de la Policía Nacional, pues ubicó un retén sin señalización alguna, cerca de una curva, lo que ocasionó que el señor Israel Gutiérrez Valencia fuera atropellado por el tractocamión.

Expuso que el propietario del vehículo y la empresa usufructuaria del mismo son igualmente responsables.

**Allianz Seguros S.A. (fl. 20, C.5)**

Manifestó que toda la responsabilidad recae en la Policía Nacional, por cuanto no tomó las más elementales y mínimas precauciones para la instalación del retén.

**Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional (fls. 22 a 25, C.5)**

Reiteró, en esencia, los planteamientos expuestos en el recurso de apelación.

**COLDETRANS S.A., Juan Augusto Ríos Osorio y la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda.**

Guardaron silencio.

**CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO**

El señor Agente del Ministerio Público no rindió concepto en esta oportunidad.

**TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA**

**Reparto.** Para conocer del recurso de alzada, el expediente fue repartido a este Tribunal el 6 de marzo de 2020, y allegado el 15 de julio del mismo año al Despacho del Magistrado Ponente de esta providencia (fl. 1, C.5).

**Admisión y alegatos.** Por auto del 15 de julio de 2020 se admitió el recurso de apelación y se ordenó correr traslado para alegatos en caso de no existir solicitud de pruebas por practicar en segunda instancia (fl. 1, C.5). Dentro del término otorgado, la parte demandante, Allianz Seguros S.A. y la Policía

Nacional alegaron de conclusión (fls. 10 a 18, 20 y 22 a 25, ibidem). COLDETRANS S.A., Juan Augusto Ríos Osorio y la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda. guardaron silencio. El Ministerio Público no rindió concepto en esta oportunidad.

**Paso a Despacho para sentencia.** El 9 de septiembre de 2020 el proceso ingresó a Despacho para sentencia (fl. 26, C.5), la que se dicta en seguida, atendiendo el orden de ingreso del respectivo proceso para tales efectos.

## **CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

Procede el Tribunal a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Policía Nacional contra la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, en los estrictos términos en que aquél fue formulado.

### **Problema jurídico**

La cuestión que debe resolverse en el *sub examine* se centra en resolver las siguientes preguntas:

- *¿La muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia le es jurídicamente imputable a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y/o al señor Juan Augusto Ríos Osorio y a COLDETRANS S.A.?*
- *En caso de que se configure responsabilidad por parte del señor Juan Augusto Ríos Osorio y de COLDETRANS S.A., ¿Allianz Seguros S.A. y la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda. están obligadas a reembolsar el valor de una eventual condena?*

Para despejar los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes aspectos: **i)** elementos generales de responsabilidad del Estado; **ii)** régimen de responsabilidad aplicable; **iii)** hechos probados; **iv)** acreditación de los elementos del régimen de responsabilidad en el caso concreto; **v)** sobre el reconocimiento y liquidación de perjuicios; y **vi)** responsabilidad de los llamados en garantía.

### **1. Elementos generales de la responsabilidad**

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la

omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al actual artículo 140 del CPACA que consagra el medio de control de reparación directa, cuyo ejercicio dio origen al presente proceso y que establece la posibilidad que tiene el interesado de demandar la reparación del daño cuando su causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

La responsabilidad del Estado puede surgir en virtud de diversos títulos de imputación tales como la falla del servicio, el daño especial, o la denominada teoría del riesgo, los cuales obedecen a diversas situaciones en las que el Estado, a través de sus autoridades, está llamado a responder por la producción de un daño antijurídico.

Atendiendo el título de imputación aplicable en cada caso, se constatará la existencia de los siguientes elementos que estructuran la responsabilidad de la administración pública por sus hechos u omisiones; aspectos éstos que conviene dilucidar a manera de exordio.

La jurisprudencia y la doctrina, a partir de las sucesivas reformas constitucionales y legales que se han dado en Colombia, han señalado que para deducir la responsabilidad de la administración pública por sus hechos u omisiones, deben reunirse tres condiciones:

Como primer elemento de la responsabilidad pública, el *daño o perjuicio* por el cual se reclama la indemnización debe tener la característica de ser resarcible, indemnizable, teniendo en cuenta que no todos lo son; algunos perjuicios no son resarcibles por parte de quien los ocasiona, como sucede cuando la persona que los padece está obligada a asumir las consecuencias en virtud del mandato legal o constitucional, impuesto en función del interés general, cuando éste prima sobre el interés individual.

El *hecho de la administración* se concreta en una actuación u omisión de los agentes del Estado, cuando obran u omiten obrar en ejercicio de sus funciones públicas, es decir, en representación de la administración, salvo cuando se configura lo que en la doctrina y jurisprudencia se conoce como la *falta personal del agente*, caso en el cual, responde el empleado total o parcialmente por los perjuicios derivados del hecho.

Finalmente entre la acción u omisión y el perjuicio debe mediar una *relación de causalidad*, lo cual impone al actor el deber de demostrar que el perjuicio provino exactamente de las actuaciones u omisiones de la administración, con un nexo de causa a efecto, el que se rompe, como también lo ha dicho la

jurisprudencia, cuando se prueba una causa extraña a la administración en la producción del daño, como la culpa de la propia víctima, el hecho de un tercero o una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito.

Por regla general, corresponde a la parte demandante la comprobación plena de los hechos de su demanda, en los términos del artículo 167 del Código General del Proceso (CGP)<sup>4</sup>, es decir, de los tres elementos que permiten deducir la responsabilidad.

## 2. Régimen de responsabilidad aplicable

Para definir el régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto es necesario remitirse al texto mismo de la demanda y a la manera en la cual se estructuraron las imputaciones relacionadas con la responsabilidad extracontractual de la Administración; ello no obstante la aplicación del aforismo jurídico “*venite ad factum, iura novit curia*” (dame los hechos, el Juez dará el Derecho), que significa que en materia de acciones de reparación directa se permite al Juez de la causa acudir al régimen de responsabilidad que más se ajuste a los hechos que dan origen al proceso, sin que se esté limitado a lo expuesto por el actor o los sujetos procesales<sup>5</sup>.

Las imputaciones jurídicas de la demanda realizadas contra la parte demandada aluden a la omisión en la que supuestamente incurrió la Policía Nacional al momento de instalar un puesto de control sin reunir los requisitos mínimos para ello, ocupando parte de uno de los carriles de la vía, provocando que el conductor del tractocamión propiedad del señor Juan Augusto Ríos Osorio y afiliado a COLDETRANS S.A., ocupara en contravía, sobre una curva cerrada, el carril por el que se movilizaba el señor Israel Gutiérrez Valencia, lo que generó la colisión de ambos vehículos y el fallecimiento del motociclista.

Conforme a las condiciones descritas en la *causa petendi*, considera este Tribunal que el asunto debe definirse con fundamento en el régimen de responsabilidad por falla en el servicio, criterio de imputación que procede frente a supuestos en los cuales se analiza la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños en cuya ocurrencia ha sido determinante el deficiente funcionamiento del servicio, porque no funcionó

---

<sup>4</sup> En adelante, CGP.

<sup>5</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia del 14 de agosto de 2008. Radicación número: 47001-23-31-000-1995-03986-01(16413).

cuando ha debido hacerlo, o lo hizo de manera tardía o equivocada<sup>6</sup>.

Debe precisarse que no obstante que en este caso se presentó colisión de dos vehículos que en principio daría lugar a que su estudio se hiciera a través del régimen de responsabilidad por riesgo excepcional, ya que se trata de una actividad peligrosa, lo cierto es que la atribución del daño a la parte demandada no se hace en desarrollo de la actividad riesgosa como tal, sino de una supuesta falla en la prestación del servicio que generó a su vez el accidente de tránsito en el que murió el señor Israel Gutiérrez Valencia.

Para establecer entonces la imputabilidad al Estado y por atracción a particulares, se requiere demostrar, además del daño, la falla en el servicio y el nexo causal entre ambos.

### **3. Hechos acreditados**

En aras de establecer si los elementos del régimen de responsabilidad aplicable en este asunto se encuentran configurados, procede esta Sala de Decisión a reseñar preliminarmente las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos que dieron origen a esta demanda y que se encuentran acreditados en el expediente.

#### **a) Identificación de la vía y características de la misma**

Determinar con exactitud las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que acaecieron los hechos que se imputan a la parte demandada exige establecer primeramente y con certeza la vía sobre la cual ocurrió el accidente que dio origen a esta demanda.

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente<sup>7</sup>, se encuentra demostrado que la vía en la que sucedieron los hechos por los cuales se demanda, corresponde a la vía Cauyá – La Pintada, kilómetro 31 + 950 metros, en el sector conocido como La Sierra, jurisdicción del Municipio de Riosucio.

---

<sup>6</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Sentencia del 16 de agosto de 2007. Radicado número: 41001-23-31-000-1993-07585-01(30114).

<sup>7</sup> Al respecto, se advierten las siguientes:

- Actuación del Primer Respondiente –FPJ-4– (fls. 6 y 7, C.4).
- Informe Policial de Accidentes de Tránsito n° C-1295533, diligenciado el 12 de junio de 2013 a las 10:30 a.m. (fls. 34 a 36, C.4).
- Inspección Técnica a Cadáver –FPJ-10– del 12 de junio de 2013 (fls. 18 a 21, C.4).
- Informe Ejecutivo –FPJ-3– del 12 de junio de 2013 (fls. 3 a 5, C.4).
- Libro de guardia (fls. 165 a 168, C.1).
- Poligrama n° 509 del 12 de junio de 2013 (fl. 174, C.1).

Atendiendo lo indicado en la prueba documental<sup>8</sup> y testimonial<sup>9</sup> recaudada en el proceso, se acreditó que la vía referida era de una calzada, con dos carriles, doble sentido vial, pendiente, curva y luego recta, en asfalto en buen estado, en condición seca, sin iluminación artificial, con buena iluminación y sin demarcación horizontal que permitiera adelantar vehículos.

b) Instalación de un puesto de control en la vía por parte de la policía de carreteras

De conformidad con el Oficio n° 1117 SETRA – SOAPO 29 del 19 de junio de 2015 (fl. 200, C.4), expedido por el Comandante Seccional Tránsito y Transporte de Caldas, los conceptos de área de prevención, puesto de control y retén difieren en lo siguiente:

***Área de prevención:** Punto sobre la malla vial nacional donde se ubica una patrulla de la policía de tránsito y transporte encargada de transmitir a la ciudadanía recomendaciones y mensajes educativos, buscando influir positivamente sobre la conducta de los usuarios de las vías, a través de los programas y campañas desarrollados por la Dirección de Tránsito y Transportes (instructivo 073 PLANE-DITRA del 25 de Junio del 2008 “CONCEPTUALIZACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO DE CARRETERAS”, teniendo en cuenta el mismo como un documento doctrinal que unifica los criterios de las actividades del servicio policial de Tránsito y Transporte, en el marco de la aplicación de los procesos misionales).*

***Puesto de control:** Actividad del servicio de Policía que tiene como objetivo realizar el registro a personas, vehículos y solicitar antecedentes, para contrarrestar acciones delincuenciales, con el propósito de lograr una convivencia segura y pacífica.*

***Retén:** De acuerdo a lo estipulado en el Código Nacional de tránsito (Ley 769 de 2002) en su artículo 2, define: “Retén: Puesto de control instalado técnicamente por una de las autoridades legítimamente constituidas de la Nación”.*

---

<sup>8</sup> De las características de la vía dieron cuenta los siguientes documentos:

- Informe Policial de Accidentes de Tránsito n° C-1295533, diligenciado el 12 de junio de 2013 a las 10:30 a.m. (fls. 34 a 36, C.4).
- Informe Ejecutivo –FPJ-3- del 12 de junio de 2013 (fls. 3 a 5, C.4).

<sup>9</sup> Sobre el particular, pueden consultarse las declaraciones de los señores Adrián Esteban Rendón Rincón (minuto 00:08 a finalizar el sexto audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A y séptimo audio ibidem) y Julián González Valencia (octavo audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A).

Aun cuando en la investigación penal adelantada se observa que la Policía Nacional discutió que no había establecido un puesto de control sino un área de prevención, lo cierto es que en el marco de la citada investigación se determinó que efectivamente la entidad accionada instaló un puesto de control en la vía donde acaecieron los hechos que más adelante se precisarán.

En efecto, según consta en el libro de guardia (fls. 165 a 168, C.1), a las 7:30 a.m. del 12 de junio de 2013, los policiales Orozco Flórez, Rendón Rincón, González López, Fernández Rivera, Acevedo Pulgarín y Mejía Zuluaga, salieron con todos los elementos para el servicio, con destino al kilómetro 32 de la vía Cauyá – La Pintada, con el fin de realizar puesto de control.

La citada anotación guarda coherencia con la observación hecha en el Informe Policial de Accidentes de Tránsito nº C-1295533 del 12 de junio de 2013 (fls. 34 a 36, C.4), referente a que cerca del lugar de los hechos se encontraba un puesto de control de la Policía Nacional SETRA – DECAL UNIR 21.2 (fl. 35, C.4).

Adicional a lo anterior, con base en lo narrado por los uniformados que estuvieron en la zona para el día de los hechos, se concluye que las actividades que estaban efectuando correspondían a las de registro y control, esto es, a un puesto de control y no a un área de prevención.

c) Requisitos mínimos y procedimiento para la instalación de un puesto de control en una vía

Conforme al Oficio nº 2173/SETRA – SOAPO 29 del 1º de octubre de 2013 (fl. 135, C.4), suscrito por el Comandante Seccional Tránsito y Transporte de Caldas, el procedimiento para instalar y ejecutar un puesto de control se encuentra estandarizado en la Suite Visión Empresarial SVE, con código 2CD-PR-0021 del 12 de julio de 2012, el cual fue anexado con dicha comunicación (fls. 136 a 139, C.4) y del que se extrae lo siguiente:

- El objetivo del puesto de control es realizar el registro a personas, vehículos y solicitar antecedentes, para contrarrestar acciones delincuenciales, con el propósito de lograr una convivencia segura y pacífica.
- El puesto de control debe tener previa orden de servicios; no puede exceder de 2 horas en un mismo lugar; debe estar conformado como mínimo por 8 unidades en la zona urbana y 10 unidades en la zona



rural; y tiene que ser ubicado en un lugar visible y apropiado para no generar congestión vehicular.

- El puesto de control debe establecerse teniendo presente la correcta ubicación sin perturbar el tráfico vehicular o generar riesgos para los conductores o peatón, distribuyendo al personal según las funciones establecidas durante la formación para salir al servicio.
- Debe informarse al CAD o radio operador el inicio y ubicación del puesto de control, utilizando todos los medios logísticos requeridos.
- El ingreso de los vehículos al puesto de control debe hacerse de forma selectiva, dando la señal de pare, y teniendo en cuenta la cantidad que pueden atender los policías integrantes del puesto de control.
- Debe haber un policial asignado al manejo de la señal de pare o siga, otros policiales encargados de la verificación de personas y registro a vehículos, y un policial más para diligenciar las planillas.
- En el esquema de instalación de un puesto de control se observa que a 50 o 100 metros de la entrada al puesto de control debe haber policiales a cargo de la seguridad y de la apertura, así como otros encargados de la requisa y del tránsito.

Tal como se indicó en el Oficio nº 1117 SETRA – SOAPO 29 del 19 de junio de 2015 (fl. 200, C.4), suscrito por el Comandante Seccional Tránsito y Transporte de Caldas, los requisitos mínimos del puesto de control, son:

***Personal mínimo: 0-1-7 Policiales.***

*Como mínimo el puesto de control estará conformado por ocho (08) unidades en la zona urbana o cabecera municipal y diez (10) unidades en la zona rural, debe ser rotativo (dos horas por lugar), ubicándolo en un lugar visible y apropiado para no generar congestión vehicular.*

- a) ***Seguridad:*** Unidades encargadas de la seguridad se ubican en los extremos del puesto de control y velan por la integridad física del personal que conforma el puesto de control, permaneciendo alerta para evitar ataques delincuenciales externos como hostigamientos.
- b) ***Persecución e Inmovilización:*** El conductor de la patrulla permanece al lado del vehículo para reaccionar ante una eventual fuga y manipula la tabla de seguridad con el fin de detener el vehículo en fuga.
- c) ***Control de Tránsito:*** El conductor de la motocicleta (Agente de Tránsito), aplica la normatividad y reacciona ante fuga de vehículo.

- d) **Regulación de Tránsito y Selección de Vehículos:** El palettero se ubica al inicio del puesto de control y hace las indicaciones al vehículo escogido para ingresar al puesto de control.
- e) **Inspección y Registro:** Unidades encargadas de requisar personas y registrar vehículos. Para tal fin deben iniciar con un saludo respetuoso, identificarse ante los ocupantes del vehículo, explicar la finalidad del servicio y solicitarles que se bajen del mismo para realizarles la requisa.
- f) **Seguridad Requisa y Registro:** Unidad encargada de la seguridad de quienes registran y requisan.
- g) **Control y Supervisión:** El señor Comandante del puesto de control se encarga de supervisar al personal en sus labores y de reportar a la central de radio las placas y documentos de las personas y vehículos objeto de la requisa y registros, para verificar antecedentes.

**Ubicación:** Los puestos de control deben ser ubicados en sitios que brinden seguridad y tranquilidad al personal y usuarios de la red vial nacional.

- d) Desarrollo del puesto de control instalado en la vía Cauyá – La Pintada, kilómetro 32

Como se indicó anteriormente, el 12 de junio de 2013, seis (6) uniformados de la Policía Nacional se dirigieron al kilómetro 32 de la vía Cauyá – La Pintada, con el fin de realizar puesto de control en la zona. De lo anterior se dejó constancia únicamente en el libro de guardia (fls. 165 a 168, C.1), esto es, no se expidió previamente orden de servicios para realizar tal actividad.

Pese a lo establecido en el procedimiento correspondiente y teniendo en cuenta que se trataba de una zona rural, las unidades policiales asignadas no fueron las necesarias, esto es, 10 policías.

En relación con la ubicación del puesto de control, sólo consta en el expediente que el mismo se instaló en una recta, seguida de una curva pronunciada que se hallaba más o menos a media cuadra<sup>10</sup> o a 50 metros<sup>11</sup>.

Quedó demostrado igualmente en el proceso que el citado puesto de control se ubicó en parte del carril que conducía de Anserma a Riosucio, para lo cual se usaron como señales únicamente dos conos a lado y lado.

---

<sup>10</sup> Tal como lo informó en su declaración el policía Jhon Jaime Orozco Flórez (minuto 1:12 a finalizar el tercer audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A, cuarto audio y quinto audio ibidem).

<sup>11</sup> Según se consignó en el acápite de observaciones del Informe Policial de Accidentes de Tránsito nº C-1295533 del 12 de junio de 2013 (fls. 34 a 36, C.4), por referencia que le hicieron los testigos de los hechos al policía Adrián Esteban Rendón Rincón (minuto 00:08 a finalizar el sexto audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A y séptimo audio ibidem).

Ninguno de los policías que integraban el puesto de control fue asignado a manejar señal de pare o siga, y tampoco a conducir el tránsito vehicular durante el tiempo que permanecieron en el sector.

e) Accidente de tránsito

Encontrándose en ejecución el puesto de control instalado por la Policía Nacional en los términos descritos anteriormente, el señor Julián González Valencia transitaba por la vía en dirección Anserma – Riosucio, conduciendo el tractocamión de placas TTG200, propiedad del señor Juan Augusto Ríos Osorio y afiliado con administración y guarda en la actividad a COLDETRANS S.A.

Se acreditó en el expediente que siendo aproximadamente las 10:30 a.m., esto es, excediendo el límite de las dos (2) horas permitidas para efectuar puesto de control en una zona, los policías que lo conformaban estaban registrando cuatro (4) vehículos al mismo tiempo: una cama baja o niñera que transportaba una retroexcavadora, dos vehículos que la escoltaban y un camión; superando la capacidad para realizar los registros, teniendo en cuenta el número de uniformados que estaban presentes.

En tanto no se le solicitó detenerse en el puesto de control por parte de la policía de carreteras, y dado que, como se indicó anteriormente, ningún policía fue designado para manejar señal de pare o siga y tampoco para conducir el tránsito vehicular durante el tiempo que durara la retención en el puesto de control, el conductor del tractocamión continuó su ruta, para lo cual procedió a invadir el carril contrario, con el fin de superar el puesto de control donde estaban los cuatro (4) vehículos mencionados.

Realizando dicha maniobra, antes de llegar a la curva que se encontraba próxima, teniendo el cabezote del tractocamión casi de nuevo en su carril pero el tráiler del mismo todavía en el carril contrario, el conductor de dicho vehículo se encontró de frente con una motocicleta conducida por el señor Israel Gutiérrez Valencia, quien no tuvo oportunidad alguna de reaccionar a la colisión y falleció instantáneamente en el lugar.

De la manera en la cual se produjo el accidente de tránsito mencionado, dan cuenta los siguientes elementos probatorios:

- En el libro de minuta de guardia y registro de novedades se consignó a las 10:30 a.m. que finalizando el área de prevención instalada en el sector del kilómetro 31 + 800 metros de la vía Cauyá – La Pintada, un vehículo tipo tractocamión había colisionado con un motociclista, el

cual perdió la vida instantáneamente (fl. 38, C.4).

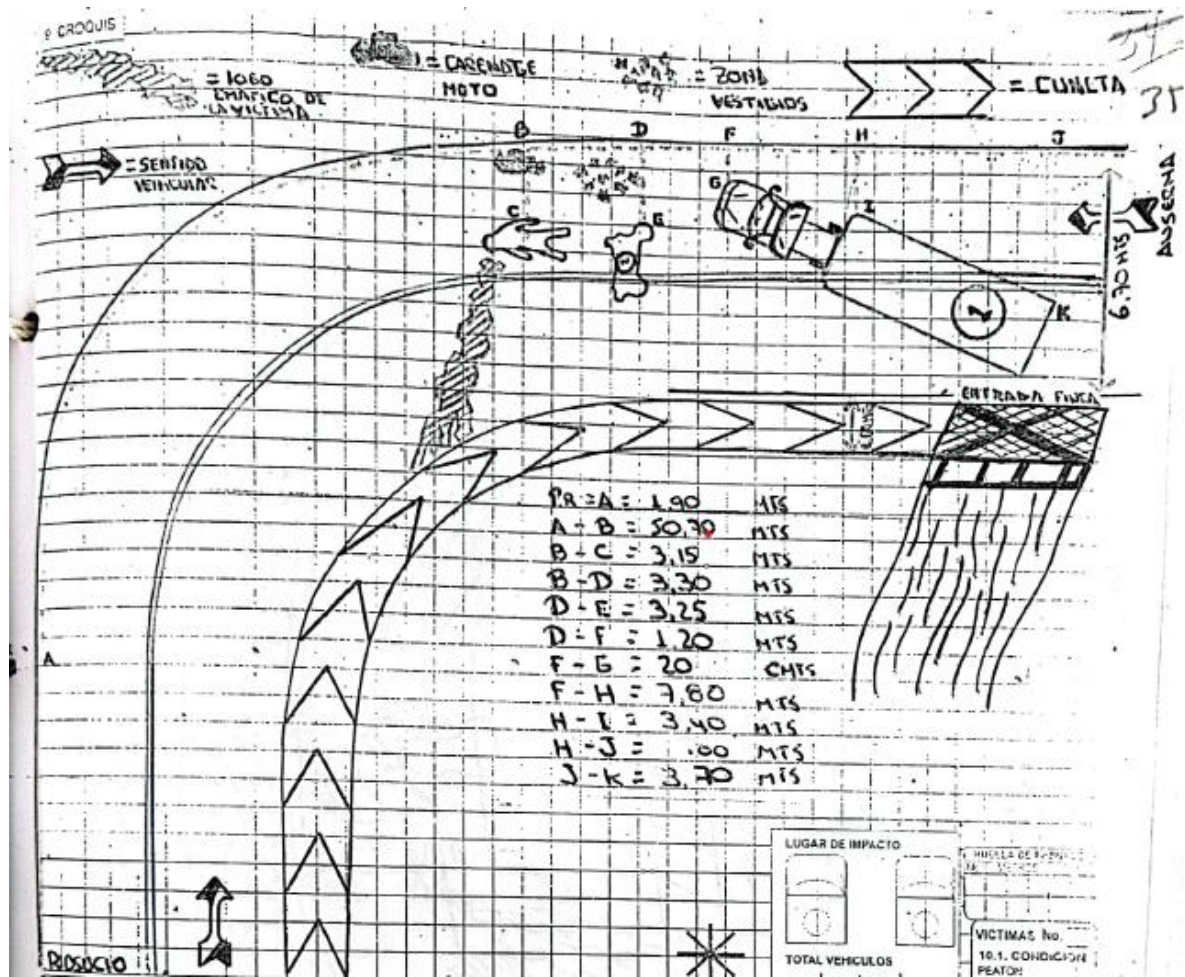
- Actuación del Primer Respondiente –FPJ-4– (fls. 6 y 7, C.4), diligenciada por el patrullero Jhon Jaime Orozco Flórez, quien informó que: *“nos encontrabamos (sic) realizando area (sic) de prevención, en esos momentos senti (sic) un golpe al observar vimos un tractocamion (sic) color naranja el cual colisiono (sic) con un motociclista causandole (sic) la muerte instantaneamente (sic)”*.
- Informe Policial de Accidentes de Tránsito nº C-1295533, diligenciado el 12 de junio de 2013 a las 10:30 a.m. por el policía Adrián Esteban Rendón Rincón (fls. 34 a 36, C.4).

Además de señalar las condiciones y características de la vía, ya indicadas en esta providencia, refirió que los vehículos implicados en la colisión fueron un tractocamión de placas TTG200 y una motocicleta de placas XFG83A, conducidos por el señor Julián González Valencia y el señor Israel Gutiérrez Valencia.

En observaciones, consignó que: *“habia (sic) un puesto de control aproximadamente a 50 mts del lugar de los hechos, puesto de control PONAL SETRA – DECAL UNIR 21.2”* (fl. 35, C.4).

No estableció las hipótesis del accidente de tránsito.

El croquis levantado por el policía de tránsito fue el siguiente:



- Informe Ejecutivo -FPJ-3- del 12 de junio de 2013 (fls. 3 a 5, C.4), rendido por el policía Adrián Esteban Rendón Rincón, quien respecto del accidente de tránsito, narró lo siguiente: “Siendo las 10:30 horas del día 12-06-2013 fuimos informados por el señor subintendente JHON JAIME OROZCO FLÓREZ vía celular, sobre la ocurrencia de un accidente de tránsito en la vereda la cierra (sic), ubicado en la vía que de Anserma conduce a Riosucio en el km 31+950 vereda la cierra (sic), inmediatamente me dirigí a dicho lugar para verificar la información, y fue entonces cuando llegué al Km. 31 +950 metros de la vía Cauya (sic) – La Pintada, en donde encontré una motocicleta estacionada al costado de la vía pregunte (sic) a las personas del sector quienes me confirmaron que esa motocicleta en la mitad de la vía la cual estaba en el piso, al lado había una persona sin vida y al frente un vehículo tracto camión el cual había colisionado con la motocicleta Se procedió a realizar los actos urgentes, (...) posteriormente le solicite (sic) al médico de turno la respectiva prueba de beodez, la cual arrojó resultado NEGATIVO, (...)” (fl. 3, C.4).
- Poligrama nº 509 del 12 de junio de 2013 (fl. 174, C.1), con el cual el Jefe Seccional Tránsito y Transporte de Caldas informó al CAD-SETRA-DECAL-DITRA CIEVS – E-100 DECAL sobre el accidente de tránsito ocurrido a la 1:30 p.m. (sic) en la vía Cauyá – La Pintada, kilómetro 31 +

950 metros, en el sector La Sierra del Municipio de Riosucio. En dicho documento se indicó quién conoció del caso y se formularon como hipótesis del accidente las de posible exceso de velocidad por parte de la moto, e invasión de carril por parte del tractocamión.

- Inspección Técnica a Cadáver –FPJ-10– del 12 de junio de 2013 (fls. 18 a 21, C.4), diligenciada por el servidor de policía judicial Andrés Javier Hurtado Marín, en relación con el cuerpo del señor Israel Gutiérrez Valencia.

Indicó que al llegar al lugar evidenció la contaminación de los hechos, ya que el cuerpo sin vida del señor Israel Gutiérrez Valencia se encontraba cubierto con una manta blanca.

Anotó que el cabezote del tractocamión implicado en los hechos se encontraba en diagonal entrando en su carril y que el tráiler del mismo estaba en el carril de contravía.

Señaló que la moto estaba a lo ancho de la vía sobre la mitad de los dos carriles, y que el carenaje de la misma estaba suelto casi sobre la línea blanca del carril hacia Riosucio.

Consignó que entre acordonamiento había de a dos conos a lado y lado.

- Álbum fotográfico del accidente de tránsito, realizado por funcionario de policía judicial (fls. 25 a 30, C.4). Se indicó en el mismo que el tractocamión iba en sentido vial Quinchía – Riosucio, en contravía, entrando a una curva, quedando su cabezote con dirección a su carril de sentido vial; y que la motocicleta al parecer iba de Riosucio a Quinchía, saliendo de la misma curva.
- Informe Investigador de Campo –FPJ-11– del 3 de julio de 2013 (fls. 74 y 75, C.4), en el cual se mencionó el resultado de las entrevistas realizadas a los subintendentes Adrián Rendón Rincón y Carlos González López, por cuanto el primero realizó bosquejo de planimetría y topográfico, y el segundo se encontraba como segundo al mando en el área de registro y control.

Se indicó que en el lugar de los hechos se encontraba personal de la seccional de tránsito y transporte de Caldas, realizando un área de registro y control; que dicha área no fue dibujada en el bosquejo topográfico, habida cuenta que cuando llegó el funcionario encargado de ello, no había conos que referenciaran la existencia del área de

prevención; que los conos que utilizaron para el área de registro y control se usaron luego para acordonar y proteger la escena.

- Informe Investigador de Campo -FPJ-11- del 9 de octubre de 2013 (fls. 110 a 115, C.4), en el cual se mencionó el resultado de la entrevista al señor Ángel Alberto Pulgarín Gil, testigo de los hechos, indicando que aquél era conductor de camión, que el día del accidente se encontraba en el sitio, ya que los uniformados que estaban haciendo el retén le hicieron señal de pare, por lo que se encontraba a un costado de la vía y observó un tractocamión que estaba adelantando y cuando se disponía a ingresar a su carril se sintió un golpe y luego el vehículo se detuvo, posterior a lo cual advirtió una persona tendida sobre la vía en frente del camión. Se refirió que el entrevistado manifestó que el accidente se pudo producir porque había varios vehículos detenidos y la mula tuvo que avanzar casi hasta la curva para ingresar de nuevo a su carril, mientras que la moto había podido esquivar al camión, ya que había espacio suficiente para cruzar por un lado de éste.
- Informe Investigador de Campo -FPJ-11- del 20 de enero de 2014 (fls. 145 a 149, C.4), en el cual se mencionó el resultado de las entrevistas realizadas telefónicamente a los testigos del señor Julián González Valencia, esto es, a los señores Ricardo Madrid Galeano, Gustavo Cendales Vargas y Manuel Darío Posada Sánchez.

En relación con la primera entrevista, se indicó que el señor Ricardo Madrid Galeano manifestó que el día de los hechos se desplazaba como escolta de una cama baja y que fueron requeridos por un retén de la policía de carreteras. Se señaló que el entrevistado acotó que estando en el retén, fue parado igualmente un camión que se desplazaba por el lugar, y que luego apareció una tractomula que se vio obligada a tomar el carril izquierdo y casi sobre la curva, ya que el espacio en que se encontraba ubicado el puesto de control era muy corto. Se anotó que el entrevistado indicó que cuando la tractomula estaba retomando el carril derecho, apareció una motocicleta a alta velocidad, que impactó de frente con el tractocamión y murió de forma instantánea. Se consignó que el entrevistado refirió que sólo había cuatro (4) agentes de policía adelantando el puesto de control, lo cual era insuficiente, y que al ocurrir el accidente, éstos retiraron los conos que tenían apostados en la mitad de la vía para cerrarla en los extremos mientras se adelantaba la diligencia de inspección a cadáver.

Por su parte, se anotó que el señor Gustavo Cendales Vargas manifestó que igualmente fue requerido por la policía de carreteras para un retén

a un lado de la vía, y que luego se hizo estacionar también a un camión más adelante de él y de su esquema de trabajo. Refirió que apareció una tractomula que bajó la velocidad y por lo estrecho de la vía se vio obligada a tomar el carril izquierdo para adelantar los carros estacionados. Se señaló que el entrevistado añadió que como uno de los conos de señalización estaba ubicado casi en el extremo de la curva, cuando la tractomula retomaba el carril derecho, apareció una motocicleta que transitaba en sentido contrario y por la velocidad que llevaba no alcanzó a frenar e impactó de frente con el camión, falleciendo en el lugar. Se indicó que el entrevistado refirió que en el retén sólo había cuatro (4) policías, que ninguno de ellos estaba controlando el tráfico de vehículos, y que luego del accidente, aquellos retiraron los conos de señalización del centro de la vía para cerrar el paso mientras se adelantaba la diligencia de inspección a cadáver.

Respecto del señor Manuel Darío Posada Sánchez, se consignó que éste manifestó que ese día iba para Medellín y antes de llegar a Riosucio se encontró un puesto de control de la policía de carreteras, la cual lo hizo estacionar a un costado de la vía. Se indicó que el entrevistado afirmó que estando allí apareció un camión al que también hicieron estacionar delante de la cama baja en la que él se desplazaba; que luego apareció una tractomula que viajaba en el mismo sentido y que por la estrechez de la carretera, tuvo que salir de su carril y tomar el izquierdo para poder sobrepasar los vehículos que estaban estacionados. Se consignó que el entrevistado sostuvo que como el último cono de señalización estaba ubicado casi terminando en tramo recto, cuando la tractomula iba a retomar de nuevo su carril derecho, apareció una moto que subía muy rápido y no alcanzó a detenerse o maniobrar e impactó de frente con el camión. Se precisó que el entrevistado adujo que en el retén sólo había cuatro (4) policías, y que el tramo donde se ubicó era muy corto.

- Testimonio del Intendente de la Policía Nacional, señor Jhon Jaime Orozco Flórez<sup>12</sup>, del cual se extraen las siguientes manifestaciones:
  - El día de los hechos se encontraba desarrollando la labor de registro y control.
  - No recuerda cuántos policías se encontraban en el puesto de control, y aunque sólo tiene presente a un compañero, indicó que había más pero no sabe precisar cuántos.
  - Los policiales estaban dentro del área de registro y control, no estaban arriba o más abajo del puesto de control.

---

<sup>12</sup> Minuto 1:12 a finalizar el tercer audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A, cuarto audio y quinto audio ibidem.



- No utilizaron paletas para el pare y siga de los vehículos.
  - Tenían señalizado con conos a cada extremo del área de registro y control. No recuerda cuántos conos utilizó al principio y fin del puesto de control.
  - No tenían policial al inicio y al final del puesto de control, dando vía a los conductores o indicándoles que transitaran con precaución. Sin embargo, consideró procedente que hubiera un policial al inicio y al final dando vía a los conductores.
  - Momentos antes del accidente se hizo señal de pare a una cama baja que llevaba una retroexcavadora, para su correspondiente registro.
  - Efectuando la función de registro y control, observó que, como había otro vehículo que se estaba registrando, un tractocamión al cual no se le detuvo para registro, se fue en contravía por todo el puesto de control, en sentido Anserma – Riosucio. Cuando ya iba a finalizar el puesto de control, donde estaba el último cono de la señalización, esto es, cuando iba a entrar a su propio carril, ya estaba la curva y apareció un motociclista con el cual impactó, resultando muerto este último.
  - Para seguir por la vía, el tractocamión tenía que invadir el otro carril.
  - El camión que tenían dentro del área de registro no permitía que el tractocamión pudiera pasar por el carril que le correspondía, por lo que éste se metió en contravía y pasó todo el puesto de control en contravía.
  - El tractocamión violó una norma de tránsito al invadir el carril.
  - No sabe a qué velocidad iba el motociclista.
  - Con el puesto de control estaban ocupando parte del carril bajando, y como el tractocamión no cabía, debía esperar a que de pronto uno de los policiales le diera vía o que el vehículo que se estaba registrando siguiera su marcha.
  - Ningún policía le dio vía al tractocamión y tampoco lo detuvo.
  - El accidente se produjo terminando la recta e iniciando la curva.
  - En la curva no se alcanzaba a ver si venía otro vehículo en sentido contrario.
- Testimonio del policía de carreteras, señor Adrián Esteban Rendón Rincón<sup>13</sup>, del cual se extraen las siguientes manifestaciones:
- Realizó el informe del accidente de tránsito.
  - Cuando llegó al lugar de los hechos, encontró carros a lado y lado

---

<sup>13</sup> Minuto 00:08 a finalizar el sexto audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A y séptimo audio ibidem.

de la vía y estaba cerrado el acordonamiento con conos. Observó el tractocamión atravesado en la vía, la persona fallecida y la motocicleta.

- El tractocamión quedó en sentido Anserma – Riosucio. El cabezote quedó en el carril que le correspondía pero la parte del tráiler estaba en sentido contrario, invadiendo el carril de la motocicleta.
  - El accidente ocurrió entrando a una curva, en la que luego llega a una recta, y en la que normalmente montan el puesto de control.
  - En la curva, el tractocamión se estaba metiendo a su carril, y venía en sentido contrario.
  - El motociclista impactó contra el cabezote del tractocamión. No tiene presente en qué parte del cabezote se dio el impacto.
  - Cuando llegó al sitio no vio el puesto de control y puso en observaciones que según le informaron los testigos que estaban allí, existía un puesto de control aproximadamente a 50 metros del lugar de los hechos.
  - El puesto de control que le indicaron que había a 50 metros estaba en una recta.
  - No hizo hipótesis del accidente porque sus superiores (Seccional de Tránsito de Caldas) le dijeron que no la realizara, ya que el asunto tenía que ser investigado.
  - La orden de que no se dejaran hipótesis fue verbal, pero lo más seguro es que haya quedado consignada en acta.
  - El motociclista no tenía buena visibilidad en la curva. Lo más probable es que si un vehículo venía en contravía, hubiera colisión.
  - No identificó el punto exacto del impacto. No quedó precisado en el informe de accidente de tránsito.
  - Había dos conos pero ya por fuera, como atajando los vehículos para que no se metieran a la escena donde sucedieron los hechos.
- Testimonio del conductor del tractocamión implicado en el accidente, señor Julián González Valencia<sup>14</sup>, del cual se extraen las siguientes manifestaciones:
- Entre las 9 y 10 de la mañana, en sentido vial Anserma – Riosucio, iba en una tractomula con una carga de maíz desde Buenaventura para Supía. Llegando a un sector conocido como La Sierra, cerca de Riosucio, se encontró con un retén de la policía de carreteras, que a un lado tenía orillada una cama baja con una retroexcavadora encima y sus dos acompañantes (dos carros particulares).
  - El retén estaba antes de la curva pero muy pegado a ésta. Estaba a

---

<sup>14</sup> Octavo audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A.

unos 15 metros antes de la curva.

- Se dio cuenta que había un retén porque vio conos. No tenían paletas para dar vía de un lado a otro. Había 10 conos, 10 delineadores.
- Vio de 3 a 4 agentes de policía en ese retén, pero no recuerda bien porque han pasado varios años y además por el susto que pasó por lo sucedido.
- Cuando llegó a la parte donde estaba orillada la cama baja, había otro camión delante de él, y la policía le hizo señas de que parara, y el camión paró.
- Había 4 vehículos en el retén: la cama baja, los dos particulares que la acompañaban y el camión que estaba antes de él y que lo detuvieron.
- Teniendo en cuenta que quedó en la vía, ya que no le hicieron señal de pare a él sino sólo al camión que estaba adelante, el conductor del tractocamión decidió proseguir, por lo que pasó por un lado del retén, para lo cual hizo la maniobra de invadir el carril contrario. En el momento no consideró que fuera mejor esperar, porque la policía no lo había parado y entonces siguió.
- Ya pasando los últimos conos que estaban casi llegando a la curva, teniendo prácticamente metido el cabezote a su derecha, esto es, a su carril, el conductor sintió el golpe de la moto que apareció rápido y se pegó con la parte frontal derecha de la mula, en el bumper, en todo el capó, casi hacia el centro.
- No vio venir la motocicleta, sólo sintió el impacto.
- Se bajó a mirar qué le había pasado al motociclista y ya no había nada que hacer.
- Desde que advirtió la presencia del retén hasta que hubo el impacto, cree que había unos 10 metros.
- El retén no estaba bien ubicado porque no había sido instalado en toda la recta y no tenía paleteros para dar vía a lado y lado. Debió haber tenido visibilidad desde ambos lados.
- En dicha curva no se puede adelantar porque los policías estaban muy precisos con el retén pegado a la curva.
- Es una curva ciega, por lo que el conductor de la motocicleta no podía advertir que había un retén más adelante. Tampoco podía ver que el tractocamión venía.
- Hay testigos que dan cuenta de que la culpa del accidente no fue del conductor del tractocamión sino del retén mal ubicado, que estaba montado prácticamente cerca de la curva.

#### **4. Acreditación de los elementos del régimen de responsabilidad por falla en el servicio en el caso concreto**

Los presupuestos que permiten endilgar responsabilidad bajo el título de imputación por falla en el servicio se concretan en el daño antijurídico sufrido por el interesado, la conducta anormal de la Administración, y finalmente, una relación de causalidad entre esta última y aquél, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio; aspectos cuya configuración en el *sub examine* se analizan a continuación.

#### 4.1 El daño

En relación con la noción de daño, como primer requisito del proceso de determinación de la responsabilidad que le pueda caber a la entidad enjuiciada, la Sala observa que ese concepto se distingue del referido al perjuicio, entendido el primero como el hecho o situación objetiva verificable con los sentidos, que lesiona de manera definitiva un derecho o interés lícito o altera su goce pacífico; el segundo corresponde al menoscabo patrimonial subjetivo sufrido por la víctima del daño y como consecuencia directa de este, que comporta su faz indemnizable<sup>15</sup>.

Esa misma postura ha sido adoptada por el Consejo de Estado al señalar que *“(...) es necesario reiterar que el daño antijurídico es el primer elemento de la responsabilidad, y una vez verificada su configuración, se debe determinar si es imputable o no a la entidad demandada, como quiera que aquél es requisito indispensable de la obligación de reparar. En ese orden de ideas, el daño, en su aspecto objetivo, debe ser entendido como la lesión de un derecho, interés o atributo de la persona, sin que exista la necesidad de relacionarlo con la actividad que lo causó, pues es una entidad fenoménica u ontológica que lejos de estar relacionado con el deber ser de las cosas, es un dato objetivo apreciable por los sentidos y, por consiguiente, una entidad natural. De allí que, la mera ocurrencia del daño y su nota de antijuricidad es el presupuesto indispensable que genera el deber de reparar. (...) La labor del juez, en principio, se reduce simple y llanamente a la constatación del daño como entidad, como violación a un interés legítimo, esto es, como fenómeno, como dato objetivo o de conocimiento dado por la experiencia, luego, aquél asume una posición axial frente al mismo, lo que imprime el sello de antijurídico o jurídico, y una vez estructurado éste, comprobar la posibilidad de imputación o no, a la entidad demandada”*<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Antaño la Corte Suprema de Justicia afirmó que *“(...) el daño, considerado en sí mismo, es la molestia, el detrimento ocasionado a una persona en su cuerpo, en su espíritu o en su patrimonio, al tiempo que el perjuicio es el menoscabo patrimonial que resulta como consecuencia del daño; y la indemnización es el resarcimiento, la reparación, la satisfacción o pago del perjuicio que el daño ocasionó”*. Sala de Negocios Generales, 13 de diciembre de 1943, M.P. Dr. Cardozo Gaitán.

<sup>16</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero. Exp. 20001-23-31-000-1998-03813-

Es preciso recordar que en el ordenamiento jurídico colombiano, a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, no basta la demostración de la ocurrencia del daño puro y simple para exigir del Estado la obligación de repararlo, sino que se requiere que el mismo sea calificado como antijurídico<sup>17</sup>.

La antijuridicidad del daño representa, entonces, la ausencia del deber jurídico de soportarlo por parte de quien lo sufre. Ahora, el daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo se torna imprescindible que se acrediten los aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama, a saber: **i)** debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo, como se indicó; **ii)** que se lesione un derecho, bien o interés protegido legalmente por el ordenamiento; **iii)** que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente, de manera que no puede limitarse a una mera conjetura o alea.

En el caso que convoca la atención del Tribunal, según lo expuesto en la demanda y de conformidad con el material probatorio aportado al proceso, el daño alegado por la parte actora se concreta en el lamentable fallecimiento del señor Israel Gutiérrez Valencia el 12 de junio de 2013 a las 10:30 a.m. en el kilómetro 31 + 950 metros de la vía Cauyá – La Pintada, en las condiciones y de la manera referida en el acápite correspondiente de los hechos probados.

El citado daño consta además en la siguiente prueba documental, corroborada por la prueba testimonial recaudada<sup>18</sup>:

- Informe Pericial de Necropsia Médico Legal nº 2013010117614000013 del 12 de junio de 2013 (fls. 102 a 109, C.4), en el cual el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyó que el señor

---

01(18451). Ver también sentencia del 19 de octubre de 2011, de la misma Corporación y Sección, con ponencia de la Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

<sup>17</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 22 de junio de 2001. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez. Rad. 05001-23-25-000-1992-3233-01(13233).

<sup>18</sup> Sobre el particular, rindieron declaración los señores Jhon Jaime Orozco Flórez (minuto 1:12 a finalizar el tercer audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A, cuarto audio y quinto audio ibidem), Adrián Esteban Rendón Rincón (minuto 00:08 a finalizar el sexto audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A y séptimo audio ibidem), Julián González Valencia (octavo audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A), Luz Damary Uchima Guevara (noveno audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A), José Didier Chiquito Trejos (décimo audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A), Roberto Elías Lema Castro (minuto 00:01 a 17:02 del décimo primer audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A) y Nulber Londoño Velasco (minuto 17:10 a 27:33 del décimo primer audio contenido en el CD obrante a folio 371A del cuaderno 1A).

Israel Gutiérrez Valencia sufrió “(...) un TRAUMA CRANEO-ENCEFALICO (sic) SEVERO que gener[ó] FRACTURA DE BASE DE CRANEO (sic), dicho traumatismo genera un CUADRO de HIPERTENSION (sic) ENDO-CRANEANA SEVERA y por consiguiente la muerte en el lugar de los hechos” (fl. 113, ibidem).

- Registro Civil de Defunción expedido por la Registraduría Municipal de Riosucio, en el consta que el 12 de junio de 2013 falleció el señor Israel Gutiérrez Valencia (fl. 54, C.1).

Así pues, habiéndose constatado la existencia del daño invocado, pasa la Sala a abordar el análisis de la imputación a la parte demandada, en aras de establecer si aquél es atribuible o no a ésta.

#### **4.2 La falla en el servicio**

Se recuerda que, como se indicó al momento de señalar el título de imputación con el cual se debe analizar la responsabilidad de la parte demandada en este asunto, los accionantes aducen que la Policía Nacional omitió el reglamento previsto para instalar el puesto de control en la vía en la que ocurrió el accidente, y que al ocupar parte de uno de los carriles de la vía sin las medidas de seguridad requeridas, llevó a que el conductor del tractocamión ocupara en contravía, sobre una curva cerrada, el carril por el que se movilizaba el señor Israel Gutiérrez Valencia, lo que generó la colisión de ambos vehículos y el fallecimiento del motociclista.

Habida cuenta que la imputación realizada por la parte demandante alude a la omisión en el cumplimiento del procedimiento para la instalación de puestos de control, procede esta Sala de Decisión a establecer primeramente la existencia de un contenido obligacional a cargo de la entidad accionada en esta materia, para luego determinar, con base en las pruebas allegadas, si se configuró la falla invocada.

Tal como se indicó en el acápite de hechos probados, la Policía Nacional indicó que el procedimiento para instalar y ejecutar un puesto de control se encuentra estandarizado en la Suite Visión Empresarial SVE, con código 2CD-PR-0021 del 12 de julio de 2012. De lo anterior dan cuenta los Oficios n° 2173/SETRA – SOAPO 29 del 1° de octubre de 2013 (fl. 135, C.4) y n° 1117 SETRA – SOAPO 29 del 19 de junio de 2015 (fl. 200, C.4), suscritos por el Comandante Seccional Tránsito y Transporte del Departamento de Policía de Caldas.

Al examinar dicho procedimiento, el Tribunal observa que el fundamento

legal del mismo, según se indicó en el respectivo documento, es el siguiente:

- Constitución Política: artículos 2, 29 y 218.
- Ley 909 de 2004 (Código de Procedimiento Penal).
- Ley 599 de 2000 (Código Penal).
- Ley 872 de 2003 (Sistemas de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios).
- Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito).
- Ley 1015 de 2006 (Régimen Disciplinario para la Policía Nacional).
- Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor).
- Decreto 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía).
- Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia).
- Ley 1275 de 2008 (sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres).
- Ley 1453 de 2011 (que reformó el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de la Infancia y la Adolescencia y las reglas sobre extinción de dominio, y dictó otras disposiciones en materia de seguridad).
- Resolución 0911 del 1º de febrero de 2010 (Manual de Patrullaje Urbano).
- Ley 0019 de 2012 (anti trámites).

Revisada cada una de las normas referidas, la Sala advierte que ninguna de ellas prevé de manera expresa y clara, la forma en la cual deben instalarse y ejecutarse puestos de control.

En efecto, el Código Nacional de Tránsito se limitó a definir el término “retén” como el *“Puesto de control instalado técnicamente por una de las autoridades legítimamente constituidas de la Nación”* (artículo 2); al paso que estableció facultades o competencias a cargo de la Policía Nacional, específicamente de sus cuerpos especializados de policía de tránsito urbano y policía de carreteras, para que en su calidad de autoridad de tránsito, vele por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público, con funciones de carácter regulatorio y sancionatorio, y acciones orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías (artículo 7). Adicionalmente, dispuso que la Policía Nacional debe reglamentar el funcionamiento de la Seccional de Formación y Especialización en Seguridad Vial, así como de sus cuerpos especializados de policía urbana de tránsito y policía de carreteras (parágrafo 2 del artículo 7).

Teniendo en cuenta lo anterior, este Tribunal adelantó la búsqueda

normativa y jurisprudencial respecto de los requisitos para instalar puestos de control, hallando que en concepto n° 20091340022421 del 20 de enero de 2009, expedido por el Ministerio de Transporte, se señaló que tal materia estaba regulada en la Resolución 9960 de 1992 (Reglamento de Vigilancia Urbana y Rural para la Policía Nacional); afirmación ésta que también fue hecha por el Consejo de Estado en providencias relativas al tema<sup>19</sup>.

No obstante lo anterior, al examinar la Resolución 9960 de 1992, esta Corporación advierte que la misma no contempló un procedimiento específico para la instalación de puestos de control, pero realizó las siguientes precisiones aplicables a la materia:

- Definió puesto de control como el *“Lugar estratégico donde se cumplen actividades de registro y control en cumplimiento de los planes operativos, y cuyas características principales son la seguridad y movilidad de sus unidades”* (artículo 90).
- Estableció que la policía vial tiene el objeto de vigilar, hacer cumplir las normas y disposiciones que rigen y regulan el tránsito y transporte automotor por las carreteras nacionales; que debe velar por las condiciones de seguridad de los vehículos en circulación, remover los obstáculos en las vías, suministrar información a los usuarios cuando la soliciten, controlar el tránsito de vehículos sin luces o señales que permitan evitar accidentes, auxiliar a los conductores, asumir el control y dirección del tránsito en vías obstruidas y atender los accidentes en carretera (numeral 5 del artículo 116).
- Indicó que uno de los medios con los que cuentan las autoridades de policía, capaces de prevenir la comisión de los delitos y las contravenciones previstas en la ley penal y en los códigos de policía, son los reglamentos, entendidos como una manifestación de voluntad administrativa en forma de regla general escrita, emitida por una autoridad que tenga poder reglamentario (artículo 124).

La Sala observa que la ausencia de una reglamentación general expresa en materia de requisitos para la instalación de puestos de control, en contraste con la facultad que tienen los organismos de tránsito para organizar y dirigir lo relacionado con el tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción

---

<sup>19</sup> Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: **i)** 12 de diciembre de 2019 (Consejera Ponente: Dra. María Adriana Marín, radicación número: 25000-23-26-000-2010-00543-01(47445)); **ii)** 25 de abril de 2018 (Consejero Ponente: Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación número: 76001-23-31-000-2007-00284-01(41260)); y **iii)** 13 de febrero de 2015 (Consejero Ponente: Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación número: 68001-23-15-000-2001-01547-01(31037)).



(artículos 2 y 6 del Código Nacional de Tránsito), conduce a esta Sala de Decisión a inferir que la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía de Caldas tenía competencia para establecer a través de manuales internos, las directrices para llevar a cabo las actividades propias de un puesto de control, tal como lo hizo en el procedimiento que obra en el expediente y que se mencionó en el acápite de hechos acreditados precisado en estas consideraciones.

Recuérdese que, según se ha planteado por la doctrina nacional<sup>20</sup>, la actividad interna, intraorgánica o interorgánica de la Administración origina los denominados actos de administración, tales como instrucciones o circulares, que resultan obligatorios para el nivel interno de la entidad.

En ese sentido, a pesar del vacío normativo que sobre este tema parece existir, este Tribunal no puede pasar por alto que para la época de los hechos que dieron origen a esta demanda, existía la reglamentación interna que se acaba de mencionar, específicamente un manual, que establecía de qué manera debía adelantarse un puesto de control y, en ese sentido, la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía de Caldas debía sujetarse a aquél para el despliegue de sus operativos en carretera.

Esa es la interpretación que también hace el Consejo de Estado en las providencias referidas anteriormente<sup>21</sup>, en la medida en que reconoce que internamente la Policía Nacional y sus Seccionales de Tránsito manejan un manual de procedimiento para instalación de puestos de control, lo que guarda relación con la facultad legal que le asiste a tal entidad de instalar puestos de control para realizar operativos en las vías.

Precisado lo anterior y teniendo en cuenta el análisis realizado en el acápite de hechos probados en relación con los requisitos mínimos para la instalación de un puesto de control, esta Sala de Decisión advierte de manera evidente que la Policía Nacional, en efecto, desatendió el procedimiento previsto, en tanto:

---

<sup>20</sup> En efecto, sobre el particular puede consultarse el libro *Los convenios de la Administración: Entre la gestión pública y la actividad contractual* (Bogotá, Editorial Temis, 2020), páginas 108 y 109, en el cual se analiza por su autor (Augusto Ramón Chávez Marín) la naturaleza de los actos originados en la actividad interorgánica.

<sup>21</sup> Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: **i)** 12 de diciembre de 2019 (Consejera Ponente: Dra. María Adriana Marín, radicación número: 25000-23-26-000-2010-00543-01(47445)); **ii)** 25 de abril de 2018 (Consejero Ponente: Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación número: 76001-23-31-000-2007-00284-01(41260)); y **iii)** 13 de febrero de 2015 (Consejero Ponente: Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación número: 68001-23-15-000-2001-01547-01(31037)).

- No expidió previamente orden de servicios para realizar el puesto de control.
- No se asignaron las unidades policiales requeridas para la mencionada actividad y atendiendo la zona rural de la que se trataba y que exigía un mínimo de 10 policías.
- Excedió el límite de dos (2) horas previsto para realizar puesto de control en una misma zona.
- El puesto de control no fue ubicado en un lugar apropiado, en tanto se instaló no sólo cerca de una curva pronunciada, sino además ocupando parte de uno de los carriles sin usar la señalización adecuada, sin contar con policías asignados a manejar la señal de pare o siga, y a conducir el tránsito vehicular durante el tiempo que permanecieran en el sector. Lo anterior, con el fin de evitar congestión vehicular, así como riesgo para los conductores o peatones.
- Los vehículos seleccionados para el registro y control no se limitaron a aquellos que pudieran atender dadas las circunstancias antes referidas, esto es, número de policiales a cargo, ubicación del puesto de control y ausencia de señalización correspondiente, sin generar o incrementar riesgos para quienes transitaran por el lugar.
- No se dispusieron policiales a cargo de la seguridad y de la apertura a 50 o 100 metros de la entrada a dicho retén, como se señala en el esquema de cómo debe instalarse un puesto de control.

Tal como ha tenido oportunidad de señalarlo el Consejo de Estado<sup>22</sup>, “(...) *el servicio policial debe prestarse con estricta aplicación al principio de planeación y, por tanto, los comandantes de la institución se encuentran obligados a planear y distribuir los servicios teniendo en cuenta las características del grupo a su mando, para prevenir y contrarrestar las diversas situaciones que atentan contra la seguridad y bienestar de la comunidad, mantener y defender el orden público, garantizando, a su vez, la vida, integridad y seguridad de los miembros de la fuerza pública, con ocasión de la prestación del servicio. (...)*”. Y nótese cómo en el presente asunto la entidad demandada no efectuó los planes de prevención necesarios para minimizar los riesgos derivados del acto propio del servicio que estaba desarrollando.

---

<sup>22</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Consejera Ponente: Dra. María Adriana Marín. Sentencia del 12 de diciembre de 2019. Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00543-01(47445).

Todo lo anterior constituye una evidente falla en el servicio por parte de la Policía Nacional.

En relación con la responsabilidad del vehículo tipo tractocamión que se vio implicado en el accidente, el Tribunal advierte que el conductor del mismo incurrió en infracciones comprobadas al Código Nacional de Tránsito, pues realizó una maniobra de adelantamiento de vehículos no sólo en un tramo de la vía en donde existía línea separadora central continua o prohibición de adelantamiento, sino también cerca de una curva, siendo desfavorable por ello la visibilidad y ofreciendo peligro para quienes transitaran por el carril contrario. Lo anterior, en abierta contradicción con las prohibiciones previstas por el artículo 73 de la Ley 769 de 2002:

**ARTÍCULO 73. PROHIBICIONES ESPECIALES PARA ADELANTAR OTRO VEHÍCULO.** *No se debe adelantar a otros vehículos en los siguientes casos:*

(...)

*En los tramos de la vía en donde exista línea separadora central continua o prohibición de adelantamiento.*

*En curvas o pendientes.*

*Cuando la visibilidad sea desfavorable.*

(...)

*En general, cuando la maniobra ofrezca peligro.*

La anterior prohibición está relacionada con la obligación que les asiste a los conductores de vehículos de transitar por sus respectivos carriles, y de adelantar sólo cuando no entorpezca el tránsito ni ponga en peligro a los demás vehículos o peatones. Así se desprende del artículo 60 de la Ley 769 de 2002:

**ARTÍCULO 60. OBLIGATORIEDAD DE TRANSITAR POR LOS CARRILES DEMARCADOS.** *Los vehículos deben transitar, obligatoriamente, por sus respectivos carriles, dentro de las líneas de demarcación, y atravesarlos solamente para efectuar maniobras de adelantamiento o de cruce.*

(...)

**PARÁGRAFO 2o.** *Todo conductor, antes de efectuar un adelantamiento o cruce de una calzada a otra o de un carril a otro, debe anunciar su intención por medio de las luces direccionales y señales ópticas o audibles y efectuar la maniobra de forma que no entorpezca el tránsito, ni ponga en peligro a los demás vehículos o peatones.*

El artículo 131<sup>23</sup> de la Ley 769 de 2002 contempla expresamente sanciones para el conductor y/o propietario de un automotor que incurra en las infracciones relativas a adelantar a otro vehículo en curva, así como la de conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas.

Aun cuando esta Corporación no desconoce que las circunstancias en las cuales se instaló el puesto de control por parte de la Policía Nacional incidieron de una u otra manera en la comisión de las infracciones antes referidas, lo cierto es que tampoco puede pasar por alto que el conductor del vehículo obró imprudentemente, pues decidió *motu proprio* continuar su trayecto invadiendo para ello el carril contrario, no sólo sin esperar alguna señal de los uniformados o que los vehículos que habían sido detenidos para registro y control avanzaran, sino también sin cerciorarse que contaba con espacio suficiente para nuevamente devolverse a su carril o que no venía otro vehículo, pese a que, según consta en su declaración, observó que el retén se encontraba muy cerca de la curva.

La existencia del puesto de control, con las escasas señales usadas y que incluso fueron advertidas por el mismo conductor del tractocamión al llegar al sector, exigía de parte de éste que tomara las precauciones del caso,

---

<sup>23</sup> “**ARTÍCULO 131. MULTAS.** Los infractores de las normas de tránsito serán sancionados con la imposición de multas, de acuerdo con el tipo de infracción así:

A. Será sancionado con multa equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) el conductor de un vehículo no automotor o de tracción animal que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

(...)

A.1. No transitar por la derecha de la vía.

A.9. Adelantar entre dos (2) vehículos automotores que estén en sus respectivos carriles.

(...)

D. Será sancionado con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv) el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

(...)

D.6. Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados o al aproximarse a la cima de una cuesta o donde la señal de tránsito correspondiente lo indique. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.

D.7. Conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito”.

realizando las maniobras necesarias para continuar por su ruta sin atentar contra su propia seguridad, la del resto de los vehículos y la de los peatones.

### 4.3 Nexos de causalidad

El simple incumplimiento de las obligaciones referidas a cargo de la Policía Nacional y de los particulares accionados, no genera una responsabilidad automática por la ocurrencia de un accidente, pues es necesario establecer si la referida omisión fue la causa del hecho o si se configuró alguna causal que rompiera la imputación.

Para el caso concreto y con fundamento en las razones que se indicaron al momento de analizar la falla en el servicio por parte de la Policía Nacional, este Tribunal considera que el desconocimiento de los requisitos mínimos en la instalación y ejecución de un puesto de control en el kilómetro 31 + 950 metros de la vía Cauyá – La Pintada, para el 12 de junio de 2013, constituye una causa eficiente en la producción del daño que se dice padecido por los demandantes, o si se quiere, contribuyó e incrementó las posibilidades de configuración del hecho dañino.

En efecto, de no haber existido el mencionado puesto de control de la manera en que se describió en esta providencia, el señor Israel Gutiérrez Valencia hubiera podido transitar por su carril sin la existencia del riesgo de que los vehículos que se desplazaban en sentido contrario pudieran invadir su carril por razón del obstáculo que la misma Policía Nacional generó en la vía.

Ahora, este Tribunal considera que en el deceso del señor Israel Gutiérrez Valencia también influyó como causa eficiente y determinante, la conducta imprudente del conductor del tractocamión, pues aun cuando las condiciones del puesto de control le permitieron invadir finalmente el carril izquierdo, lo cierto es que, contrario a lo manifestado por el Juez *a quo*, aquél no se vio **obligado** por ningún miembro de la Policía Nacional a continuar el trayecto de la manera en que lo hizo. Por lo contrario, fue su propia decisión, violatoria, como se vio, del Código Nacional de Tránsito, la que materializó el riesgo creado en la vía, que provocó la muerte del motociclista.

Atendiendo lo expuesto, la Sala considera que el hecho dañino no se produjo única y exclusivamente por la omisión de la Policía Nacional sino también por la conducta del conductor del tractocamión, pues de no ser así, se estaría haciendo apología al incumplimiento de las disposiciones legales en materia de tránsito y transporte y, adicionalmente se partiría de una premisa falsa,

pues si bien las condiciones del puesto de control crearon un riesgo para quienes transitaban por el lugar, lo cierto es que el conductor de la tractomula contribuyó de manera cierta y eficaz a la materialización del mismo.

En ese sentido, para esta Corporación, el daño invocado por los demandantes fue consecuencia tanto de la omisión de la Policía Nacional, como de la conducta del conductor del tractocamión, en porcentajes de contribución causal del 50% cada uno.

El Tribunal precisa que la supuesta culpa de la víctima en su deceso no habrá de ser analizada en esta instancia, como quiera que así no lo solicitó la Policía Nacional en su recurso de apelación. No obstante lo anterior, la Sala deja constancia de que no existe ningún elemento material probatorio a través del cual se acredite que el señor Israel Gutiérrez Valencia transitaba a alta velocidad en su motocicleta o desconociendo alguna de las normas de tránsito, con lo cual hubiera contribuido al daño o incluso provocarlo.

## **5. Responsabilidad solidaria del señor Juan Augusto Ríos Osorio y de COLDETRANS**

De conformidad con el certificado expedido el 3 de septiembre de 2014 por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Rosa de Osos (fl. 69, C.1), el tractocamión de placas TTG200 es propiedad del señor Juan Augusto Ríos Osorio y, en tal sentido, recae en él la obligación de reparar el daño que fuere causado con su vehículo a terceros.

Ahora bien, aun cuando no reposa en el expediente el contrato de afiliación correspondiente, el Tribunal observa que el citado automotor se encontraba afiliado a la empresa COLDETRANS, pues dicho hecho fue aceptado expresamente como cierto por el señor Juan Augusto Ríos Osorio y la citada compañía en las respectivas contestaciones de la demanda.

En reciente sentencia del 5 de abril de 2021<sup>24</sup>, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia precisó lo siguiente respecto de la responsabilidad solidaria que se predica por parte del propietario del vehículo con el cual se genera un daño y de la empresa de transporte a la cual se encuentra afiliado éste:

*En relación con esta temática tiene dicho la Corte que:*

---

<sup>24</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Sentencia SC1084-2021 del 5 de abril de 2021. Radicación número: 68001-31-03-003-2006-00125-01.

*(...) por principio la prueba por cualquier medio probatorio idóneo de la afiliación o vinculación del vehículo destinado al transporte, 'legítima suficientemente a la empresa afiliadora para responder por los perjuicios que se causan a terceros en el ejercicio de la actividad peligrosa que entraña la movilización de vehículos automotores para la satisfacción del aludido servicio, pues si ella es la que crea el riesgo...' (cas. civ. sentencia número 021 de 1º de febrero de 1992) debe responder por los daños causados, dado que 'el solo hecho de estar afiliado un vehículo a determinada sociedad, implica que ésta en principio soporte alguna responsabilidad y tenga algún control sobre el vehículo' (CCXXXI, 2o volumen, 897), quedando comprendido el detrimento en la esfera o círculo de su actividad peligrosa. (CSJ SC de 17 may. 2011, rad. 2005-00345-01).*

*De allí que, en concordancia, el artículo 991 del Código de Comercio, modificado por el canon 9º del decreto 01 de 1990, consagre que «[c]uando la empresa de servicio público no sea propietaria o arrendataria del vehículo en que se efectúa el transporte, o no tenga a otro título el control efectivo de dicho vehículo, el propietario de éste, la empresa que contrate y la que conduzca, responderán solidariamente del cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato de transporte. La empresa tiene el control efectivo del vehículo cuando lo administra con facultad de utilizarlo y designar el personal que lo opera, directamente y sin intervención del propietario.»*

*(...)*

*La posición de guardián de la actividad desarrollada con un rodante causante de daños en accidente de tránsito se predica de las empresas de transporte, entre otras personas, «no sólo porque obtienen aprovechamiento económico como consecuencia del servicio que prestan con los automotores así vinculados sino debido a que, por la misma autorización que le confiere el Estado para operar la actividad, pública por demás, son quienes de ordinario ejercen sobre el automotor un poder efectivo de dirección y control, dada la calidad que de tenedoras legítimas adquieren a raíz de la afiliación convenida con el propietario o poseedor del bien, al punto que, por ese mismo poder que desarrollan, son las que determinan las líneas o rutas que debe servir cada uno de sus vehículos, así como las sanciones a imponer ante el incumplimiento o la prestación irregular del servicio, al tiempo que asumen la tarea de verificar que la actividad se ejecute previa la reunión integral de los distintos documentos que para el efecto exige el ordenamiento jurídico y las condiciones mecánicas y técnicas mediante las cuales el parque automotor a su cargo debe disponerse al mercado.» (CSJ SC de 20 jun. 2005, rad. 7627).*

Así las cosas, para este Tribunal, tanto el señor Juan Augusto Ríos Osorio como la empresa COLDETRANS, deben responder solidariamente por el

50% en que se estima que contribuyó el conductor del vehículo tractocamión en la muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia.

## **6. Sobre el reconocimiento y liquidación de perjuicios**

En tanto la entidad recurrente no discutió el reconocimiento y liquidación que el Juez de primera instancia hizo respecto de los perjuicios solicitados por la parte actora, esta Sala de Decisión se abstendrá de analizar este aspecto.

## **7. Responsabilidad de los llamados en garantía**

El llamamiento en garantía es una figura procesal que se fundamenta en la existencia de un derecho legal o contractual, que vincula a llamante y llamado y permite traer a éste como tercero para que haga parte de un proceso, con el propósito de exigirle la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir el llamante como producto de la sentencia o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso correspondiente. Se trata de una relación de carácter sustancial que vincula al tercero citado con la parte principal que lo cita y según la cual aquél debe responder por la obligación que surja en virtud de una eventual condena contra el llamante.

El artículo 225 del CPACA, regula la figura del llamamiento en garantía así:

**ARTÍCULO 225. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.** *Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.*

*El llamado, dentro del término de que disponga para responder el llamamiento que será de quince (15) días, podrá, a su vez, pedir la citación de un tercero en la misma forma que el demandante o el demandado.*

*El escrito de llamamiento deberá contener los siguientes requisitos:*

- 1. El nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí al proceso.*
- 2. La indicación del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran, lo último bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentación del escrito.*



3. Los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen.

4. La dirección de la oficina o habitación donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibirán notificaciones personales.

*El llamamiento en garantía con fines de repetición se regirá por las normas de la Ley 678 de 2001 o por aquellas que la reformen o adicionen.*

a) Llamada en garantía por parte del señor Juan Augusto Ríos Osorio

En punto al llamamiento en garantía de la aseguradora Allianz Seguros S.A., se recuerda que éste se efectuó con fundamento en la póliza de autos n° 021226541/41 suplemento 1, con vigencia entre el 20 de abril de 2013 y el 19 de abril de 2014 (fls. 142 a 144, C.1 y 246 a 281, C.1A).

En relación con el citado llamamiento en garantía, la aseguradora propuso los medios exceptivos que se resuelven a continuación:

▪ ***“PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO”.***

Allianz Seguros S.A. manifestó que en este caso se configuró la prescripción ordinaria de las acciones que se derivan del contrato de seguro, por cuanto transcurrieron más de dos (2) años entre la fecha en que la víctima falleció y aquella en la cual fue vinculada al proceso la aseguradora.

La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro se encuentra regulada en el artículo 1.081 del Código de Comercio, así:

**ARTÍCULO 1081. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES.** *La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.*

*La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.*

*La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.*

*Estos términos no pueden ser modificados por las partes.*

Ahora bien, como lo ha señalado el Consejo de Estado<sup>25</sup> con fundamento en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia<sup>26</sup>, para el cómputo del término de prescripción precitado se debe tener en cuenta lo previsto en el artículo 1.131 del Código de Comercio, puesto que “<<(…) La demanda judicial o extrajudicial de la indemnización de la víctima al asegurado, la toma el citado precepto como hecho mínimo para la exigibilidad de la responsabilidad que pueda reclamar el asegurado frente al asegurador […] Luego si solo desde ese instante puede reclamarse la responsabilidad al asegurador por parte del asegurado, mal puede hacerse el cómputo de la prescripción desde época anterior.>>”.

El artículo 1.131 del Código de Comercio dispone:

**ARTÍCULO 1131. OCURRENCIA DEL SINIESTRO.** *En el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. Frente al asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial.*

Bajo ese entendimiento y teniendo en cuenta que el término de prescripción en este caso comenzaba a correr a partir de la fecha de notificación de la demanda al señor Juan Augusto Ríos Osorio y a COLDETRANS, esto es, desde el 4 de julio de 2015, y vencía el 4 de julio de 2017, se concluye que la acción derivada de la póliza no había prescrito para cuando se le notificó a Allianz Seguros S.A. el llamamiento en garantía (20 de abril de 2016).

- **“LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA ALLIANZ SEGUROS S.A. SE ENCUENTRA LIMITADA”.**

Allianz Seguros S.A. sostuvo que su eventual responsabilidad se encuentra limitada por el valor de la suma asegurada establecida en el contrato de seguro, por encima de la cual no puede proferirse condena.

El valor que tendría que asumir la aseguradora corresponde al 50% de la condena impuesta en primera instancia, que fue de \$213'388.909,17 por concepto de perjuicios materiales y de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes por perjuicios morales (\$414'058.000 a 2019), para

---

<sup>25</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Consejero Ponente: Dr. Martín Bermúdez Muñoz. Sentencia del 3 de agosto de 2020. Radicación número: 76001-23-31-000-2006-02078-01(43650).

<sup>26</sup> Cita de cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 18 de mayo de 1994, rad. 4106.

un total de: \$627'446.909,17.

Ahora, conforme a la póliza de seguro, el valor asegurado por concepto de responsabilidad civil extracontractual asciende a la suma de \$3.000'000.000 (fl. 142, C.1).

Sin perjuicio de que la suma que la aseguradora tiene que asumir es inferior al valor asegurado, lo cierto es que el medio exceptivo formulado es procedente, en la medida en que efectivamente existe un límite para dicho pago, y así se declarará en la parte resolutive de esta providencia.

▪ ***“EXISTENCIA DE DEDUCIBLE”.***

Conforme se observa en lo pactado en la póliza de seguro, se acordó el pago de un deducible de \$1.100'000.000 del valor asegurado de \$3.000'000.000 (fl. 142, C.1).

En ese sentido, esta Corporación declarará probada la citada excepción, pues al afectarse parte del valor asegurado en la póliza, el asegurado deberá asumir el valor que corresponda por concepto de deducible.

▪ ***“FALTA DE CONFIGURACION (sic) ACTUAL DEL SINIESTRO”.***

Adujo la aseguradora que no se encuentran demostrados los perjuicios reclamados en la demanda y, por ello, hasta tanto no se acredite la ocurrencia del siniestro, su cuantía y se haya declarado judicialmente responsable al llamante en garantía, el amparo o cobertura de la póliza no resulta aplicable.

Dado que en este proceso se demostró que efectivamente el vehículo tractocamión respecto del cual se constituyó la póliza de seguro, colisionó con la motocicleta en la que se desplazaba el señor Israel Gutiérrez Valencia, produciendo la muerte inmediata de éste; y que además dicho impacto fue consecuencia en parte de la conducta imprudente del conductor del automotor implicado, esta Sala de Decisión considera que sí se configuró el siniestro y, por ende, se hará efectiva la garantía referida en la póliza, teniendo en cuenta en todo caso el límite de valor asegurado, así como el deducible que el asegurado habrá de asumir.

Por lo expuesto, la Sala declarará no probadas las excepciones de ***“PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE***

***SEGURO” y “FALTA DE CONFIGURACION (sic) ACTUAL DEL SINIESTRO”; mientras que tendrá por probadas las de “LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA ALLIANZ SEGUROS S.A. SE ENCUENTRA LIMITADA” y “EXISTENCIA DE DEDUCIBLE”.***

b) Llamada en garantía por parte de la empresa COLDETRANS

Conforme se indicó en el acápite de antecedentes, COLDETRANS denunció el pleito a la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda., aduciendo que el tractocamión implicado transportaba carga de dicha empresa y, por lo tanto, tiene calidad de solidario y civilmente responsable (fls. 209 a 211, C.1). Acotó que para el mes de los hechos, COLDETRANS nunca cargó bajo su responsabilidad el referido vehículo.

A la denuncia en pleito, el Juzgado de primera instancia le imprimió el trámite de llamamiento en garantía.

Al respecto, esta Corporación estima que en el proceso no se acreditó el derecho legal o contractual a través del cual COLDETRANS pudiera exigirle a la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda. que responda por la condena que aquella debe asumir de manera solidaria con el señor Juan Augusto Ríos Osorio. Lo anterior, en la medida en que, independientemente del contrato para la carga de mercancía perteneciente a la cooperativa, que además no fue allegado al expediente, lo cierto es que el vehículo tractocamión siguió estando vinculado a la empresa transportadora, lo que impide que ésta pueda exonerarse de la responsabilidad extracontractual.

No hay prueba alguna en el expediente que permita afirmar que el hecho que la carga que transportaba el tractocamión el día del accidente fuera propiedad de la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda., implica que ésta debía asumir la responsabilidad de guardián de la actividad que el vehículo realizaba.

Recuérdese que, como se indicó anteriormente, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que la empresa a la cual está afiliado el vehículo es quien tiene el control efectivo del mismo al momento de administrarlo con facultad de utilizarlo y de designar incluso al personal que lo opera, sin intervención del propietario; y que sólo cuando se demuestre que la empresa no tiene dicho control del automotor, entrarían a responder solidariamente el propietario, quien contrató y el conductor, por las obligaciones que surjan del contrato de transporte, conforme al artículo 991 del Código de Comercio. En este caso, se repite, COLDETRANS no acreditó que no tuviera el control efectivo del vehículo.

Bajo ese entendimiento, esta Sala de Decisión declarará probada la excepción formulada por la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda. y que denominó: ***“INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD”***; absteniéndose entonces de resolver sobre los demás medios exceptivos propuestos por la llamada en garantía.

### **Conclusión**

De conformidad con lo expuesto en esta providencia, se concluye que en este caso se acreditó la existencia de responsabilidad extracontractual por parte de la Policía Nacional (en un 50%) y del señor Juan Augusto Ríos Osorio y COLDETRANS (en un 50% de manera solidaria), en el fallecimiento del señor Israel Gutiérrez Valencia. En ese orden de ideas, habrá de modificarse la providencia objeto de apelación, para declarar igualmente responsables del daño antijurídico al señor Juan Augusto Ríos Osorio y a COLDETRANS, así como para precisar los porcentajes de participación de los mismos en el hecho dañino.

Adicionalmente, se condenará a Allianz Seguros S.A. a que reembolse el valor a que está obligado a pagar el señor Juan Augusto Ríos Osorio, llamante en garantía, con ocasión de este proceso.

De otra parte, se negará el llamamiento en garantía frente a la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda.

Finalmente se precisa que, en tanto no fueron objeto de apelación, el Tribunal mantendrá la decisión adoptada por el Juez de primera instancia en relación con los perjuicios reconocidos y su monto.

### **Costas**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, esta Sala de Decisión se abstendrá de condenar en costas en esta instancia, como quiera que la demanda no fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal, como lo exige la norma.

*En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,*

## FALLA

**Primero. MODIFÍCASE** la sentencia del cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, dentro del proceso de reparación directa promovido por los señores Omaira Guerrero Largo y otros contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, COLDETRANS S.A. y el señor Juan Augusto Ríos Osorio, en el cual fueron llamados en garantía Allianz Seguros S.A. y la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda.

Lo anterior, en el siguiente sentido:

**Segundo. MODIFÍCASE el ordinal primero** de la providencia recurrida, el cual quedará así:

*DECLÁRASE administrativa y patrimonialmente responsables a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, en un 50%, y de manera solidaria al señor Juan Augusto Ríos Osorio y a COLDETRANS en el 50% restante, por los perjuicios causados a la parte actora, con ocasión del fallecimiento del señor Israel Gutiérrez Valencia.*

**Tercero. ADICIÓNANSE los siguientes incisos al ordinal segundo** del fallo apelado, así:

*DECLÁRANSE no probadas las excepciones propuestas por el señor Juan Augusto Ríos Osorio y COLDETRANS, que denominaron: “HECHO DE UN TERCERO”, “CONCURSO DE LA VICTIMA (sic) DEL DAÑO”, “INEXISTENCIA DE LOS DAÑOS ALEGADOS POR LOS DEMANDANTES”, “INEXISTENCIA DE PRUEBA DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS DEMANDADOS” e “(...) INNOMINADA”.*

*DECLÁRANSE no probados los siguientes medios exceptivos formulados por Allianz Seguros S.A.: “PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO” y “FALTA DE CONFIGURACION (sic) ACTUAL DEL SINIESTRO”.*

*DECLÁRANSE probadas las excepciones propuestas por Allianz Seguros S.A. y que denominó: “LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA ALLIANZ SEGUROS S.A. SE ENCUENTRA LIMITADA” y “EXISTENCIA DE DEDUCIBLE”.*

*DECLÁRASE probado el siguiente medio exceptivo formulado por la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda.: “INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD” y, en consecuencia, ABSUÉLVESE de responsabilidad a la citada llamada en garantía.*

**Cuarto. REVÓCASE el ordinal tercero** de la providencia objeto de debate, con el cual se negaron las pretensiones de la demanda respecto del señor Juan Augusto Ríos Osorio y COLDETRANS.

**Quinto. MODIFÍCASE el ordinal cuarto** de la sentencia de primera instancia, el cual quedará así:

*CONDÉNASE a Allianz Seguros a que con cargo a la póliza de autos n° 021226541/41 suplemento 1, y teniendo en cuenta en todo caso el límite del valor asegurado, así como el deducible que el asegurado deba pagar por dicho concepto, asuma la condena impuesta de manera solidaria contra el señor Juan Augusto Ríos Osorio.*

**Sexto. MODIFÍCANSE los ordinales quinto y séptimo** del fallo objeto de apelación, en el sentido de disponer que la condena por concepto de perjuicios, tanto materiales como morales, se predica en un 50% frente a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, y en un 50% y de manera solidaria respecto del señor Juan Augusto Ríos Osorio y de COLDETRANS S.A.


**Séptimo.** En lo demás, **CONFÍRMASE** la providencia recurrida.

**Octavo. ABSTIÉNESE** de condenar en costas en esta instancia, por lo brevemente expuesto.

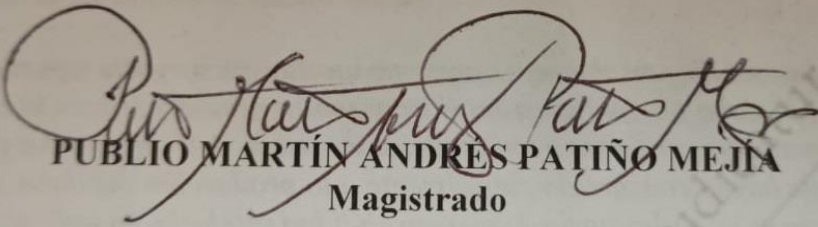
**Noveno. NOTIFÍQUESE** conforme lo dispone el artículo 203 del CPACA.

**Décimo.** Ejecutoriada esta providencia, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen y **HÁGANSE** las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”.

**Notifíquese y cúmplase**



AUGUSTORAMÓN CHÁVEZ MARÍN  
Magistrado

  
**PUBLIO MARTÍN ANDRÉS PATIÑO MEJÍA**  
Magistrado

  
**CARLOS MANUEL ZAPATA JAIMES**  
Magistrado

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS**

**NOTIFICACIÓN POR ESTADO**

No. 153

FECHA: 29/08/2022



**HÉCTOR JAIME CASTRO CASTAÑEDA**  
SECRETARIO





**CONSEJO DE ESTADO**  
**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**  
**SECCIÓN TERCERA**  
**SUBSECCIÓN B**

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D. C., 17 de mayo de 2023

**Radicación:** 11001-03-15-000-2022-06588-00

**Demandante:** Coldetrans SA

**Demandado:** Tribunal Administrativo de Caldas

**Referencia:** Acción de tutela. Primera Instancia

*Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Defecto fáctico - se niega*

*Síntesis del caso: La sociedad demandante enjuició la sentencia que, dentro de un proceso de reparación directa, la declaró solidariamente responsable del 50% de los perjuicios reconocidos por la muerte de un motociclista que chocó con un tractocamión. A su juicio, la autoridad judicial que profirió dicha decisión dejó de valorar ciertas pruebas.*

De acuerdo con la competencia asignada<sup>1</sup>, procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Coldetrans SA en contra del Tribunal Administrativo de Caldas.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

## **1. ANTECEDENTES**

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y terceros.

### **1.1. Posición de la parte demandante**

1. El 9 de diciembre de 2022, Coldetrans SA, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas por la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso, (defensa y contradicción), el derecho de igualdad, así como también de los principios constitucionales de confianza legítima y buena fe, con ocasión de la Sentencia de 26 de agosto de 2022, proferida dentro del proceso de reparación directa No. 17001-33-33-004-2014-00566-00/02.

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se transcribe):

*“1. TUTELAR los derechos de COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE COLDETRANS S.A, al Debido Proceso, el Derecho de Defensa y Contradicción, el Derecho de Igualdad (procesal) y los principios de Confianza legítima y el de*

---

<sup>1</sup> Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.

*Buena Fe y deber de imparcialidad del juez para el trámite del mismo y análisis integral del expediente, de los que es titular COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE COLDETRANS S.A, quebrantados por Sala Quinta de decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, en el fallo de fecha veintiséis (26) de Agosto de dos mil veintidós (2022) mediante el Accionado, modifíco el fallo de primera instancia y profirió condena en contra de COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE COLDETRANS S.A, sin que esta tuviera responsabilidad alguna en el evento que origina la demanda, limita la responsabilidad de la demandada POLICIA NACIONAL AL 50%, exonerando además a la empresa de transporte terrestre automotor de carreta que tenía la vinculación temporal del vehículo de placas TTG200, desconociendo la prueba irrefutable de la responsabilidad de empresa de transporte COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA, y finalmente establece un deducible frente a la póliza de ALLIANZ (llamada en garantía) superior a lo que establecido en la póliza de autos No. 021226541/41, dentro del proceso acción de Reparación Directa, bajo radicado con número de radicado 17001333300420140056600 tramitado contra COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE COLDETRANS S.A, y otros.*

*2. En consecuencia, se pretende mediante esta tutela como instrumento excepcional y residual, revocar y/o modificar las decisiones proferidas en segunda instancia por Sala Quinta de decisión, integrada por los Magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas, AUGUSTO RAMON CHÁVEZ MARÍN, MARTIN ANDRES PATIÑO MEJIA Y CARLOS MANUEL ZAPATA JAIMES y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, que resolvió el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia dentro del proceso ya referenciado.*

*3. Se garanticen los derechos fundamentales conculcados a la demandada COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE COLDETRANS S.A. y se profiera el fallo o fallos sustitutivos a que haya lugar que reestablezcan y salvaguarden los derechos fundamentales conculcados a COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE COLDETRANS S.A y corrija las vías de hecho y los defectos fácticos expuestos y explicados.*

*4. Se tomen las demás medidas que sean idóneas para la protección integral de los derechos fundamentales de COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE COLDETRANS S.A.”.*

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se destacan los siguientes:

4. 1) El 11 de junio de 2013, la Cooperativa Quindiana de Transportes Ltda. emitió el manifiesto de carga No. 9651957 para que el vehículo tipo “tractocamión” con placas TTG200, de propiedad de Juan Augusto Ríos y afiliado a Coldetrans SA, transportara una mercancía de Buenaventura (Valle del Cauca) a Supía (Caldas).

5. 2) El 12 de junio de 2013, la Policía Nacional instaló un retén en el kilómetro 31 de la vía Cauyá – La Pintada, de doble sentido, en el municipio de Riosucio – Caldas. El conductor del vehículo de placas TTG200 se encontró con dicho retén y, presuntamente, ante la falta de instrucción de “pare” y con el fin de esquivar los carros que estaban detenidos, procedió a invadir el carril contrario, y, mientras avanzaba, Israel Gutiérrez Valencia, quien conducía una motocicleta, chocó con el tractocamión, lo cual ocasionó su muerte.

6. 3) Con ocasión de lo anterior, el 20 de octubre de 2014, el grupo familiar de Israel Gutiérrez Valencia demandó, en ejercicio del medio de control de reparación directa, a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a Coldetrans SA y al propietario del vehículo de placas TTG200, Juan Augusto Ríos, con el fin de que les repararan los perjuicios causados con la muerte del señor Gutiérrez Valencia.

7. 4) El 5 de diciembre de 2019, el Juzgado 3 Administrativo de Manizales profirió sentencia de primera instancia y condenó, como única responsable, a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a resarcir los perjuicios ocasionados, tras concluir que la muerte del señor Gutiérrez Valencia fue consecuencia de la inobservancia de las respectivas medidas de seguridad en la instalación del retén. En esa medida, negó las pretensiones dirigidas contra Coldetrans SA y Juan Augusto Ríos Osorio, por prosperar la excepción de hecho de un tercero, y concluyó que, por lo anterior, quedaba sin piso jurídico el llamamiento en garantía realizado respecto de Allianz Seguros SA y la Cooperativa Quindiana de Transporte Ltda.

8. 5) La anterior decisión fue apelada por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, bajo el argumento de que la instalación del retén no tuvo ninguna incidencia en el resultado y que, por el contrario, lo que produjo la muerte del señor Gutiérrez Valencia fue el actuar imprudente de quien conducía el vehículo de placas TTG200 porque (se transcribe) *“no solo no obedeció la norma frente a la prohibición de adelantar en doble línea [a pocos metros de una curva], sino que esquivó el puesto de control desobedeciendo y haciendo caso omiso a la señal de precaución y de cierre que representaba el cono”*.

9. 6) El 26 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas profirió sentencia de segunda instancia y dispuso modificar la decisión apelada, al considerar que el proceder de quien conducía el vehículo de placa TTG200 sí había sido imprudente y, como consecuencia, había causado el resultado de manera concurrente. En ese sentido, declaró que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional era responsable del 50% de los perjuicios reconocidos por haber instalado un puesto de control sin los requisitos mínimos ni el procedimiento correspondiente<sup>2</sup>, y que Coldetrans SA y Juan Augusto Ríos<sup>3</sup> también lo eran, solidariamente, del 50% restante, porque el

---

<sup>2</sup> Al respecto determinó (se transcribe) *“De lo anterior se dejó constancia únicamente en el libro de guardia (fls. 165 a 168, C.I.), esto es, no se expidió previamente orden de servicios para realizar tal actividad. Pese a lo establecido en el procedimiento correspondiente y teniendo en cuenta que se trataba de una zona rural, las unidades policiales asignadas no fueron las necesarias, esto es, 10 policías. En relación con la ubicación del puesto de control, sólo consta en el expediente que el mismo se instaló en una recta, seguida de una curva pronunciada que se hallaba más o menos a media cuadra o a 50 metros. Quedó demostrado igualmente en el proceso que el citado puesto de control se ubicó en parte del carril que conducía de Anserma a Riosucio, para lo cual se usaron como señales únicamente dos conos a lado y lado. Ninguno de los policías que integraban el puesto de control fue asignado a manejar señal de pare o siga, y tampoco a conducir el tránsito vehicular durante el tiempo que permanecieron en el sector.*

<sup>3</sup> En lo que a él atañe, el tribunal resolvió (se transcribe) **“Quinto. MODIFÍCASE** el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia, el cual quedará así: **CONDÉNASE** a Allianz Seguros a que con cargo a la póliza de autos

tractocamión incurrió en una infracción de tránsito al ocupar en contravía, sobre una curva cerrada, el carril por el que se movilizaba la víctima.

10. Como fundamento de la vulneración, el accionante alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en *defecto fáctico* por desconocer el manifiesto de carga No. 9651957 de 11 de junio de 2013<sup>4</sup>, expedido por la Cooperativa Quindiana de Transportadores, y del cual, a su juicio, se podía determinar que el vehículo de placas TTG200 tenía una vinculación temporal con esta última cooperativa y no con Coldetrans SA, por lo que, de conformidad con el parágrafo del artículo 2.2.1.7.4.4. del Decreto 1079 de 2015<sup>5</sup>, la primera asumió la guarda, vigilancia y responsabilidad del vehículo al momento de los hechos, por haber emitido el manifiesto de carga en cuestión. Preciso que, si bien, el tribunal refirió una afiliación, la misma no comprendía la vinculación<sup>6</sup>.

11. Asimismo, alegó la indebida valoración de (1) la póliza de Allianz Seguros SA que tenía un deducible pactado de \$1.100.000, pero que el tribunal demandado lo estableció en \$1.100.000.000; (2) el informe de accidentes, los testimonios y el material probatorio pues, según mencionó, el Tribunal Administrativo de Caldas omitió el hecho de que el fallecido desplegaba una actividad peligrosa y transitaba con exceso de velocidad, razón por la cual es imperativo concluir que este participó en la configuración del resultado, además de que la Policía Nacional fue la única responsable de lo ocurrido, por la instalación de un retén (se transcribe) “*sin señalización adecuada ni personal suficiente*”.

12. Por otro lado, sostuvo que el defecto fáctico alegado también se materializaba porque se tuvo como probados los perjuicios materiales de lucro cesante y el perjuicio moral sin que haya prueba suficiente de su carácter cierto e intensidad para fijar su reconocimiento y, además, se omitió la práctica y decreto de pruebas de oficio.

## 1.2. Posición de la parte demandada y terceros<sup>7</sup>

---

n021226541/41 suplemento 1, y teniendo en cuenta en todo caso el límite del valor asegurado, así como el deducible que el asegurado deba pagar por dicho concepto, asuma la condena impuesta de manera solidaria contra el señor Juan Augusto Ríos Osorio.

<sup>4</sup> Prueba que según indicó se incorporó en la audiencia de pruebas No. 198 de 20 de septiembre de 2017.

<sup>5</sup> “ARTÍCULO 2.2.1.7.4.4. Contrato de vinculación. (...)”

**PARÁGRAFO.** Las empresas de Transporte Público y los propietarios de los vehículos podrán vincular los equipos transitoriamente para la movilización de la carga, bajo la responsabilidad de la empresa que expide el manifiesto de carga”.

<sup>6</sup> Al respecto indicó que (se transcribe) “la afiliación de los vehículos de carga se realizó antaño, en vigencia del decreto 173 de 2001, que exigía la emisión del Registro nacional de transporte de transporte para la matrícula del vehículo (artículo 24, 25, 26), disposiciones derogadas por el decreto 1499 de 2009”.

<sup>7</sup> Mediante Auto de 13 de diciembre de 2022, el despacho resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia, (2) tener como demandado al Tribunal Administrativo de Caldas, y (3) vincular al Juzgado 3 Administrativo de Manizales, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y a la parte demandante del proceso ordinario (Omaira Guerrero Largo, Arsomán Gutiérrez Navarrete, Bertilda Rosa Valencia, Álvaro Antonio Fernando, Otoniel y Uber Gutiérrez Valencia), como terceros con interés en el asunto.

Adicionalmente, a través de Auto de 14 de marzo de 2023, el despacho ordenó también vincular a Allianz Seguros SA, como tercero interesado en el proceso.

13. El Tribunal Administrativo de Caldas manifestó que la providencia enjuiciada fue emitida con plena observancia de los derechos y garantías que aseguraron a las partes la igualdad procesal y una decisión imparcial y debidamente motivada. Además, mencionó que el fundamento de la vulneración tenía relación directa con la valoración probatoria que fue realizada al interior del proceso ordinario, de modo que toda inconformidad en relación con dicho aspecto debió presentarse y discutirse allí y no a través de la acción de tutela como una instancia adicional de lo que ya había decidido el juez natural.

14. El Juzgado 3 Administrativo de Manizales alegó que la acción de tutela presentada carecía de sustento jurídico y fáctico, ya que a través de esta se pretendía revivir el debate probatorio que fue resuelto por las autoridades judiciales competentes en el trámite ordinario.

15. La Policía Nacional solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela por la inexistencia de la vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante, ya que el vehículo tractocamión, para ese entonces, estaba afiliado a Coldetrans SA. Además, adujo que no existía un perjuicio irremediable que hiciera procedente la tutela, máxime cuando lo pretendido se había debatido a través de las vías judiciales idóneas.

16. Allianz Seguros SA señaló que su pronunciamiento estaría limitado a la supuesta configuración de un defecto fáctico por indebido análisis de la póliza de seguro, en relación con lo cual manifestó que se trataba de un simple error de digitación que no tenía relevancia alguna, de cara a los derechos fundamentales del accionante, toda vez que, de la lectura de la sentencia, se podía inferir que el deducible reconocido no superaba el monto a pagar. En ese orden, señaló que para cumplir el numeral quinto de la parte resolutive de la providencia<sup>8</sup> debía observarse el contenido de la póliza sobre la cual se sustentaba.

17. En todo caso, consideró que a Coldetrans SA no le asistía ningún interés en la decisión tomada frente a Allianz SA, por no ser parte del contrato de seguro ni beneficiaria de la prestación asegurada. Así las cosas, adujo que ningún vínculo legal o contractual obligaba a Allianz a soportar la condena impuesta a dicha sociedad.

18. Los demás vinculados guardaron silencio.

---

<sup>8</sup> **"Quinto. MODIFÍCASE el ordinal cuarto** de la sentencia de primera instancia, el cual quedará así: **CONDÉNASE** a Allianz Seguros a que con cargo a la póliza de autos n° 021226541/41 suplemento 1, y teniendo en cuenta en todo caso el límite del valor asegurado, así como el deducible que el asegurado deba pagar por dicho concepto, asuma la condena impuesta de manera solidaria contra el señor Juan Augusto Ríos Osorio."

## **2. CONSIDERACIONES DE LA SALA**

Contenido: 2.1. Identificación de defectos y objeto de estudio. 2.2 Fijación de la controversia. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Verificación de defectos y/o vulneración alegada. 2.5. Conclusión.

### **2.1. Identificación de defectos y objeto de estudio**

19. Aunque la sociedad accionante también alegó la configuración de un defecto fáctico por indebida valoración de testimonios y otros elementos probatorios, la Sala observó que no aludió de manera expresa, ni individualizó los testimonios u otro tipo de elementos que, supuestamente, fueron valorados de manera indebida, situación que imposibilita cualquier estudio al respecto.

20. De igual forma ocurrió con los cargos: 1) haberse tenido como probados los perjuicios materiales de lucro cesante y el perjuicio moral sin prueba suficiente de su carácter cierto e intensidad para su reconocimiento, y 2) haberse omitido la práctica y decreto de pruebas de oficio, pues, la Sala advirtió que la sociedad accionante se limitó a mencionarlos, pero no desarrolló ninguno de los 2 reproches en cuestión frente al estudio probatorio del caso, sino que fueron simples afirmaciones o manifestación de inconformidad sin respaldo alguno. Por tal motivo, la Sala también se sustraerá de su análisis.

21. En consecuencia, se realizará un estudio del defecto fáctico en cuestión, pero, únicamente, a la luz de los elementos probatorios que sí fueron individualizados: el manifiesto de carga, el informe de accidentes y la póliza de seguro. Precizando que, aunque la parte actora aludió a la inobservancia de una norma - parágrafo del artículo 2.2.1.7.4.4 del Decreto 1079 de 2015 –, tal reparo no se analizará a la luz de un eventual defecto sustantivo, sino bajo el mismo defecto fáctico, por referirse al valor que debía dársele al supuesto de hecho de la norma.

### **2.2. Fijación de la controversia**

22. Determinar, luego de verificados los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, si el Tribunal Administrativo de Caldas incurrió en un defecto fáctico por la indebida valoración de 1) el manifiesto de carga No. 9651957 de 11 de junio de 2013, a la luz del parágrafo del artículo 2.2.1.7.4.4 del Decreto 1079 de 2015, 2) la póliza de seguro No. 021226541/41 y 3) el informe de accidentes de la Policía Nacional.

### 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial<sup>9</sup>

23. La Sala encuentran satisfechos los requisitos generales de: subsidiariedad, toda vez que no existe recurso idóneo y eficaz que permitiera a la parte demandante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos presuntamente vulnerados. Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la providencia enjuiciada (29/8/22)<sup>10</sup> y la de interposición de la presente acción de tutela (9/12/22). No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia está relacionada con una sentencia de segunda instancia dictada en el marco de un proceso de reparación directa. Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. Por último, se advierte que la controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la presunta afectación de derechos fundamentales de la entidad demandante en el marco de un proceso de reparación directa, con ocasión de una providencia de segunda instancia respecto de la cual se alegó la configuración un defecto fáctico. Aunado a ello, no se observa que se trate de la reiteración de argumentos esgrimidos en el proceso de reparación directa o que se haya pretendido llevar a una instancia adicional el pleito.

### 2.4. Verificación de defectos y/o vulneración alegada

24. En el presente caso, la Sala negará al amparo solicitado, tras verificar que en la providencia enjuiciada no se configuró el defecto fáctico alegado, por las siguientes razones:

25. (1) La sociedad accionante alegó que el Tribunal Administrativo de Caldas, en la Sentencia de 26 de agosto de 2022, desconoció el manifiesto de carga No. 9651957 de 11 de junio de 2013, del cual, a su juicio, se podía determinar que el vehículo de placas TTG200 tenía una vinculación temporal con esta última cooperativa y no con Coldetrans SA, de conformidad con el parágrafo del artículo 2.2.1.7.4.4. del Decreto 1079 de 2015.

26. Habida cuenta de lo anterior, la Sala destaca que, en la Sentencia de 26 de agosto de 2022, la autoridad judicial demandada determinó (se transcribe):

*“b) Llamada en garantía por parte de la empresa COLDETRANS (...)*

*Al respecto, esta Corporación estima que en el proceso no se acreditó el derecho legal o contractual a través del cual COLDETRANS pudiera exigirle a la*

---

<sup>9</sup> El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-66 de 2019.

<sup>10</sup> Al consultar el expediente de reparación directa allegado al presente proceso, se constató que el mensaje de datos fue enviado el 29 de agosto de 2022. Ver cuaderno 5, folios 53 y 54.

*Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda. que responda por la condena que aquella debe asumir de manera solidaria con el señor Juan Augusto Ríos Osorio. Lo anterior, en la medida en que, independientemente del contrato para la carga de mercancía perteneciente a la cooperativa, que además no fue allegado al expediente, lo cierto es que el vehículo tractocamión siguió estando vinculado a la empresa transportadora, lo que impide que ésta pueda exonerarse de la responsabilidad extracontractual.*

*No hay prueba alguna en el expediente que permita afirmar que el hecho que la carga que transportaba el tractocamión el día del accidente fuera propiedad de la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda., implica que ésta debía asumir la responsabilidad de guardián de la actividad que el vehículo realizaba.*

*Recuérdese que, como se indicó anteriormente, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que la empresa a la cual está afiliado el vehículo es quien tiene el control efectivo del mismo al momento de administrarlo con facultad de utilizarlo y de designar incluso al personal que lo opera, sin intervención del propietario; y que sólo cuando se demuestre que la empresa no tiene dicho control del automotor, entrarían a responder solidariamente el propietario, quien contrató y el conductor, por las obligaciones que surjan del contrato de transporte, conforme al artículo 991 del Código de Comercio. En este caso, se repite, COLDETRANS no acreditó que no tuviera el control efectivo del vehículo.*

*Bajo ese entendimiento, esta Sala de Decisión declarará probada la excepción formulada por la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda. y que denominó: "INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD"; absteniéndose entonces de resolver sobre los demás medios exceptivos propuestos por la llamada en garantía.<sup>11</sup> (Se resalta)"*

27. De lo transcrito, la Sala observa que, aunque la autoridad judicial demandada, al analizar el llamamiento en garantía por parte de Coldentrans SA, no hizo alusión expresa al manifiesto de carga No. 9651957 de 11 de junio de 2013, el cual fue decretado e incorporado como prueba<sup>12</sup>, ello no implica que haya incurrido en un defecto fáctico capaz de cambiar la decisión, pues, lo relevante no era determinar de quién era la carga, sino a qué empresa estaba vinculado el tractocamión, en esa medida el Tribunal Administrativo de Caldas indicó que (se transcribe) "*independientemente del contrato para la carga de mercancía perteneciente a la cooperativa, lo cierto es que el vehículo siguió estando vinculado a la empresa transportadora*" (Coldetrans SA), la cual, a su vez, tampoco acreditó que no tuviera control sobre este.

28. Además, el hecho de que Coldetrans SA cuestione, bajo el título de un defecto fáctico, la ausencia de su responsabilidad en los hechos, aduciendo que, con fundamento en el manifiesto de carga y el parágrafo del artículo 2.2.1.7.4.4 del Decreto 1079 de 2015, se podía establecer que el tractocamión tenía una vinculación temporal con la Cooperativa Quindiana de Transportes Ltda., no configura tal defecto, pues, la Sala

---

<sup>11</sup> Extracto tomado de los folios 50 y 51 del cuaderno 5 que obra en el expediente digital ordinario allegado (ver índice 16 de SAMAI).

<sup>12</sup> Ver folio 373 del cuaderno 1A que obra en el expediente digital ordinario allegado (ver índice 16 de SAMAI).



identificó una providencia en la que la Sección Primera del Consejo de Estado, al analizar el parágrafo 22 del Decreto 173 de 2001, reiterado en el artículo 2.2.1.7.4.4 del Decreto 1079 de 2015, determinó (se transcribe):

*"En efecto, el manifiesto de carga, conforme lo prevé el mismo Decreto 173 de 2001 que se impugna, (...) acredita sin duda el contrato de transporte y es útil para detallar las mercancías que se movilizan, pero de ninguna manera puede entenderse que dicho documento reemplaza al contrato de vinculación, que como se vio, se torna en indispensable para regular las relaciones entre el propietario del vehículo y la empresa de transporte cuando aquél no hace parte del parque automotor registrado por la empresa respectiva.*

*(...)*

*La anterior circunstancia lleva a la Sala a negar las pretensiones de la demanda, en cuanto que el parágrafo del artículo 22 del Decreto 173 de 2001 expedido por el Presidente de la República, en manera alguna habilita a la empresa de transporte a prestar el servicio de transporte terrestre automotor de carga de manera transitoria con vehículos de terceros sin que medie contrato de vinculación, no siendo suficiente el porte del manifiesto de carga para esos mismos efectos.<sup>13</sup>"*

29. Por consiguiente, para la Sala resulta evidente que la norma aludida no determina ningún referente o valor probatorio preestablecido, en relación con el manifiesto de carga, pues se limita a enunciar una figura contractual y a establecer la posibilidad de que, en su desarrollo, se asigne responsabilidad a una de las partes. De ese modo, salta a la vista que el efecto perseguido por el accionante solo podría ser el resultado de 2 condiciones concurrentes: a) la existencia del contrato de vinculación, y b) la asunción de responsabilidad por parte de quien expidió el manifiesto de carga, las cuales no se dieron en su caso.

30. 2) En lo que tiene que ver con el cargo de indebida valoración probatoria, la Sala tampoco advierte la configuración del defecto fáctico alegado, en la medida que: (a) respecto de la póliza de seguro No. 021226541/41, la Sala evidenció que el tribunal demandado señaló el valor del deducible de \$1.100.000.000, únicamente, en la parte motiva de su providencia, pues en la parte resolutive no lo hizo<sup>14</sup> y, por ende, no se advierte una indebida valoración de dicho documento y, mucho menos, vulneración alguna a los derechos fundamentales de Coldetrans SA, máxime cuando las partes del contrato de seguro fueron Juan Augusto Ríos Osorio y Allianz Seguros SA y a ellos concernía tal aspecto.

31. (b) En relación con el informe de accidentes de la Policía Nacional, la Sala observó que este no daba cuenta de la situación que, a juicio de la parte actora, fue omitida por el tribunal, a saber, que la víctima transitaba

---

<sup>13</sup> Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 19 de octubre de 2018, radicado No. 11001-03-24-000-2012-00159-00.

<sup>14</sup> "Quinto. MODIFÍCASE el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia, el cual quedará así: CONDÉNASE a Allianz Seguros a que con cargo a la póliza de autos n021226541/41 suplemento 1, y teniendo en cuenta en todo caso el límite del valor asegurado, así como el deducible que el asegurado deba pagar por dicho concepto, asuma la condena impuesta de manera solidaria contra el señor Juan Augusto Ríos Osorio".

con exceso de velocidad, pues, en ninguna parte del documento aparece alguna anotación al respecto<sup>15</sup>.

32. Precisamente, de la falta de prueba del exceso de velocidad dieron cuenta tanto el Juzgado 3 Administrativo de Manizales, que estableció (se transcribe) *“la excepción de culpa exclusiva y determinante de la víctima, (...) no está llamada a prosperar, en la medida en que no fue probada por ningún medio por parte de la Policía Nacional<sup>16</sup>”*, como el Tribunal Administrativo de Caldas, al indicar que (se transcribe):

*“(...) la supuesta culpa de la víctima en su deceso no habrá de ser analizada en esta instancia, comoquiera que así no lo solicitó la Policía Nacional en su recurso de apelación. No obstante lo anterior, la Sala deja constancia de que no existe ningún elemento material probatorio a través del cual se acredite que el señor Israel Gutiérrez Valencia transitaba a alta velocidad en su motocicleta o desconociendo alguna de las normas de tránsito, con lo cual hubiera contribuido al daño o incluso provocarlo”*.

33. Así las cosas, no se observó una indebida valoración del informe de accidentes de la Policía Nacional, cuando ese documento no evidenciaba lo que la parte actora alegó, sino algo diferente<sup>17</sup>.

## 2.5. Conclusión

34. Al no configurarse el defecto alegado por la parte actora, la Sala negará las súplicas de la tutela.

## 3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### RESUELVE

**PRIMERO: NEGAR** la solicitud de amparo presentada por Coldetrans SA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: NOTIFICAR** la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier

---

<sup>15</sup> Al revisar el documento que obra en los folios 73 y 74 del cuaderno 1 del expediente digital ordinario allegado (ver índice 16 de SAMAI), la Sala evidenció que contenía el croquis del accidente y la siguiente observación (se transcribe) *“había un puesto de control aproximadamente a 50 mts del lugar de los hechos, puesto de control PONAL SETRA-DECAL UNIR 21.2”*, aspectos que, a su vez, fueron referenciados en sentencias del proceso de reparación directa (ver folio 446 reverso del cuaderno 1b y 38 del cuaderno 5 del expediente digital ordinario allegado (ver índice 16 de SAMAI).

<sup>16</sup> Folio 450 del cuaderno 1B del expediente digital ordinario allegado (ver índice 16 de SAMAI).

<sup>17</sup> Ver pie de página 15 de esta providencia.

recurso y/o solicitud contra la misma, deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin<sup>18</sup>.

**TERCERO:** De no ser impugnada esta providencia **REMITIR** el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

**CUARTO:** Por Secretaría General de esta Corporación, **PUBLICAR** la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

**NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE**

Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente  
**MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ**

Firmado electrónicamente  
**FREDY IBARRA MARTÍNEZ**

Firmado electrónicamente  
**ALBERTO MONTAÑA PLATA**

---

<sup>18</sup> [secgeneral@consejodeestado.gov.co](mailto:secgeneral@consejodeestado.gov.co)



**CONSEJO DE ESTADO**  
**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**  
**SECCIÓN TERCERA**  
**SUBSECCIÓN A**

**CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN**

Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

**Radicación:** 11001-03-15-000-2022-06588-01  
**Demandante:** COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTES  
COLDETRANS S.A.  
**Demandado:** TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS  
**Referencia:** SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

*ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / La demanda carece de carga argumentativa jurídica suficiente y coherente para discutir la razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada / Se pretende usar la tutela como instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.*

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia del 17 de mayo de 2023<sup>1</sup>, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que negó las pretensiones de la tutela.

**I. ANTECEDENTES**

**1. La demanda**

**1.1. Pretensiones**

El 12 de diciembre de 2022, por medio de apoderada, la Compañía Colombiana de Transportes - COLDETRANS S.A. presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas, con el objeto de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, especialmente las garantías de defensa y contradicción, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. Formuló las siguientes pretensiones:

*1.- TUTELAR los derechos de COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE COLDETRANS S.A, al Debido Proceso, el Derecho de Defensa y Contradicción, el Derecho de Igualdad (procesal) y los principios*

---

<sup>1</sup> Se advierte que, el 2 de agosto 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.

de Confianza legítima y el de Buena Fe y deber de imparcialidad del juez para el trámite del mismo y análisis integral del expediente, de los que es titular COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE COLDETRANS S.A, quebrantados por Sala Quinta de decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, en el fallo de fecha veintiséis (26) de Agosto de dos mil veintidós (2022) mediante el Accionado, modifíco el fallo de primera instancia y profirió condena en contra de COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE COLDETRANS S.A, sin que esta tuviera responsabilidad alguna en el evento que origina la demanda, limita la responsabilidad de la demandada POLICIA NACIONAL AL 50%, exonerando además a la empresa de transporte terrestre automotor de carreta que tenía la vinculación temporal del vehículo de placas TTG200, desconociendo la prueba irrefutable de la responsabilidad de empresa de transporte COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA, y finalmente establece un deducible frente a la póliza de ALLIANZ (llamada en garantía) superior a lo que establecido en la póliza de autos No. 021226541/41, dentro del proceso acción de Reparación Directa, bajo radicado con número de radicado 17001333300420140056600 tramitado contra COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE COLDETRANS S.A, y otros.

2.- En consecuencia, se pretende mediante esta tutela como instrumento excepcional y residual, revocar y/o modificar las decisiones proferidas en segunda instancia por Sala Quinta de decisión, integrada por los Magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas, AUGUSTO RAMON CHÁVEZ MARÍN, MARTIN ANDRES PATIÑO MEJIA Y CARLOS MANUEL ZAPATA JAIMES y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, que resolvió el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia dentro del proceso ya referenciado.

3.- Se garanticen los derechos fundamentales conculcados a la demandada COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE COLDETRANS S.A. y se profiera el fallo o fallos sustitutivos a que haya lugar que reestablezcan y salvaguarden los derechos fundamentales conculcados a COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE COLDETRANS S.A y corrija las vías de hecho y los defectos fácticos expuestos y explicados.

4.- Se tomen las demás medidas que sean idóneas para la protección integral de los derechos fundamentales de COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE COLDETRANS S.A.

## 1.2. Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda, la parte actora narró que el 12 de junio de 2013 ocurrió un accidente de tránsito en un retén de la Policía Nacional, en el que falleció una persona, cuyos familiares promovieron el medio de control de reparación directa, que cursó ante el Juzgado Tercero Administrativo de Manizales bajo el radicado 17001333300420140056600.

El juzgado de conocimiento dictó sentencia el 5 de diciembre de 2019, en la que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda, por considerar que la muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia era atribuible únicamente a la Policía Nacional, razón por la cual exoneró a los demás demandados de cualquier responsabilidad, incluyendo a la aquí accionante.

La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional interpuso recurso de apelación y, en sentencia del 26 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas modificó la decisión del *a quo*, en el sentido de condenar solidariamente al señor Juan Augusto Ríos Osorio (propietario del tractocamión que causó el accidente) y a COLDETRANS S.A.

### **1.3. Argumentos de la tutela**

La parte actora manifestó que la acción de tutela es procedente porque cumple los requisitos generales y específicos exigidos por la jurisprudencia para cuestionar una providencia judicial.

A su juicio, la sentencia proferida el 26 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de Caldas incurrió en defecto sustantivo, procedimental, fáctico e inducido.

Al respecto, adujo que la autoridad judicial demandada consideró que al proceso no se allegó copia del manifiesto de carga No. 9651957, expedido por la Cooperativa Quindiana Transportes, cuando lo cierto es que esa prueba fue incorporada en la audiencia de pruebas.

Sostuvo que, por esa razón, la accionada no valoró tal documento y, en consecuencia, encontró responsable a COLDETRANS S.A., desconociendo que al momento del accidente la Cooperativa Quindiana Transportes, quien expidió el manifiesto de carga, tenía la vinculación temporal del vehículo causante del accidente y era «*guardián de la cosa*»; mientras que el señor Juan Augusto Ríos Osorio, como propietario, lo explotaba económicamente.

Lo anterior, en su criterio, muestra una decisión parcializada que favorece a la parte demandante y a la demandada Policía Nacional, toda vez que el Tribunal accionado

presumió la responsabilidad del conductor del tractocamión y descartó la de la Policía, cuando es evidente que el retén no cumplía las exigencias mínimas de seguridad. Además, no se percató de que la víctima fatal conducía su motocicleta con exceso de velocidad.

Refirió que el Decreto 173 de 2001, que exigía la emisión del registro nacional de transporte para la matrícula del vehículo, fue derogado por el Decreto 1499 de 2009 y, por ende, no es válido señalar que el vehículo estaba vinculado a COLDETRANS S.A. Esto significa que dicha sociedad no intervino en el contrato de transporte que ejecutaba el tractocamión involucrado en el accidente, no contrató a su conductor y no obtuvo beneficio económico o de ninguna otra índole.

Adicionalmente, señaló que la providencia censurada tuvo como acreditados el lucro cesante y el perjuicio moral, sin que hubiera prueba suficiente para ello.

De otra parte, sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en error en la valoración de la póliza que aseguraba al tractocamión en cuestión, al señalar que el valor asegurado es de \$3.000.000.000 y el deducible de \$1.100.000.000<sup>2</sup>, que es el límite de pago, pues con ello dejó a COLDETRANS sin cobertura, por ser el valor a pagar inferior al deducible determinado por el Tribunal.

Por último, afirmó que el Tribunal demandado erró al no darle credibilidad a los testigos que declararon que la víctima conducía con exceso de velocidad.

## **2. Trámite impartido e intervenciones**

**2.1.** Mediante auto del 13 de diciembre de 2022, el despacho sustanciador del proceso en primera instancia admitió la demanda, dispuso que aquel se notificara al Tribunal Administrativo de Caldas, al que requirió para que se pronunciara. Asimismo, vinculó como terceros con interés al Juzgado Tercero Administrativo de Manizales, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y a los señores Omaira Guerrero Largo, Arsoman Gutiérrez Navarrete, Bertilda Rosa Valencia, Álvaro Antonio, Fernando, Otoniel y Uber Gutiérrez Valencia, quienes conformaron el extremo activo del proceso ordinario.

---

<sup>2</sup> El deducible pactado era de \$1.100.000.

En auto posterior, fechado el 14 de marzo de 2023, vinculó a Allianz Seguros S.A., por considerar que tiene interés en las resultas del proceso, toda vez que fue llamada en garantía en el proceso ordinario.

**2.2.** El juez tercero administrativo de Manizales afirmó que la acción de tutela carece de sustento jurídico y fáctico, al tiempo que pretende revivir el debate probatorio que ya se surtió en el proceso ordinario, para que se decida la controversia en una tercera instancia.

**2.3.** La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional estimó que la solicitud de amparo es improcedente, toda vez que no se acredita la existencia de un perjuicio irremediable o de una amenaza inminente, que amerite la intervención urgente del juez de tutela.

**2.4.** Allianz Seguros S.A. señaló que no se presenta el defecto fáctico invocado frente al análisis de la póliza por ella expedida; por tanto, en ese punto no advierte anomalía alguna cometida por la autoridad judicial accionada. Agregó que es cierto que el Tribunal incurrió en un error de digitación en relación con el valor del deducible, pero esto se solucionó en la parte resolutive, sin que sea trascendente el yerro alegado.

Agregó que no le asiste ningún interés a COLDETRANS S.A. en la decisión adoptada frente a Allianz, pues dicha sociedad no es parte del contrato de seguro, ni fue establecida como beneficiaria de la prestación asegurada; además, no es beneficiaria de la condena que le fue impuesta a la aseguradora.

**2.5.** Las personas que conformaron el extremo demandante en el proceso de reparación directa guardaron silencio respecto de la acción de tutela instaurada por COLDETRANS S.A.

### **3. Fallo impugnado**

La Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 17 de mayo de 2023, negó la solicitud de amparo.

Encontró satisfechos los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela, incluido el de relevancia constitucional, y centró el estudio en el defecto fáctico invocado en virtud de la valoración probatoria del manifiesto de carga, el informe de accidente de tránsito y la póliza de seguro, por considerar que los demás vicios y defectos invocados no fueron explicados con suficiencia.



Sostuvo que a pesar de que el Tribunal demandado no hizo alusión expresa al manifiesto de carga, tal omisión no tiene la entidad para configurar el defecto fáctico alegado, toda vez que lo trascendental no era determinar de quién era la carga, sino a qué empresa estaba vinculado el tractocamión. Además, el citado manifiesto tampoco acredita que el vehículo tuviera una vinculación temporal con la Cooperativa Quindiana de Transportes Ltda., pues tan solo da cuenta del contrato de carga y de la mercancía transportada, por lo que carece de la relevancia que pretende darle la parte actora para trasladarle la responsabilidad a dicha cooperativa.

El *a quo* también descartó la indebida valoración de la póliza de seguro, dado que, aunque en la parte considerativa del fallo se hizo referencia a un deducible por valor de \$1.100.000.000, también lo es que en la parte resolutive se aludió al valor asegurado y al deducible que el asegurado debe pagar y, en consecuencia, no se advierte vulneración alguna de los derechos fundamentales de COLDETRANS S.A.

Finalmente, señaló que en el informe del accidente de tránsito no está acreditado el supuesto exceso de velocidad que, según la sociedad accionante, fue omitido por el Tribunal Administrativo de Caldas.

#### **4. Impugnación**

La apoderada de COLDETRANS S.A. solicitó que se revoque el fallo impugnado y, en su lugar, se acceda al amparo.

Señaló que el fallador de primera instancia omitió pronunciarse sobre la responsabilidad adicional que el Tribunal Administrativo de Caldas endilgó al conductor del vehículo involucrado en el accidente; desestimó el valor probatorio del manifiesto de carga, porque no tuvo en cuenta que mediante aquel se realizó la vinculación del tractocamión a la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda., y no consideró que el control del rodante siempre estuvo en cabeza de su propietario, señor Ríos Osorio, quien se benefició del producto de la operación de transporte.

Trajo a colación el concepto rendido por el Ministerio de Transporte No. 20091340234301 del 10 de junio de 2009, en el que hizo referencia al Decreto 173 de 2001, para señalar que mediante el manifiesto de carga se vinculan automotores

a una empresa no propietaria de vehículos de manera transitoria o permanente. Precisó que este concepto se encontraba vigente para la época de los hechos, mientras que la providencia en la que el *a quo* fundamentó la decisión era posterior.

Seguidamente, refirió las diferencias existentes entre la vinculación en el transporte de pasajeros y el transporte de carga, para insistir en que con el manifiesto de carga se prueba la vinculación del vehículo causante del accidente a la Cooperativa Quindiana Transportes, y con ello la responsabilidad solidaria de esta empresa y exoneración total de la accionante, quien no hizo parte de la negociación.

Por último, reiteró que la sentencia censurada descartó la responsabilidad de la Policía Nacional, desconociendo que, según los testimonios recaudados, el retén no cumplía las condiciones mínimas de seguridad exigidas, sumado a que valoró indebidamente el informe de accidentes y los testimonios que dan cuenta de una concurrencia de culpas, porque el motociclista conducía con exceso de velocidad.

## **II. CONSIDERACIONES**

### **1. Problema Jurídico**

En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo del 17 de mayo de 2023, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante el cual se negó la solicitud de amparo.

La Sala, en primer lugar, deberá examinar si está acreditado o no el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que se reúna esta exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos endilgados y, por ende, vulneraron los derechos fundamentales invocados por COLDETRANS S.A.

### **2. Análisis de la Sala**

#### **2.1. De la relevancia constitucional**

En sentencia del 5 de agosto de 2014<sup>3</sup>, la Sala Plena de esta Corporación señaló que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a

---

<sup>3</sup> Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello *«[n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»*.

El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente<sup>4</sup> reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

- **Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto**

De entrada, al igual que el *a quo*, la Sala considera que, respecto de los defectos sustantivo, procedimental y el error inducido, COLDETRANS S.A. no explicó con claridad suficiente en qué consiste la violación alegada. En efecto, la sola mención

---

<sup>4</sup> Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

que hace el solicitante frente dichos vicios no basta para considerar que se cumpla con el primer elemento del requisito de relevancia constitucional, puesto que resulta necesario que los señalamientos que se hagan en la demanda de tutela se sustenten razonablemente, a fin de que el juez cuente con los parámetros suficientes para decidir si una providencia judicial vulnera o no derechos fundamentales.

En relación con el defecto fáctico, tanto de la lectura de la solicitud de amparo como de la impugnación se colige el desacuerdo de la parte actora con la valoración probatoria realizada por la autoridad accionada desde tres aristas a saber: (i) omisión de valoración del manifiesto de carga; (ii) valoración indebida del informe de accidentes; (iii) valoración indebida de la póliza de seguro emitida por Allianz S.A.

No obstante, a diferencia de lo sostenido por el juez de tutela de primera instancia, esta Subsección considera que la solicitud de amparo no supera el requisito de relevancia constitucional, teniendo en cuenta que la sociedad accionante pretende convertir este valioso mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso de reparación directa.

Si bien la parte actora aduce no estar de acuerdo con la decisión de la autoridad accionada, porque considera que no valoró los medios de prueba correctamente, de manera que la exonerara de responsabilidad, lo cierto es que no presenta un argumento contundente que desvirtúe la decisión acogida por la autoridad judicial y se limita a reiterar lo dicho en el curso de proceso cuando formuló la denuncia del pleito frente a la Cooperativa Quindiana Transportes, para trasladarle toda la responsabilidad por el accidente de tránsito que dio lugar al proceso de reparación directa. Desde el inicio del proceso ordinario, COLDETRANS S.A. alegó que era aquella cooperativa la vinculada al tractocamión involucrado en el accidente y, por tanto, quien tenía la guarda del vehículo, argumentos que fueron analizados por el Tribunal Administrativo de Caldas, así:

*De conformidad con el certificado expedido el 3 de septiembre de 2014 por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Rosa de Osos (fl. 69, C.I), el tractocamión de placas TTG200 es propiedad del señor Juan Augusto Ríos Osorio y, en tal sentido, recae en él la obligación de reparar el daño que fuere causado con su vehículo a terceros.*

*Ahora bien, aun cuando no reposa en el expediente el contrato de afiliación correspondiente, el Tribunal observa que el citado automotor se encontraba*

afiliado a la empresa COLDETRANS, pues dicho hecho fue aceptado expresamente como cierto por el señor Juan Augusto Ríos Osorio y la citada compañía en las respectivas contestaciones de la demanda.

En reciente sentencia del 5 de abril de 2021<sup>5</sup>, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia precisó lo siguiente respecto de la responsabilidad solidaria que se predica por parte del propietario del vehículo con el cual se genera un daño y de la empresa de transporte a la cual se encuentra afiliado éste:

En relación con esta temática tiene dicho la Corte que:

(...) por principio la prueba por cualquier medio probatorio idóneo de la afiliación o vinculación del vehículo destinado al transporte, 'legítima suficientemente a la empresa afiliadora para responder por los perjuicios que se causan a terceros en el ejercicio de la actividad peligrosa que entraña la movilización de vehículos automotores para la satisfacción del aludido servicio, pues si ella es la que crea el riesgo...' (cas. civ. sentencia número 021 de febrero de 1992) debe responder por los daños causados, dado que 'el solo hecho de estar afiliado un vehículo a determinada sociedad, implica que ésta en principio soporta alguna responsabilidad y tenga algún control sobre el vehículo' (CCXXXI, 2o volumen, 897), quedando comprendido el detrimento en la esfera o círculo de su actividad peligrosa. (CSJ SC de 17 may. 2011, rad. 2005-00345-01).

(...)

Así las cosas, para este Tribunal, tanto el señor Juan Augusto Ríos Osorio como la empresa COLDETRANS, deben responder solidariamente por el 50% en que se estima que contribuyó el conductor del vehículo tractocamión en la muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia.

Más adelante, en la providencia censurada se indicó:

*b) Llamada en garantía por parte de la empresa COLDETRANS*

Conforme se indicó en el acápite de antecedentes, COLDETRANS denunció el pleito a la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda., aduciendo que el tractocamión implicado transportaba carga de dicha empresa y, por lo tanto, tiene calidad de solidario y civilmente responsable (fls. 209 a 211, C.I). Acotó que para el mes de los hechos, COLDETRANS nunca cargó bajo su responsabilidad el referido vehículo.

A la denuncia en pleito, el Juzgado de primera instancia le imprimió el trámite de llamamiento en garantía.

Al respecto, esta Corporación estima que en el proceso no se acreditó el derecho legal o contractual a través del cual COLDETRANS pudiera exigirle a la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda. que responda por la condena que aquella debe asumir de manera solidaria con el señor Juan Augusto Ríos Osorio. Lo anterior, en la medida en que, independientemente del contrato para la carga de mercancía perteneciente a la cooperativa, que además no fue allegado al expediente, lo cierto es que el vehículo tractocamión siguió estando vinculado a la empresa transportadora, lo que impide que ésta pueda exonerarse de la responsabilidad extracontractual.

---

<sup>5</sup> Cita original de la providencia: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Sentencia SC1084-2021 del 5 de abril de 2021. Radicación número: 68001-31-03- 003-2006-00125-01.

*No hay prueba alguna en el expediente que permita afirmar que el hecho que la carga que transportaba el tractocamión el día del accidente fuera propiedad de la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda., implica que ésta debía asumir la responsabilidad de guardián de la actividad que el vehículo realizaba.*

*Recuérdese que, como se indicó anteriormente, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que la empresa a la cual está afiliado el vehículo es quien tiene el control efectivo del mismo al momento de administrarlo con facultad de utilizarlo y de designar incluso al personal que lo opera, sin intervención del propietario; y que sólo cuando se demuestre que la empresa no tiene dicho control del automotor, entrarían a responder solidariamente el propietario, quien contrató y el conductor, por las obligaciones que surjan del contrato de transporte, conforme al artículo 991 del Código de Comercio. En este caso, se repite, COLDETRANS no acreditó que no tuviera el control efectivo del vehículo.*

*Bajo ese entendimiento, esta Sala de Decisión declarará probada la excepción formulada por la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda. y que denominó: "INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD"; absteniéndose entonces de resolver sobre los demás medios exceptivos propuestos por la llamada en garantía.*

Obsérvese que el Tribunal Administrativo de Caldas analizó con detalle no sólo la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo, sino también de la empresa aquí accionante, COLDETRANS S.A., y realizó un estudio pormenorizado de las razones por las cuales no aceptó el llamamiento en garantía de la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda., del cual no es posible inferir, como se hace en la solicitud de amparo, que la corporación judicial accionada ignoró el manifiesto de carga. Por el contrario, lo que se entiende es que el Tribunal en todo momento parte del hecho cierto de que la carga era propiedad de la Cooperativa, pero con fundamento en la orientación jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, concluyó que, más allá de eso, lo determinante para endilgar la responsabilidad era conocer la empresa a la que se encontraba vinculado o afiliado el tractocamión.

A esto se suma que el Tribunal señaló que no se aportó el contrato de transporte, mas no el manifiesto aludido, que es diferente. Además, tampoco se allegó un contrato de vinculación o cualquier otro documento que acredite que el vehículo de estaba vinculado o afiliado ya fuera temporal o de manera permanente a la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda.<sup>6</sup>; en su lugar, el Tribunal acudió a

---

<sup>6</sup> «En efecto, el manifiesto de carga, conforme lo prevé el mismo Decreto 173 de 2001 que se impugna, es “el documento que ampara el transporte de mercancías ante las distintas autoridades, por lo tanto, debe ser portado por el conductor del vehículo durante todo el recorrido. Se utilizará para llevar las estadísticas del transporte público de carga por carretera dentro del territorio nacional” (artículo 7), lo cual acredita sin duda el contrato de transporte y es útil para detallar las mercancías que se movilizan, pero de ninguna manera puede entenderse que dicho documento reemplaza al contrato de vinculación, que como se vio, se torna en indispensable para regular las relaciones entre el propietario del vehículo y la empresa de transporte cuando aquél no hace parte del parque automotor registrado por la empresa respectiva». (Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, Rad. No. 11001 0324 000 2012 00159 00, Sentencia del 19 de octubre de 2018).

las afirmaciones realizadas en la demanda y aceptadas por COLDETRANS S.A. en la contestación, según las cuales el automotor se encontraba vinculado a esta última empresa, sin que dicha apreciación se haya desvirtuado por otros medios de prueba.

De otra parte, la accionante adujo que en la providencia censurada se valoró indebidamente el informe de accidentes, habida consideración de que desconoció que el retén de policía no cumplía las exigencias mínimas de seguridad, y no se percató de que la víctima fatal conducía su moto con exceso de velocidad. Sobre el particular, el Tribunal accionado señaló:

*La Sala observa que la ausencia de una reglamentación general expresa en materia de requisitos para la instalación de puestos de control, en contraste con la facultad que tienen los organismos de tránsito para organizar y dirigir lo relacionado con el tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción (artículos 2 y 6 del Código Nacional de Tránsito), conduce a esta Sala de Decisión a inferir que la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía de Caldas tenía competencia para establecer a través de manuales internos, las directrices para llevar a cabo las actividades propias de un puesto de control, tal como lo hizo en el procedimiento que obra en el expediente y que se mencionó en el acápite de hechos acreditados precisado en estas consideraciones. (...)*

*Precisado lo anterior y teniendo en cuenta el análisis realizado en el acápite de hechos probados en relación con los requisitos mínimos para la instalación de un puesto de control, esta Sala de Decisión advierte de manera evidente que la Policía Nacional, en efecto, desatendió el procedimiento previsto, en tanto:*

- *No expidió previamente orden de servicios para realizar el puesto de control.*
- *No se asignaron las unidades policiales requeridas para la mencionada actividad y atendiendo la zona rural de la que se trataba y que exigía un mínimo de 10 policías.*
- *Excedió el límite de dos (2) horas previsto para realizar puesto de control en una misma zona.*
- *El puesto de control no fue ubicado en un lugar apropiado, en tanto se instaló no sólo cerca de una curva pronunciada, sino además ocupando parte de uno de los carriles sin usar la señalización adecuada, sin contar con policías asignados a manejar la señal de pare o siga, y a conducir el tránsito vehicular durante el tiempo que permanecieran en el sector. Lo anterior, con el fin de evitar congestión vehicular, así como riesgo para los conductores o peatones.*
- *Los vehículos seleccionados para el registro y control no se limitaron a aquellos que pudieran atender dadas las circunstancias antes referidas, esto es, número de policiales a cargo, ubicación del puesto de control y ausencia de señalización correspondiente, sin generar o incrementar riesgos para quienes transitaran por el lugar.*
- *No se dispusieron policiales a cargo de la seguridad y de la apertura a 50 o 100 metros de la entrada a dicho retén, como se señala en el esquema de cómo debe instalarse un puesto de control.*

*Tal como ha tenido oportunidad de señalarlo el Consejo de Estado, “[...] el servicio policial debe prestarse con estricta aplicación al principio de planeación y, por tanto, los comandantes de la institución se encuentran obligados a planear y distribuir los servicios teniendo en cuenta las características del grupo a su mando, para prevenir y contrarrestar las diversas situaciones que atentan contra la seguridad y bienestar de la comunidad, mantener y defender el orden público, garantizando, a su vez, la vida, integridad y seguridad de los miembros de la fuerza pública, con ocasión de la prestación del servicio. [...]” Y nótese cómo en el presente asunto la entidad demandada no efectuó los planes de prevención necesarios para minimizar los riesgos derivados del acto propio del servicio que estaba desarrollando.*

*Todo lo anterior constituye una evidente falla en el servicio por parte de la Policía Nacional.*

De la lectura del aparte transcrito, emerge con claridad que el Tribunal Administrativo de Caldas analizó detenidamente este punto de debate y llegó a la conclusión de que existió una falla del servicio por parte de la Policía Nacional y es por ello que le endilgó parcialmente la responsabilidad por el accidente, razón por la cual la Sala encuentra que el argumento esgrimido en la solicitud de amparo sí fue analizado en el fallo reprochado, y por ende, traer a este escenario nuevamente la discusión implica convertir la acción de tutela en una instancia adicional.

Distinto es que la autoridad judicial hubiera considerado que el conductor del vehículo automotor también tuvo responsabilidad en el accidente, cuestión que analizó en detalle y en el marco de la competencia que le confirió el recurso de apelación incoado por la Policía Nacional. Así razonó la corporación judicial accionada:

*En relación con la responsabilidad del vehículo tipo tractocamión que se vio implicado en el accidente, el Tribunal advierte que el conductor del mismo incurrió en infracciones comprobadas al Código Nacional de Tránsito, pues realizó una maniobra de adelantamiento de vehículos no sólo en un tramo de la vía en donde existía línea separadora central continua o prohibición de adelantamiento, sino también cerca de una curva, siendo desfavorable por ello la visibilidad y ofreciendo peligro para quienes transitaran por el carril contrario. Lo anterior, en abierta contradicción con las prohibiciones previstas por el artículo 73 de la Ley 769 de 2002: (...)*

*El artículo 131 de la Ley 759 de 2002 contempla expresamente sanciones para el conductor y/o propietario de un automotor que incurra en las infracciones relativas a adelantar a otro vehículo en curva, así como la de conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas.*

*Aun cuando esta Corporación no desconoce que las circunstancias en las cuales se instaló el puesto de control por parte de la Policía Nacional incidieron de una u otra manera en la comisión de las infracciones antes referidas, lo cierto es que tampoco puede pasar por alto que el conductor del vehículo obró imprudentemente, pues decidió motu proprio continuar su trayecto invadiendo*



*para ello el carril contrario, no sólo sin esperar alguna señal de los uniformados o que los vehículos que habían sido detenidos para registro y control avanzaran, sino también sin cerciorarse que contaba con espacio suficiente para nuevamente devolverse a su carril que no venía otro vehículo, pese a que, según consta en su declaración, observó que el retén se encontraba muy cerca de la curva.*

*La existencia del puesto de control, con las escasas señales usadas y que incluso fueron advertidas por el mismo conductor del tractocamión al llegar al sector, exigía de parte de éste que tomara las precauciones del caso, realizando las maniobras necesarias para continuar por su ruta sin atentar contra su propia seguridad, la del resto de los vehículos y la de los peatones.*

Nótese que el Tribunal es enfático al determinar la responsabilidad de la Policía en el accidente, por tanto, no es de recibo la afirmación realizada en la solicitud de amparo, encaminada a señalar que la autoridad judicial desconoció tal situación; sin embargo, en la providencia también se atribuyó responsabilidad al conductor del automotor, como se analizó.

Ahora bien, sobre la afirmación realizada por el libelista, relacionada con que la víctima fatal conducía su moto con exceso de velocidad, en el fallo censurado se expresó que *«la supuesta culpa de la víctima en su deceso no habrá de ser analizada en esta instancia, como quiera que así no lo solicitó la Policía Nacional en su recurso de apelación. No obstante lo anterior, la Sala deja constancia de que no existe ningún elemento material probatorio a través del cual se acredite que el señor Israel Gutiérrez Valencia transitaba a alta velocidad en su motocicleta o desconociendo alguna de las normas de tránsito, con lo cual hubiera contribuido al daño o incluso provocarlo»*. De allí se colige que, pese a no hacer mayores disertaciones sobre el asunto —por no ser del resorte de la apelación—, la corporación accionada descartó de cierto modo que la víctima condujera con exceso de velocidad o violando normas de tránsito, razón por la cual no tiene caso reabrir la discusión en torno a ello, menos aún en esta acción de stirpe constitucional.

Bajo las consideraciones que anteceden, para la Sala es evidente que los argumentos alegados en la tutela fueron invocados para continuar con el debate jurídico que ya fue decidido por la autoridad judicial demandada. Es claro que la presente solicitud de amparo deviene en improcedente, justamente porque busca revivir la discusión del proceso ordinario, en torno a la responsabilidad solidaria de la Nación – Policía Nacional, el señor Juan Augusto Ríos Osorio (propietario del automotor) y COLDETRANS S.A. en el accidente de tránsito ocurrido el 12 de junio de 2013, en el que falleció el señor Israel Gutiérrez Valencia.

En lo que atañe al argumento de indebida valoración de la póliza emitida por de Allianz S.A., al igual que el *a quo*, la Sala concuerda con lo dicho por la propia aseguradora en la contestación a la tutela, quien no advirtió anomalía alguna, pues, aunque en la parte considerativa se incurrió en un yerro al referir un deducible por valor de \$1.100.000.000, lo cierto es que se trató de un error mecanográfico y, en todo caso, en la parte resolutive se condenó a la aseguradora *«[a] que con cargo a la póliza de autos no. 021226541/41 suplemento 1, y teniendo en cuenta en todo caso el límite del valor asegurado, así como el deducible que el asegurado deba pagar por dicho concepto, asuma la condena impuesta de manera solidaria contra el señor Juan Augusto Ríos Osorio»*.

En suma, la solicitud de amparo deviene en improcedente, por incumplimiento de la exigencia de relevancia constitucional, toda vez que, respecto de los defectos sustantivo, procedimental y el error inducido, COLDETRANS S.A. no cumplió con la carga argumentativa, y frente al defecto fáctico es evidente que busca revivir la discusión planteada, como si la acción de tutela fuera una instancia adicional del proceso ordinario, cuestiones que, en todo caso, ya fueron analizadas y decididas en la providencia proferida el 26 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de Caldas.

Por todo lo anterior, la Sala modificará la decisión impugnada, para declarar improcedente la acción de tutela respecto de todos los defectos alegados, por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

#### **F A L L A:**

**Modificar** la sentencia del 17 de mayo de 2023, proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, la cual quedará así:

**PRIMERO. Declarar improcedente** la acción de tutela presentada por la Compañía Colombiana de Transportes - COLDETRANS S.A., de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO. Notifíquese** a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz.

**TERCERO.** Por Secretaría General, **envíese** el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.


**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

*Firmado electrónicamente*  
**MARÍA ADRIANA MARÍN**

*Firmado electrónicamente*  
**MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO**

*Firmado electrónicamente*  
**JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ**

VF

<p>Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:</p> <p><a href="https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/validador.aspx">https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/validador.aspx</a>.</p>	
--	---



## JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES

Manizales, cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

**S.430**

**RADICACIÓN:** 17001-33-33-004-2014-00566-00  
**MEDIO DE CONTROL:** REPARACIÓN DIRECTA  
**DEMANDANTE:** BERTILDA ROSA VALENCIA Y OTROS  
**DEMANDADO:** LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL - COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE "COLDETRANS" S.A - JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO  
**LLAMADOS EN GARANTIA:** ALLIANZ SEGUROS S.A - COOPERATIVA QUINDIANA DE TRASPORTADORES LTDA.

El Despacho profiere sentencia dentro del proceso de la referencia.

La actuación ha cumplido con todas las ritualidades procesales previstas en la ley y no se observa motivo alguno que pueda dar lugar a la nulidad de lo actuado, por lo cual se profiere decisión que finalice la instancia.

### I. ANTECEDENTES

#### 1. LA DEMANDA

##### 1.1. PRETENSIONES

Solicita la parte demandante, a través de apoderado judicial, que por medio de sentencia se hagan las siguientes declaraciones y condenas:

1. Se **DECLARE ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE A LA NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE LA DEFENSA – POLICIA NACIONAL Y EN FUERO DE ATRACCIÓN LA EMPRESA COLDETRANS COLOMBIANA DE TRANSPORTE S.A – JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO**, por la muerte violenta del señor **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA**, en hechos ocurridos el día 12 de Junio de 2013, cuando se desplazaba en calidad de conductor del vehículo Motocicleta de Placas XFG83A y colisionara con el Vehículo Tracto camión de Placas TTG-200 de propiedad del señor **JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO**, en la vía Cauya – La Pintada, Kilómetro 31 + 750 Vereda la Sierra del Municipio de Riosucio (Caldas).
2. Por concepto de indemnización de perjuicios, la parte actora se permitió manifestar lo siguiente:
  - 2.1. Por concepto de **PERJUICIOS MORALES** ocasionados como consecuencia directa de los momentos de angustia, sufrimiento e intenso dolor que padeció el grupo familiar por el in suceso donde perdió la vida el señor **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA**, unas sumas equivalentes a CIEN (100) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES.
    - a. Para **OMAIRA GUERRERO LARGO** en su condición de Compañera Permanente del señor **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (fallecido)** una suma equivalente a CIEN (100) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES.

- b. Para **ARSOMAN GUTIERREZ NAVARRETE**, en su condición de Padre del señor **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (fallecido)** una suma equivalente a CIENTO (100) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES.
  - c. Para **BERTILDA ROSA VALENCIA**, en su condición de Madre del señor **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (fallecido)** una suma equivalente a CIENTO (100) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES.
  - d. Para **ALVARO ANTONIO GUTIERREZ VALENCIA**, en su condición de Hermano del señor **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (fallecido)** una suma equivalente a CIENTO (100) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES.
  - e. Para **FERNANDO GUTIERREZ VALENCIA**, en su condición de Hermano del señor **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (fallecido)** una suma equivalente a CIENTO (100) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES.
  - f. Para **OTONIEL DE JESUS GUTIERREZ VALENCIA**, en su condición de Padre del señor **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (fallecido)** una suma equivalente a CIENTO (100) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES.
  - g. Para **UBER GUTIERREZ VALENCIA**, en su condición de Padre del señor **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (fallecido)** una suma equivalente a CIENTO (100) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES.
- 2.2. Por concepto de **PERJUICIOS MATERIALES O PATRIMONIALES**, debidos a los demandantes: **OMAIRA GUERRERO LARGO (Compañera Permanente del Fallecido)** y a los señores **ARSOMAN GUTIERREZ NAVARRETE, BERTILDA ROSA VALENCIA (Padres del Fallecido)**, quienes obran en nombre propio y en condición de Compañera Permanente y Padres del señor **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (Fallecido)**, quienes sufrieron el daño en forma directa reclaman perjuicios materiales en calidad de lucro cesante (Art. 1614 C.C.), consistentes en la privación de una ayuda económica que periódicamente recibían y recibirían de su Compañero Permanente e Hijo, el señor **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA**, quien laboraba como Administrador de la Asociación de Mineros la montaña del Municipio de Quinchía- Risaralda, actividad por la cual percibía unos ingresos mensuales de Un Millón Quinientos Mil Pesos Moneda Corriente (\$1.500.000.00), con los cuales aportaba para la manutención de su núcleo familiar.
- Consideró el apoderado de la parte actora que estos perjuicios deben estimarse teniendo en cuenta los siguientes factores: Supervivencia de la víctima, ingresos presentes y futuros de la víctima, destinación de ingresos, supervivencia de sus padres y compañera permanente, falta de productividad del fallecido, lucro cesante, por los menos a los intereses con corrección monetaria de la indemnización causada desde la fecha de su muerte (12 de junio de 2013), hasta que se produzca su efectivo cumplimiento. Liquidación que deberá hacerse teniendo en cuenta el factor por renta, aceptado por la Jurisprudencia y la Doctrina para la indemnización futura, los cuales consideró superiores a CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$140.000.000).
- 3. Que se le dé cumplimiento al fallo en los términos del Artículo 192, 193 y 195 del Código de lo contencioso Administrativo.
  - 4. Las demandadas están obligadas a pagar a mis mandantes sobre las sumas de dinero que el fallo determine en favor de cada uno de ellos, intereses moratorios, con fundamento en la Sentencia Constitucional No. C – 188 de Marzo 29 de 1999.

## 1.2 HECHOS

Fueron descritos por el apoderado judicial de la parte actora, los que a continuación se resumen:

El día 12 de Junio del 2013, el señor Israel Gutiérrez Valencia, conducía la motocicleta con placas XFG83A con la debida protección, hacia el municipio de Quinchía (Risaralda), con el fin de cumplir con su actividad laboral.

Siendo aproximadamente las 10:30 de la mañana, de la fecha mencionada, en la vía Cauya – La Pintada Kilómetro 31 + 950 Vereda la Sierra del Municipio de Riosucio (Caldas), al momento que disponía salir de una curva cerrada por el carril de subida con doble línea, en la que se prohíbe adelantar, fue atropellado de manera intempestiva por el vehículo tracto camión de placas TTG – 200, que invadió el carril contrario por donde se desplazaba el señor Israel Gutiérrez Valencia.

Producto del accidente el señor Israel Gutiérrez Valencia, falleció en el lugar de los hechos.

El sitio donde ocurrieron los hechos no contaba con señalización alguna, con el fin de advertir que metros más adelante, se encontraba un puesto de control de tránsito organizado por la Policía Nacional, hecho por el cual ambos carriles no tenían disponibilidad para el tránsito.

En el informe pericial de Necropsia del 12 de junio de 2013, se informa que la manera de la muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia fue “violenta – accidente de tránsito”, con causa básica de la muerte; “Trauma contundente”.

### **1.3 FUNDAMENTOS DE DERECHO**

La parte actora invocó como fundamentos de derecho, las siguientes disposiciones de rango constitucional y legal.

Artículo 90 de la constitución política de Colombia; Artículos 104 y 140 del Código de lo Contencioso Administrativo.

Adujo que en el caso *sub examine*, se alega la existencia de una falla en el servicio por parte de la Nación- Ministerio de Defensa Policía Nacional, consistente en la omisión en el momento de la instalación del puesto de control.

Señaló que la jurisprudencia del Consejo de Estado indica que para determinar si efectivamente se incurrió en una falla del servicio, y en consecuencia proceder a declarar la responsabilidad del Estado, por la ocurrencia de daños en los cuales la omisión de una autoridad pública en el cumplimiento de las funciones, debe realizarse por parte del operador jurídico el análisis entre el contenido obligacional y el grado de cumplimiento u observancia de dichas obligaciones, por parte de la entidad pública a quien se le imputa la falla.

Citó jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con la teoría de causalidad adecuada, en caso de falla en el servicio por omisión, para concluir que los miembros de la Policía Nacional, no cumplieron con los mandatos del manual de patrullaje de la Policía Nacional y su omisión fue determinante en la muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia.

Expresó que el propietario del vehículo tracto camión, la compañía Colombiana de transportes COLDETRANS S.A y Empresa usufructuaria del vehículo; son igualmente responsables de la muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia.

Argumentó que existen fundamentos serios, que permiten determinar que en los hechos que dieron origen de la muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia, no hubo ningún tipo de responsabilidad de la víctima.

## 2- CONTESTACION DE LA DEMANDA

### 2.1 JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO

Juan Augusto Ríos Osorio contestó la demanda a través de apoderado (fls. 132 a 138, C.1) y, sobre los hechos, expuso que unos son ciertos, que otros no le constan y que los demás no son hechos. Se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones solicitadas.

Propuso, las siguientes excepciones:

- **“Hecho de un tercero”**. Por cuanto fue la atención temeraria de la Policía Nacional, lo que produjo el accidente y con él las lamentables consecuencias. En tal sentido esta última entidad obro con culpa al instalar un puesto de control sin reunir los requisitos mínimos para llevar a cabo dicha función.
- **“Concurso de la víctima del daño”**. Expresó que el señor Israel Gutiérrez Valencia obró con imprudencia al conducir excediendo los límites de velocidad, hecho que no permitió detener su motocicleta evitando así el impacto con el camión de placas TTG 200.
- **“Inexistencia de los daños alegados por los demandantes”**. El apoderado judicial de la parte demandada manifestó que todas las afirmaciones que se hagan, deben tener soporte correspondiente. De no ser así se estaría patrocinando un enriquecimiento sin justa causa.
- **“Inexistencia de prueba de la responsabilidad de los demandados”**. Se manifiesta que en la demanda se relata de manera contundente el evento que da lugar a la reclamación, pero no acreditan en debida forma el vínculo civil de responsabilidad entre la conducta desplegada por el demandado con el perjuicio sufrido por los demandantes

### 2.2 LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL.

La nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional, contestó la demanda a través de apoderado (fls. 190 a 195, C.1) y, sobre los hechos, expuso que unos son ciertos y que otros no lo son. Se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones solicitadas.

Propuso, además, las siguientes excepciones:

- **“Culpa exclusiva y determinante de la víctima”**. El señor Israel Gutiérrez Valencia conducía a una velocidad no permitida, pues la posición de su cuerpo lo confirma, ya que este fue encontrado a 4,50 mts, lo que fuerza concluir que el impacto con el tracto camión lo devolvió a esa distancia y por lo tanto el motociclista se desplazaba a una velocidad considerable que lo sacó de su carril.

Finalmente el apoderado de la parte demandada manifiesta que en el presente caso, se configuro un rompimiento del nexo de causalidad entre el hecho y el daño producido por la administración.

- **“Rompimiento del nexo causal”**. El apoderado de la parte demandada señala que fue la víctima quien al tomar la curva a considerable velocidad, terminó ocupando el carril contrario por donde circulaba el tracto camión; además, hace mención que para aducirse responsabilidad administrativa, y se logre la indemnización pretendida, deben probarse entre otros presupuestos la relación de causalidad entre el daño y el hecho, aspecto que para el *sub-examine* no es claro.

### 2.3 COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTES COLDETRANS S.A

La Compañía Colombiana de Transportes S.A, contestó la demanda a través de apoderado (fls. 202 a 211, C.1) y, sobre los hechos, expuso que unos son ciertos y que

otros no le constan. Se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones solicitadas.

Propuso, además, las siguientes excepciones:

- **“Hecho de un tercero”**. Como quiera que las causas que originaron el daño alegado en el libelo y sus consecuencias, fueron atribuidas a la Policía Nacional, al instalar un puesto de control sin reunir los requisitos mínimos para llevar a cabo dicha función, pues ocuparon el carril de bajada con la detención de varios vehículos y dieron la orden de continuar al conductor de camión de propiedad, ocupando con ello el otro carril y sobre una curva cerrada.
- **“Concurso de la víctima del daño”**. Como quiera que al observar el material fotográfico allegado al proceso, se dilucida, que el señor Israel Gutiérrez Valencia, obró con imprudencia, al conducir su vehículo excediendo los límites de velocidad, hecho que no le permitió conservar su carril y detener su motocicleta, evitando así el impacto con el camión mencionado.
- **“Inexistencia de los daños alegados por los demandantes”**. Mientras no se pruebe el daño y su cuantía, no podrá accederse a las pretensiones de la demanda.
- **“Inexistencia de prueba de la responsabilidad de los demandados”**. Teniendo en cuenta que la parte actora no acredita en debida forma el vínculo civil de responsabilidad entre la conducta desplegada por el demandado y el daño alegado en el libelo.

### **3. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA A ALLIANZ SEGUROS S.A POR PARTE DE JULIAN AUGUSTO RÍOS OSORIO**

A través de providencia del 25 de febrero de 2016, se admitió el llamamiento en garantía efectuado por el señor Juan Augusto Ríos Osorio a Allianz Seguros S.A (fls. 233,vto C.1)

#### **3.1 PRONUNCIAMIENTO DE ALLIANZ SEGUROS S.A**

Allianz Seguros S.A., intervino a través de apoderado y, sobre los hechos de la demanda, expuso que no le consta ninguno de ellos. Respecto de las pretensiones, se opuso a la prosperidad de las mismas. Folio 282 cuaderno 1A.

Propuso las siguientes excepciones

- **“No se encuentra probado que el vehículo de placas TTG-200, fue el causante del accidente acaecido”**. En la medida que no se demuestre que fue la conducta desplegada por el conductor del vehículo de placas TTG-200, la causa única del accidente acaecido, no podrá proferirse condena en contra de la misma.
- **“Presencia de causas excluyentes”**. La Policía Nacional no tomó las mínimas precauciones para la instalación del retén en la carretera donde falleció el señor Israel Gutiérrez Valencia. Lo anterior, por cuanto, al hacer dicha instalación, ocuparon el carril de bajada, deteniendo inicialmente varios vehículos, para luego sin precauciones y de forma imprudente, dar órdenes a varios conductores para continuar. Entre estos vehículos se encuentra el camión TTG-200, el cual ocupó el otro carril y sobre una curva cerrada.
- **“Hecho de un tercero”** Hizo consistir este hecho exceptivo en el hecho de que el accidente donde falleció el señor Israel Gutiérrez Valencia fue por su propia culpa. Ello, por cuanto de manera intempestiva y temeraria venia conduciendo su motocicleta a una velocidad excesiva no permitida.
- **“Diligencia y cuidado”**. Del análisis de la prueba documental aportada por el demandante, se advierte que los conductores de los vehículos producto del accidente de



tránsito mencionado, se encontraban en perfectas condiciones para la conducción de los mismos.

– **“Ausencia de responsabilidad del codemandado Juan Augusto Ríos Osorio, debido al rompimiento causal como consecuencia de la culpa exclusiva de la víctima”** en caso que el Despacho considere que en el presente caso sí quedó demostrada la responsabilidad del conductor del vehículo de placas TTG-200. Existen causales de exoneración de responsabilidad del señor Israel Gutiérrez Valencia, en virtud de los cuales el presunto responsable se libera de responsabilidad cuando logra demostrar la ruptura del nexo causal entre el hecho generador de responsabilidad y el perjuicio sufrido. Así pues, insiste, que la causa del accidente donde falleció el señor Israel Gutiérrez Valencia., fue producto de su imprudencia e inobservancia de las normas de tránsito.

– **“Excepción liberativa del demandado Juan Augusto Ríos Osorio, por presencia de una causa extraña”**. El comportamiento imprudente y contrario a las normas por parte del conductor de la motocicleta, constituye una causa extraña.

– **“Compensación de culpas entre las partes”** En el caso *sub examine*, opera la compensación por culpas entre las partes. Ello, por cuanto, es indiscutible que el daño se produjo por el propio obrar del conductor de la motocicleta.

– **“Ausencia de elementos generadores de responsabilidad civil extracontractual”** Como quiera que el señor Julián González Valencia, no fue el causante del fallecimiento del señor Israel Gutiérrez, por lo tanto, no hay lugar a pagar los perjuicios reclamados en la presente acción.

– **“Los perjuicios extrapatrimoniales reclamados por los demandados son inexistentes y/o se encuentran ampliamente sobreestimados”** Los perjuicios reclamados por los demandantes, no pueden ser reconocidos en una suma mayor a la establecida como límite por la jurisprudencia unificada por el Consejo de Estado.

– **“Reducción de la indemnización. El amparo de responsabilidad civil extracontractual por muerte o lesiones a una personas, solo opera en exceso del seguro obligatorio de tránsito”** Como quiera que el vehículo de tracto camión placas TTG- 200, y la motocicleta placas XFG- 83A, debían de tener expedido su seguro obligatorio de accidentes, seguro obligatorio de amparo los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalario, e indemnización por muerte o incapacidad generada por accidente de tránsito. En caso que la aseguradora se vea obligada a pagar suma alguna de dinero por los perjuicios que sufrieron los demandantes por el fallecimiento del señor Israel Gutiérrez, solo pagará el exceso que no fue cubierto por el seguro de daños corporales causadas a las personas en accidente de tránsito.

– **“prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro”** Teniendo en cuenta la fecha del accidente en el que falleció el señor Israel Gutiérrez Valencia, y la fecha en que fue vinculada Allianz Seguros S.A , queda claro que transcurrieron más de dos años, es decir del término de la prescripción ordinaria de las acciones que derivan el contrato de seguro.

– **“Falta de configuración actual del siniestro”** Hasta el momento no se cumplió con el requisito establecido del artículo 1077 del Código de Comercio, en cuanto se debe demostrar la existencia del siniestro y la cuantía del mismo.

#### **4. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA A LA COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTE LTDA POR PARTE DE COLDETRANS S.A**

A través de providencia del 28 de julio de 2016, se admitió el llamamiento en garantía efectuado por COLDETRANS S.A a la Cooperativa Quindiana de Transporte LTDA (fls. 304, C.1A)

#### 4.1 PRONUNCIAMIENTO DE LA COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTE LTDA

La Cooperativa Quindiana de Transportes LTDA., intervino a través de apoderado y, sobre los hechos de la demanda, expuso que no le constan. Respecto de las pretensiones, se opuso a la prosperidad de las mismas.

Propuso las siguientes excepciones

- **“Inexistencia de solidaridad”.** Por cuanto entre la Cooperativa y la llamante en garantía, no existe ningún tipo de relación o contrato, que pueda derivar en solidaridad civil por los daños o perjuicios que ocasionen los vehículos que se encuentran bajo su cuidado y administración.
- **“Excepción de mérito ausencia de culpa”** La falta de obligación de la llamada en garantía, al mantenimiento preventivo y correctivo y de conservación del vehículo a la empresa COLDETRANS S.A, la cual corresponde íntegramente al propietario del vehículo.
- **“hecho de un tercero”** El conductor del vehículo no tiene ningún vínculo con su representada.
- **“Inexistencia de responsabilidad”** Como quiera que no existe dependencia o subordinación entre el vehículo despachado con la carga ni con su propietario y, mucho menos con su conductor y la llamada en garantía.

#### 5. TRASLADO DE EXCEPCIONES

La parte demandante no se manifestó respecto a las excepciones propuestas por los demandados.

#### 6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

- **Parte Demandante.** En sus alegatos de conclusión el apoderado judicial de la parte demandante se ratificó en los hechos y pretensiones de la demanda.

Señaló que se configuró una falla del servicio en cabeza de las entidades demandadas. Ello, por la falta de cuidado e inobservancia de los reglamentos al instalar un puesto de control, sin reunir los requisitos mínimos para llevar a cabo dicha función. Esto es así, por cuanto, ocuparon el carril de bajada con la detención de varios vehículos y dieron la orden de continuar al conductor del tracto camión ocupando el carril en contravía y sobre una curva cerrada, en la cual el conductor de la motocicleta, el señor Israel Gutiérrez no tuvo la oportunidad de proteger su vida (fls. 414 a 432, C.1B)

- **Parte demandada**

- **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE “COLDETRANS S.A”** El apoderado judicial de la Compañía Colombiana de Transporte **“COLDETRANS S.A”**, insistió en los argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda.

Manifestó que fue la acción temeraria de la Policía Nacional, lo que dio lugar a que se produjera el accidente. Citó diferentes testimonios recaudados en la audiencia de pruebas, para indicar que el señor Israel Gutiérrez Valencia, obró con imprudencia al conducir su vehículo excediendo el límite de velocidad (fls. 381 a 384, C.1A).

- **“NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL”** El apoderado de la Policía Nacional insistió en los argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda.

Argumentó que en el caso *sub examine*, se configuró una culpa exclusiva de la víctima. Ello, por cuanto, en el croquis levantado con ocasión al accidente de tránsito donde falleció el señor Israel Gutiérrez Valencia, se observa al punto de impacto, donde el motociclista pegó contra el tracto del camión, invadiendo con esto el carril de este último.

De todo el análisis realizado en sus alegatos de conclusión concluye, que el motociclista se desplazaba a una velocidad considerable que lo saco del carril, abandonando el suyo, para después chocar contra el vehículo tracto camión.

– **Llamada en garantía Cooperativa Quindiana de Transporte LTDA.** El apoderado judicial de la Cooperativa Quindiana de Transporte LTDA se ratificó en los argumentos de defensa expuestos en la contestación de las demanda.

Aseveró que si en la responsabilidad contractual adquirida por el propietario y un tercero, no se reconoce la solidaridad o responsabilidad civil, tampoco debe reconocerse en la extracontractual, adquirida por el mismo propietario y una empresa que lo único que realizó, fue despacharlo con una mercancía, desde un origen a un destino.(fls. 309 a 402, C.1A).

– **Llamada en garantía Allianz Seguros S.A.** El apoderado judicial de **Allianz Seguros S.A.**, se ratificó en los argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda.

Aseguró que la Policía Nacional no tomó las mínimas precauciones para la instalación del retén, pues tal como se desprende de las pruebas obrantes en el plenario, lo policías al instalar dicho carril ocuparon el carril de bajada deteniendo varios vehículos para su registro, pero sin señal alguna para los demás automotores que se venían desplazando por esa vía.

El retén no fue instalado en una recta como debía ser, según las normas de tránsito, sino que se instaló en una semicurva, lo que también dio lugar a que se produjera el accidente (fls. 403 a 413, C.1B).

## 7. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Representante del Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

## II. CONSIDERACIONES

### 2.1. PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico gravita en torno a establecer si las entidades demandadas, son administrativamente responsables por el fallecimiento en accidente de tránsito del ciudadano Israel Gutiérrez Valencia, en instantes en que este conducía su motocicleta sobre el carril derecho de la vía, y fue impactado de forma súbita por un tracto camión que regresaba a su carril reglamentario, luego de esquivar un retén policial que modificó su tránsito habitual.

Para efectos de resolver el interrogante planteado, el despacho identificará el régimen jurídico de responsabilidad aplicable, para luego efectuar el análisis de los elementos que integran esta modalidad de responsabilidad estatal, a la luz de la prueba recaudada en la actuación procesal.

### 2.1 TESIS DEL DESPACHO

La tesis que sostendrá el despacho es que la imputación jurídica por el accidente de tránsito en que perdió la vida el ciudadano Israel Gutiérrez Valencia, se atribuye únicamente a la Policía Nacional, que de forma anti técnica y aumentando el riesgo propio

de la conducción de vehículos automotores, instaló un retén ocupando de tal manera la vía pública, que obligó a quienes transitaban por la misma, a ocupar el carril contrario de forma peligrosa, tal como quedó materializado en el accidente objeto de la Litis.

## 2.2. ASPECTOS GENERALES EN CUANTO AL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE

Con la Carta Política de 1991 se produjo la “constitucionalización”<sup>1</sup> de la responsabilidad del Estado y se erigió como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación e interés. De esta forma se reivindica el sustento doctrinal según el cual la “acción administrativa se ejerce en interés de todos: si los daños que resultan de ella, para algunos, no fuesen reparados, éstos serían sacrificados por la colectividad, sin que nada pueda justificar tal discriminación; la indemnización restablece el equilibrio roto en detrimento de ellos”<sup>2</sup>.

Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública tanto por la acción, como por la omisión de un deber normativo, argumentación que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado acogió al unificar la jurisprudencia en las sentencias de 19 de abril de 2012<sup>3</sup> y de 23 de agosto de 2012<sup>4</sup>.

En cuanto a la imputación, exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica<sup>5</sup>, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala Plena de la Sección Tercera: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada-; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional).

Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. Precisamente, en la jurisprudencia constitucional se sostiene, que la “superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no sólo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado según la cláusula social así lo exigen.

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> En la jurisprudencia constitucional se indica: “*El Estado de Derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado. La garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos no se preserva solamente con la exigencia a las autoridades públicas que en sus actuaciones se sujeten a la ley sino que también es esencial que si el Estado en ejercicio de sus poderes de intervención causa un daño antijurídico o lesión lo repare íntegramente*”. Corte Constitucional, sentencia C- 832 de 2001.

<sup>2</sup> RIVERO, Jean. Derecho administrativo. 9ª ed. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1984, p.293. Puede verse también esta construcción doctrinal en: BERLIA. “*Essai sur les fondements de la responsabilité en droit public français*”, en Revue de Droit Public, 1951, p.685; BÉNOIT, F. “*Le régime et le fondement de la responsabilité de la puissance publique*”, en JurisClasseur Publique, 1954. T.I, V.178.

<sup>3</sup> Sección Tercera, sentencia 19 de abril de 2012, expediente: 21515. MP: Hernán Andrade Rincón.

<sup>4</sup> Sección Tercera, sentencia 23 de agosto de 2012, expediente: 23492. MP: Hernán Andrade Rincón.

<sup>5</sup> “*La imputación depende, pues, tanto de elementos subjetivos como objetivos*”. SANCHEZ MORON, Miguel. Derecho administrativo. Parte general., ob., cit., p.927.

<sup>6</sup> El “*otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados*”. Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003.

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva que parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones.

Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”<sup>7</sup>.

Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no <sup>8</sup>.

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional indica que “el núcleo de la imputación no gira en torno a la pregunta acerca de si el hecho era evitable o cognoscible.

Primero si hay que determinar si el sujeto era competente para desplegar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección<sup>9</sup> frente a determinados bienes jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable y cognoscible.

En efecto, si no tiene una posición de garante porque él no ha creado el riesgo para los bienes jurídicos, ni tampoco tiene una obligación institucional de donde surja un deber concreto de evitar el resultado mediante una acción de salvamento, el resultado no le es atribuible. Responde sólo por la omisión de socorro y el fundamento de esa responsabilidad es quebrantar el deber de solidaridad que tiene todo ciudadano.

En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de la acción como de omisión de un comportamiento, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante.

Dicha formulación no debe suponer, se repite, una aplicación absoluta o ilimitada de la teoría de la imputación objetiva que lleve a un desbordamiento de los supuestos que pueden ser objeto de la acción de reparación directa, ni a convertir a la responsabilidad extracontractual del Estado como herramienta de aseguramiento universal, teniendo en cuenta que el riesgo, o su creación, no debe llevar a una responsabilidad objetiva global de la Administración.

<sup>7</sup> MIR PUIG, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., p.7.

<sup>8</sup> JAKOBS, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994. Sin embargo, como lo sostiene el precedente de la Sala Plena de la Sección Tercera: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo (...) No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia”. Sentencia de 24 de febrero de 2005, expediente: 14170.

<sup>9</sup> Deberes de protección que es “una consecuencia de la obligación general de garantía que deben cumplir las autoridades públicas y se colige claramente de los artículos 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que regulan el derecho a disponer de un recurso efectivo en caso de violaciones a los derechos humanos”. CASAL H, Jesús María. Los derechos humanos y su protección. Estudios sobre derechos humanos y derechos fundamentales. 2ª ed. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2008, p.31.

### 3. DEL CASO CONCRETO

Con fundamento en el **acervo probatorio** obrante en el expediente, el Juzgado encuentra probado:

- Registro civil de nacimiento de Israel Gutiérrez Valencia. Folio 53 del cuaderno principal.
- Registro civil de defunción de Israel Gutiérrez Valencia, con registro del 12 de junio de 2013. Folio 54 del cuaderno principal.
- Registro civil de nacimiento de Omaira Largo Guerrero. Folio 55 del cuaderno principal.
- Registro de matrimonio realizado entre Arsoman Gutiérrez Navarrete y Bertilda Rosa Valencia. Folio 56 del cuaderno principal.
- Registro de nacimiento de Arsoman Gutiérrez Navarrete y Bertilda Rosa Valencia. Folio 57 y 58 del cuaderno principal.
- Registro civil de nacimiento de Álvaro Antonio Gutiérrez Valencia. Folio 59 del cuaderno principal.
- Registro civil de nacimiento de Uber Gutiérrez Valencia. Folio 60 del cuaderno principal.
- Registro civil de nacimiento de Otoniel de Jesús Gutiérrez Valencia. Folio 61 del cuaderno principal.
- Registro civil de nacimiento de Fernando Gutiérrez Valencia. Folio 62 del cuaderno principal.
- Certificación de la Asociación de Mineros La Montaña, en la cual se indica que el fallecido Israel Gutiérrez Valencia, laboraba en esa asociación con un salario de \$1.500.000 mensuales. Folio 63 cuaderno principal.
- Certificado de existencia y representación legal de la entidad sin ánimo de lucro Asociación de Mineros La Montaña. Folio 64 y 65 cuaderno principal.
- Declaración extra juicio con fines procesales rendida por Omaira Guerrero Largo, en la que indica que convivió en unión marital de hecho con el fallecido Israel Gutiérrez Valencia, por espacio de 14 años. Folio 66 cuaderno principal.
- Declaración extra juicio con fines procesales rendida por José Didier Chiquito Trejos, Nancy calvo Trejos y Luz Damary Uchima Guevara. Folio 67 y 68 cuaderno principal.
- Copia de informe de accidente de tránsito del 12 de junio de 2013, en donde se reporta el accidente ocurrido entre una motocicleta y un tracto camión. Folio 72 y 74 cuaderno principal.
- Copia de la inspección técnica al cadáver de Israel Gutiérrez Valencia. Folio 76 al 79 del expediente.
- Informe fotográfico realizado al lugar de los hechos en donde fallecido el ciudadano Israel Gutiérrez Valencia. Folio 80 al 85 cuaderno principal.
- Copia del libro de guardia - cuaderno de minuta de policía – realizado por los agentes que adelantaron el puesto de control en el sector aledaño al lugar en donde perdió la vida el ciudadano Israel Gutiérrez Valencia. Folio 166 y 167 cuaderno principal.
- Copia del Polígrama No 509 del 12 de junio de 2013, en donde él TE Fredy Alejandro Moreno Walteros, informa a sus superiores sobre accidente de tránsito con choque entre moto y tracto camión con una persona muerta. Hipótesis vehículo No. 1 moto: **posible exceso de velocidad**; hipótesis vehículo No.2 tracto camión: **invasión de carril**. Folio 174 cuaderno principal.
- Informe ejecutivo de Policía Judicial No. 201300064, en donde se describen los hechos del accidente de tránsito. Folio 185 y 187 cuaderno principal.
- Actuación de primer respondiente para el caso 2013-00064. Primer respondiente Jon Jairo Orozco Flórez. Testigos Víctor Jaramillo y Alberto Pulgarín. Folios 188 y 198 cuaderno principal.
- Copias del expediente adelantado en la Fiscalía General de la Nación, con ocasión de la muerte en accidente de tránsito del señor Israel Gutiérrez Valencia. Folios 2 al 211 del cuaderno de pruebas comunes.
- Testimonios de:

**John Jaime Orozco Flórez:** Intendente de la Policía Nacional.

**Adrián Esteban Rendón Rincón:** Policía de carreteras desde hace 17 años.

**Julián González Valencia:** Conductor del tracto camión que colisionó con la moto. Veintidós (22) años de experiencia como conductor.

**Luz Damary Uchima Guevara:** No fue testigo presencial de los hechos.

**Roberto Elías Lemas Castro:** Trabajador del sector minero, y representante del Área De Reserva Especial Minera de Quinchia. Asociado de la asociación de mineros La Montaña.

**Nulber Londoño Velazco.** Minero, testigo de la actividad minera desempeñada por el fallecido con La Asociación Minera la Montaña.

### 3.1 EN CUANTO AL DAÑO ANTIJURÍDICO

Se reitera que éste, comprendido desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual y del Estado, impone considerar aquello que derivado de la actividad o de la inactividad de la administración pública no sea soportable: i) bien porque es contrario a la Constitución Política o, en general, a cualquier norma de derecho positivo, o ii) porque sea irrazonable, en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos.

El precedente de la Corte Constitucional sobre el tema señala que la “antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”<sup>10</sup>.

Asimismo, se afirma que “(...) esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”<sup>11</sup>

Por otra parte, la Corte también ha considerado que el daño antijurídico se encuadra en los *“principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”*.

Ahora bien, ha manifestado la jurisprudencia del Consejo de Estado, que la noción de daño antijurídico es un concepto constante, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho, ya que un *“Estado Social de Derecho solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”*<sup>12</sup>.

Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable, anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida.

En este orden de ideas, *“el daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le pudo*

<sup>10</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 25 de marzo de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal – bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía- sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, sentencia C-285 de 2002.

<sup>11</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1º de agosto 1996, M.P.: Alejandro Martínez Caballero. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-918 de 29 de octubre de 2002. M.P.: Eduardo Montealegre Lynett.

<sup>12</sup> Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigírsele al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana”. Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 9 de febrero de 1995. Exp.9550, C.P.: Daniel Suárez Hernández.

*evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil*<sup>13</sup>.

Así las cosas, el daño se convierte en el primer elemento de la responsabilidad, es la causa de la reparación, se trata de un requisito indispensable para declarar la responsabilidad del Estado.

Sin embargo, pese a la existencia del daño, es posible que no haya lugar a declarar la responsabilidad estatal, *“es lo que ocurre en dos hipótesis: el daño existe pero no se puede atribuir al demandado (...), el daño existe y es imputable, pero el imputado no tiene el deber de repararlo, porque no es un daño antijurídico y debe ser soportado por quien lo sufre*<sup>14</sup>.

Una vez el juez logra verificar la existencia del daño, le corresponde determinar la naturaleza del mismo, esto es, analizar si es posible calificarlo como **antijurídico o injusto**, puesto que a la luz del artículo 90 de la C.P. el Estado responderá patrimonialmente **sólo por los daños antijurídicos que le sean imputables**, lo que significa que no habrá lugar a declarar la responsabilidad del Estado cuando el juez concluya que el demandante tenía el deber de soportar el daño sufrido.

Realizada la valoración probatoria, el despacho considera, tal y como se señaló en el acápite de hechos probados, que se encuentra acreditada la lesión del bien jurídico vida del ciudadano **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA**, ocurrida como consecuencia de accidente de tránsito presentado el 12 de junio de 2013, en la vía Cauya – La Pintada Kilometro 31-950 vereda La Sierra del Municipio de Riosucio Caldas, en inmediaciones de un retén policial realizado por la especialidad de carreteras.

En este orden, se considera que ni la víctima directa ni las indirectas, estaban llamados a soportar como una carga ordinaria, ni siquiera extraordinaria, daños sobre su derecho constitucional a la vida, que es incuestionable en un Estado Social de Derecho, desde la perspectiva no sólo formal, sino también material de la antijuridicidad.

Sin embargo, no siendo suficiente constatar la existencia del daño antijurídico, es necesario realizar el correspondiente **juicio de imputación**, que permita determinar si dichos daños pueden ser atribuidos fáctica y jurídicamente a las entidades demandadas, o si opera alguna de las causales exonerativas de responsabilidad, o se produce un evento de concurrencia de acciones u omisiones en la producción del daño.

Con base en lo anterior, de las pruebas obrantes en el proceso se concluye que el resultado dañoso surgió como consecuencia de la desviación inapropiada y peligrosa que del tránsito normal sobre la vía, realizaron miembros de la Policía Nacional, cuando instalaron un retén sin tener en cuenta las condiciones de seguridad que afectaban el normal funcionamiento del servicio.

Sobre la instalación anti técnica del retén, se concluye del material probatorio obrante en el plenario lo siguiente:

De folio 73 al 74 del cuaderno principal, obra informe policial de accidentes de tránsito que muestra que el tracto camión quedó ubicado al momento del accidente, regresando a su carril reglamentario, y que la víctima fatal, quedó sobre el carril en donde debía regresar el camión, esto como producto del impacto frontal acaecido.

Ahora bien, como análisis del hecho, resalta el despacho lo siguiente: en el numeral 13 del informe, correspondiente a observaciones, el miembro de la Policía Adrián Esteban Rendón Rincón, quien atendió el hecho dejó por escrito:

<sup>13</sup> Hinestrosa, Fernando. *Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa*. Citado por Henao, Juan Carlos. *El daño*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 36.

<sup>14</sup> Henao, Juan Carlos. *El daño*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 38.



*“había un puesto de control aproximadamente a 50 mts del lugar de los hechos, puesto de control PONAL – SETRA – Decal Unir “Sic.*

A esta situación se suma el testimonio rendido a instancia del presente juicio de responsabilidad por el mismo testigo Rendón Rincón, en el que indicó que hacía parte de la policía de carreteras desde hace 17 años, que al momento del hecho se encontraba en la alcaldía de Riosucio Caldas en compañía de otro policía. Que realizó el informe del accidente de tránsito, indicando que era una vía en doble sentido, por lo que no permitía el adelantamiento de vehículos; que no realizó hipótesis sobre las posibles causas del accidente, porque sus superiores le habían indicado en capacitaciones y de manera verbal, que no lo hiciera, en la medida en que para estos casos, se debía adelantar una investigación a fondo sobre el accidente.

Exteriorizó que como observación acerca del accidente, plasmó en su informe que los testigos le indicaban que antes del lugar del accidente había un puesto de control de la Policía, y que cuando él llegó al sitio, el mencionado puesto de control ya no estaba.

Ahora bien, considera el despacho que el hecho comprobado de que se hubiera movido del lugar de los hechos el puesto de control que tenía levantado la Policía de Carreteras, *por el motivo que se hubiere hecho*, resulta esencial para el esclarecimiento del proceso, dado que indefectiblemente el puesto policial incidió en el cambio de rumbo que sobre la vía realizó el tracto camión, y sin la existencia de este puesto, el conductor no habría invadido el carril contrario, con las consecuencias que hoy nos traen al presente análisis.

De otro lado, también reposa como prueba dentro del expediente, informe fotográfico realizado al lugar de los hechos en donde falleció el ciudadano Israel Gutiérrez Valencia, folio 80 al 85 cuaderno principal, de donde el despacho extrae las siguientes conclusiones probatorias:

- a) Que la curva por donde subió el ciudadano Israel Gutiérrez Valencia, era cerrada, de 90 grados, sin que pudiera observar que por el carril que normativamente le correspondía, se desplazaba un tracto camión en sentido contrario. Vehículo pesado con el que impacto de frente sin que pudiera tener ninguna reacción.
- b) Que el tracto camión que causó la muerte del ciudadano, venía entrado a su carril reglamentario, para tomar la curva cerrada hacia la izquierda, y que el fallecido venía tomando la misma curva pero hacia la derecha - sentidos contrapuestos -. Asimismo, que el impacto en contra del vehículo pesado se dio de frente y por su lado izquierdo, tal como se demuestra con la imagen de la fotografía No.7, en primer plano.
- c) Que verificando la fotografía No. 8, tomada desde la parte de atrás del vehículo pesado, en un plano abierto, se puede observar claramente que este trata de ingresar de nuevo a su carril, obviamente y analizadas las pruebas en su conjunto, luego de esquivar el control policial que obstruía el tráfico habitual del sector.

Asimismo, reposa como prueba en el plenario, folios 87 al 89, copia de documento emanado de la Policía Nacional, acerca del control de delitos y contravenciones, en donde se indica en relación a la forma en que se deben adelantar los puestos de control por parte del personal uniformado de esa institución, que se deben realizar según los parámetros establecidos en el Código Nacional de Tránsito y en la Resolución No. 0911 del 2010 – Manual de patrullaje Urbano-.

Al respecto, el documento sobre control de delitos y contravenciones destaca que:

*“3. INSTALAR Y UBICAR EL PUESTO DE CONTROL: Ubicar el personal y el Kit de puesto de control en el sitio establecido según orden de servicios, teniendo presente la correcta ubicación sin perturbar el tráfico vehicular, o generar riesgos para los conductores o peatón, distribuyendo el personal según las funciones establecidas durante la formación para salir al servicio. Informar al CAD o radio*

*operador, el inicio y ubicación del puesto de control, utilizando todos los medios logísticos requeridos.”*

También reposa copia del libro de guardia - cuaderno de minuta de policía – realizado por los agentes que adelantaron el puesto de control en el sector aledaño al lugar en donde perdió la vida el ciudadano Israel Gutiérrez Valencia. Folio 166 y 167 cuaderno principal y 38 y 39 del cuaderno de pruebas comunes No. 4. De esta prueba en contraste con la testimonial rendida por Adrián Esteban Rendón Rincón, se extraen las siguientes conclusiones:

- a) Que en dirección al puesto de control, a las 7:30 de la mañana, se desplazaron seis (6) uniformados de la Policía Nacional a saber: Sl. Orozco Flórez, Sl. Rendón Rincón, Sl. González López, PT. Fernández Rivera, PT. Acevedo Pulgarín y PT. Mejía Zuluaga.
- b) Que dos (2) de los seis (6) uniformados se desplazaron hacia el Municipio de Riosucio, Sl. Rendón Rincón y PT. PT. Mejía Zuluaga; es decir que en el puesto de control quedaron cuatro (4) uniformados de la Policía.

De otro lado, reposa como prueba en el expediente, copia del Polígrama No 509 del 12 de junio de 2013, en donde el TE Fredy Alejandro Moreno Walteros, informa a sus superiores sobre accidente de tránsito por choque entre moto y tracto camión con una persona muerta. Hipótesis vehículo No. 1 moto: **posible exceso de velocidad**; hipótesis vehículo No.2 tracto camión: **invasión de carril**. Folio 174 cuaderno principal.

Por otra parte, reposa como prueba en el plenario, informe ejecutivo de Policía Judicial No. 201300064, en donde se describen los hechos del accidente de tránsito. Folio 185 y 187 cuaderno principal y la actuación de primer respondiente para el caso 2013-00064; primer respondiente John Jairo Orozco Flórez y testigos Víctor Jaramillo y Alberto Pulgarín. Folios 188 y 198 cuaderno principal.

Ahora bien, con respecto a los testimonios rendidos en el presente asunto, el despacho destaca los siguientes elementos:

**Testigo John Jaime Orozco Flórez:** Intendente de la Policía Nacional. Dijo al despacho que se encontraba de servicio en el puesto de registro y control, cuando un tracto camión se metió en contra vía en sentido Anserma Riosucio e impactó con un motociclista. Indicó que no recuerda cuantos policías hacían parte del puesto de control y que recordaba que tenían detenido un tracto camión que llevaba una retro excavadora.

Asimismo, expuso que el retén policial estaba ubicado más o menos a media cuadra de donde sucedió el accidente de tránsito.

Manifestó que para adelantar el retén policial, el vehículo que pasaba el puesto de control tenía que invadir el carril contrario.

Expuso que en ese momento, él era el encargado del registro y control y que no recordaba el número de policías que se debían emplear en una operación de registro y control. Dijo desconocer la norma técnica policial, para el planeamiento del servicio de carreteras, a pesar de haber trabajado en ese servicio especializado, por espacio de 15 años.

Se destaca por el despacho que el testigo, reusando contestar las preguntas del apoderado de la parte demandante, expuso que no recordaba si aplicaba el instructivo para la correcta realización de puestos de control de la Policía de Carreteras.

Asimismo, indicó que no dispuso de policías que controlaran el tráfico antes ni después del puesto de registro, argumentado que todos los policías se encontraban dentro del área de registro; que no sabía ni recordaba cuantos metros medía el puesto de registro y control, aun cuando él mismo lo había instalado.

Expuso que no tenían ningún policía ubicado con paletas o señales de pare o siga, para controlar los vehículos que seguían transitando por el sector.

Manifestó que ningún policía le ordenó al conductor del camión que se accidentó, que se detuviera. En el mismo sentido, indicó no saber a qué velocidad venía el conductor de la motocicleta y que al mismo tiempo, el accidente fue responsabilidad del conductor del tracto camión, en la medida en que invadió la vía, tanto que el punto de impacto estaba ubicado en el carril de la motocicleta.

Continuó su relato, manifestando que el puesto de control policial detiene selectivamente a los vehículos que transitan. Indicó que el puesto de control estaba ocupando parte del carril bajando, razón por la cual el tracto camión que causó el accidente no cabía y debía esperar que algún policía le diera vía o que el vehículo que se estaba registrando siguiera su marcha. Con este mismo planteamiento, el intendente insistió en que ningún policía, dio vía ni detuvo al tracto camión accidentado.

Indicó que los conos de señalización, le mostraban al conductor del tracto camión que mermara la velocidad. Expuso que no tenía personal, ni paletas para poner al principio y al final del puesto de control. Reiteró que no tenían personal señalizando en ambos extremos.

De manera trascendental para las resultas del presente asunto, expuso que teniendo en cuenta las características del sitio del accidente, hubiese sido procedente ubicar personal al principio y al final del puesto de control para indicar a los conductores que no continuaran o que lo hicieran con mucha precaución.

Al final de su testimonio, reiteró que no se cumplieron con los requerimientos de un puesto de control policial, porque no se encontraban en esa actividad, sino simplemente en un área de registro y control móvil.

**Testigo Julián González Valencia:** Conductor del tracto camión que colisionó con la moto. Veintidós (22) años de experiencia como conductor. Indicó que al momento de los hechos estaba en el sector del accidente un retén de la policía de carreteras. Que a un lado del retén, tenían una cama baja que portaba una retro excavadora encima. Que delante de él venía un camioncito, al cual la Policía le hizo señal de pare. El camión pequeño paró, y como él quedó en la vía, prosiguió su marcha. Testificó que cuando ya está regresando a su carril, al finalizar los conos de señalización que había ubicados en el retén, sintió el golpe de la moto que aprecio rápido y le pego a la parte frontal de la mula. Por último destacó que el retén de la Policía estaba muy pegado a la curva, lo que impedía el adelantamiento.

Expuso que cuando llegó al retén policial, había cuatro (4) vehículos siendo requisados por los uniformados. Concluyó que el retén estaba mal ubicado, esto por su cercanía con una curva que impedía la visibilidad.

Para esta autoridad judicial el análisis de las condiciones tiempo, modo y lugar de la ocurrencia del accidente de tránsito quedan develados según las pruebas arrimadas al plenario, en donde se describen detalladamente dos elementos: 1. El lugar del accidente presentaba doble línea continua<sup>15</sup>, es decir, presentaba prohibición para el adelantamiento de vehículos, y 2. El carril para el tránsito normal de vehículos estaba ocupado por varios camiones que estaban siendo requisados por integrantes de la Policía Nacional.

En este sentido, tenemos probado que el sector en donde se presentó el accidente de tránsito, en efecto se vio modificado en sus condiciones normales de movilidad, por la intervención de una autoridad de tránsito, en este caso, de la Policía de Carreteras, que modificó las condiciones normales de conducción por la vía.

<sup>15</sup> ARTÍCULO 73. PROHIBICIONES ESPECIALES PARA ADELANTAR OTRO VEHÍCULO. No se debe adelantar a otros vehículos en los siguientes casos:

En intersecciones

En los tramos de la vía en donde exista línea separadora central continua o prohibición de adelantamiento.

### 3.2 RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE PARA LOS EVENTOS EN QUE SE PRESENTA UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN EL QUE ESTÁ INMERSA LA INTERRUPCIÓN DEL PASO NORMAL SOBRE LA VÍA

Para definir el régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto, es necesario remitirse al texto mismo de la demanda y a la manera en la cual se estructuraron en aquella las imputaciones relacionadas con la responsabilidad extracontractual de la Administración.

Al respecto el Consejo de Estado ha reiterado que cuando se presentan accidentes de tránsito causados por falla del servicio de la administración consistente en la omisión del deber legal de señalización de una vía que se encuentre obstruida, obstaculizada o en la que se le realicen cambios transitorios, debe responder por los daños que se deriven de estos hechos, siempre que se verifique que la entidad encargada de dichos deberes no controló o vigiló el normal y adecuado tránsito de la ruta correspondiente.

*“(…) Se tiene que el accidente donde resultó lesionado el señor Eduardo Andrés Guzmán se produjo en la carrera sexta con calle séptima entre las 5:30 a.m. y 6:00 a.m. y que aquel obedeció a la existencia de unos escombros ubicados en la vía cerca de un separador que carecían de señalización, por lo que se procederá analizar si los mismos fueron dejados por alguna obra realizada por las entidades demandadas, caso en el cual se estudiara su responsabilidad. (...) En el caso sub lite, se tiene que EMPOCALDAS S. A. E. S. P realizó obras de mantenimiento a la red de acueducto y alcantarillado del sector de los Alpes en el Municipio de La Dorada – Caldas, las que ocasionaron escombros que no fueron recogidos, ni señalizados por la entidad, **por lo que hubo un incumplimiento a sus deberes legales que le acarrea responsabilidad patrimonial.** (...) Por tanto, correspondía al Municipio de La Dorada – Caldas verificar y controlar que las obras realizadas por EMPOCALDAS S. A. E. S. P no afectaran la circulación de los vehículos, que estuvieran señalizadas y que una vez las mismas terminaron no hubieran obstáculos que impidieran el libre tránsito; como ello no ocurrió, le asiste también responsabilidad al municipio de La Dorada de Caldas, quien junto con la empresa Empocaldas S. A. E. S. P serán condenados solidariamente a indemnizar los perjuicios causados a los demandantes. (...)”*

*“(…) El Consejo de Estado, en relación con los accidentes de tránsito causados por la falla del servicio de la administración consistente en la omisión del deber legal de señalización de la **vía que se encuentra obstruida, obstaculizada o afectada con motivo de la realización de una obra pública, reparación o cambios transitorios,** ha indicado que los daños que se deriven de estos le son imputables al Estado siempre que se verifique que la entidad encargada de dichos deberes no controló o vigiló la ejecución de las obras, como tampoco el normal y adecuado tránsito de la ruta correspondiente. (...) no dan lugar a la menor duda en el sentido de que los municipios tienen legal y reglamentariamente atribuida la función de velar por la conservación y el sostenimiento de las vías públicas destinadas a la circulación de personas, vehículos o cosas, en particular, tratándose de los elementos que hacen parte de las redes de acueducto y alcantarillado ubicados en dichas vías. (...)”*

*“<sup>16</sup>**Negrillas del despacho.***

En este sentido, si la Policía Nacional, no controló de manera adecuada el tránsito de automotores, ante la realización del retén que efectuó, debe responder por los daños causados a las víctimas acontecimiento antijurídico.

### 3.3. LA IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO EN EL CASO CONCRETO

A efecto de establecer este elemento constitutivo de la responsabilidad demandada, el despacho encuentra procedente referir los hechos probados en relación con la muerte acaecida al ciudadano **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA.**

<sup>16</sup> Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección tercera sub sección B, Consejero ponente: RAMIRO DE JESUS PAZOS GUERRERO Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014). Radicación número: 17001-23-31-000-2000-00188-01(31002)

### 3.3.1. EL ACCIDENTE

Está debidamente acreditado que el ciudadano **ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA**, murió como consecuencia de las numerosas lesiones que padeció a consecuencia del accidente ocurrido en la vía Cauya – La Pintada Kilómetro 31 + 950 Vereda la Sierra del Municipio de Riosucio (Caldas) el 12 de junio de 2013, cuando impactó de frente en contra de un tracto camión que invadió su carril de conducción. Registro civil de defunción. Folio 54 del cuaderno principal.

En la vía en la que se produjo el accidente, la Policía Nacional realizaba un retén o puesto de control que obligaba a los vehículos que transitaban, a invadir el carril contrario. Pruebas testimoniales. Informe de accidente de tránsito.

### 3.3.2. EL RETÉN POLICIAL

En relación con la realización del retén policial se demostró lo siguiente:

De las pruebas obrantes en el proceso se concluye que el resultado dañoso surgió como consecuencia de la desviación inapropiada y peligrosa que del tránsito normal sobre la vía, realizaron miembros de la Policía Nacional, cuando instalaron un retén sin tener en cuenta las condiciones de seguridad que afectaban el normal funcionamiento del servicio.

Sobre La instalación anti técnica del retén, se concluye del material probatorio obrante en el plenario lo siguiente:

De folio 73 al 74 del cuaderno principal, obra informe policial de accidentes de tránsito que muestra que el tracto camión quedó ubicado al momento del accidente, regresando a su carril reglamentario, y que la víctima fatal, quedó sobre el carril en donde debía regresar el camión, esto como producto del impacto frontal acaecido.

Numeral 13 del informe, correspondiente a observaciones, el miembro de la Policía Adrián Esteban Rendón Rincón, quien atendió el hecho dejó por escrito:

*“había un puesto de control aproximadamente a 50 mts del lugar de los hechos, puesto de control PONAL – SETRA – Decal Unir “Sic.*

Testigo Adrián Esteban Rendón Rincón, quien exteriorizó en su informe que los testigos le indicaban que antes del lugar del accidente había un puesto de control de la Policía, y que cuando él llegó al sitio, el mencionado puesto de control ya no estaba.

Informe fotográfico realizado al lugar de los hechos en donde falleció el ciudadano Israel Gutiérrez Valencia. Folio 80 al 85 cuaderno principal.

Copia de documento emanado de la Policía Nacional, acerca del control de delitos y contravenciones, en donde se indica en relación a la forma en que se deben adelantar los puestos de control por parte del personal uniformado de esa institución, que se deben realizar según los parámetros establecidos en el Código Nacional de Tránsito y en la Resolución No. 0911 del 2010 – Manual de patrullaje Urbano-.

Al respecto, el documento sobre control de delitos y contravenciones destaca que:

*“3. INSTALAR Y UBICAR EL PUESTO DE CONTROL: Ubicar el personal y el Kit de puesto de control en el sitio establecido según orden de servicios, teniendo presente la correcta ubicación sin perturbar el tráfico vehicular, o generar riesgos para los conductores o peatón, distribuyendo el personal según las funciones establecidas durante la formación para salir al servicio. Informar al CAD o radio operador, el inicio y ubicación del puesto de control, utilizando todos los medios logísticos requeridos.”* Folios 87 al 89.

Copia del Polígrama No 509 del 12 de junio de 2013, en donde él TE Fredy Alejandro Moreno Walteros, informa a sus superiores sobre accidente de tránsito por choque entre

moto y tracto camión con una persona muerta. Hipótesis vehículo No. 1 moto: **posible exceso de velocidad**; hipótesis vehículo No.2 tracto camión: **invasión de carril**. Folio 174 cuaderno principal.

Por otra parte, reposa como prueba en el plenario, informe ejecutivo de Policía Judicial No. 201300064, en donde se describen los hechos del accidente de tránsito. Folio 185 y 187 cuaderno principal y la actuación de primer respondiente para el caso 2013-00064; primer respondiente John Jairo Orozco Flórez y testigos Víctor Jaramillo y Alberto Pulgarín. Folios 188 y 198 cuaderno principal.

Ahora bien, con respecto a los testimonios rendidos en el presente asunto, el despacho destaca los siguientes elementos:

**Testigo John Jaime Orozco Flórez:** Intendente de la Policía Nacional. Dijo al despacho que se encontraba de servicio en el puesto de registro y control, que un tracto camión se metió en contra vía en sentido Anserma Riosucio e impacto con un motociclista. Indicó que no recuerda cuantos policías hacían parte del puesto de control y que recordaba que tenían detenido un tracto camión que llevaba una retro excavadora.

Asimismo, expuso que el retén policial estaba ubicado más o menos a media cuadra de donde sucedió el accidente de tránsito.

Manifestó que para adelantar el retén policial, el vehículo que pasaba el puesto de control tenía que invadir el carril contrario.

Expuso que en ese momento, él era el encargado del registro y control y que no recordaba el número de policías que se debían emplear en una operación de registro y control. Dijo desconocer la norma técnica policial, para el planeamiento del servicio de carreteras, a pesar de haber trabajado en ese servicio especializado, por espacio de 15 años.

Se destaca por el despacho que el testigo, reusando contestar las preguntas del apoderado de la parte demandante, expuso que no recordaba si aplicaba el instructivo para la correcta realización de puestos de control de la Policía de Carreteras.

Asimismo, indicó que no dispuso de policías que controlaran el tráfico antes ni después del puesto de registro, argumentado que todos los policías se encontraban dentro del área de registro; que no sabía ni recordaba cuantos metros medía el puesto de registro y control que él mismo había establecido. Expuso que no tenían ningún policía ubicado con paletas o señales de pare o siga, para controlar los vehículos que seguían transitando por el sector.

Expuso que ningún policía le ordenó al conductor del camión que se accidentó, que se detuviera. En el mismo sentido, manifestó no saber a qué velocidad venía el conductor de la motocicleta y que el accidente fue responsabilidad del conductor del tracto camión, en la medida en que invadió el carril de la moto, tanto que el punto de impacto estaba ubicado en el carril de la moto.

Continuó su relato, manifestando que el puesto de control policial detiene selectivamente a los vehículos que transitan. Indicó que el puesto de control estaba ocupando parte del carril bajando, razón por lo cual el tracto camión que causó el accidente no cabía y debía esperar que algún policía le diera vía o que el vehículo que se estaba registrando siguiera su marcha. Con este mismo planteamiento, el intendente, insistió en que ningún policía, dio vía ni detuvo al tracto camión accidentado.

Indicó que los conos de señalización, le indicaban al conductor del tracto camión que mermara la velocidad. Expuso que no tenía personal, ni paletas para poner al principio y al final del puesto de control. Reitero que no tenían personal señalizando en ambos extremos.

De manera trascendental para las resultas del presente asunto, expuso que teniendo en cuenta las características del sitio del accidente, hubiese sido procedente ubicar personal al principio y al final del puesto de control, para indicar a los conductores que no continuaran o que lo hicieran con mucha precaución.

Al final de su testimonio, reiteró que no cumplieron con los requerimientos de un puesto de control policial, porque no se encontraban en esa actividad, sino simplemente en un área de registro y control móvil.

Con relación al anterior testimonio el despacho concluye lo siguiente. En primer término que la argumentación del comandante del operativo policial, tiene su baluarte en indicar que no se encontraba haciendo un puesto de control, pero para las resultas del proceso lo trascendental es que la presencia de los policías en la vía alteró las condiciones de conducción normales y seguras en que se puede utilizar, y en este sentido el servicio de Policía debió prever el suceso que al final desencadenó la pérdida de una vida; mucho más si tenemos en cuenta que el operativo era adelantado por la especialidad de Carreteras, con agentes de muchos años de experiencia.

Ahora bien, el testigo de la Policía, comandante del operativo policial, intenta mostrar que fue la imprudencia del conductor del tracto camión la que lo llevó a invadir el carril contrario a su marcha normal y a impactar con el motociclista fallecido, dado que nadie le dijo que se detuviera ni que continuara su marcha.

Sobre esta afirmación, el despacho considera que el planteamiento resulta ilógico y contrario, opuesto a cualquier tipo de solución plausible sobre el momento en que se presentó el accidente por lo siguiente:

Está probado que: a) Los policiales ocupaban un carril de la vía, b) Que tenían detenidos varios vehículos, es decir, que obstaculizaron el normal funcionamiento de la vía, c) Que para la ejecución del retén, su comandante no dispuso de ninguna unidad policial a la entrada o salida y d) que el tracto camión que colisionó con la motocicleta, estaba en marcha al momento del impacto y de superar el retén.

En esas condiciones, el testimonio del Intendente John Jaime Orozco Flórez es contradictorio, porque intenta demostrar que en el contexto que ha sido comprobado, el conductor del camión debió asumir una conducta de total inacción. Así, en criterio del intendente de la Policía y según el análisis del despacho, las posibilidades que tenía el conductor del tracto camión al encontrarse con el retén policial, fueron las siguientes: a) Que se detuviera, pero el testigo indica que nadie le dio esa orden; b) Que continuara su marcha, aun cuando el testigo indica que nadie le dio esa orden; o c) Que se mantuviera inactivo, situación imposible dada la marcha legal que sobre la carretera desarrollaba.

Ahora bien, para confrontar lo anterior, se analiza el testimonio del conductor del tracto camión:

**Testigo Julián González Valencia:** Conductor del tracto camión que colisionó con la moto y con veintidós (22) años de experiencia como conductor. Indicó que al momento de los hechos estaba en el sector del accidente un retén de la policía de carreteras. Que a un lado del retén, tenían una cama baja que portaba una retro excavadora encima. Que delante de él venía un camioncito, al cual la Policía la hizo señal de pare, frente a lo cual, este automotor paró y como él quedó en la vía, él prosiguió con su marcha.

Testificó que cuando ya está regresando a su carril, al finalizar los conos de señalización que había ubicados en el retén, sintió el golpe de la moto que apreció rápido y le pego a la parte frontal de la mula. Por último destacó que el retén de la Policía estaba muy pegado a la curva, lo que impedía el adelantamiento.

Expuso que cuando llegó al retén de policía, había cuatro (4) vehículos siendo requisados por los uniformados. Concluyó que el retén estaba mal ubicado, esto por su cercanía con una curva que impedía la visibilidad.

Para esta autoridad judicial el análisis de las condiciones tiempo, modo y lugar de la ocurrencia del accidente de tránsito quedan develados según las pruebas arrimadas al plenario, en donde se describen detalladamente dos elementos: 1. El lugar del accidente presentaba doble línea continua<sup>17</sup>, es decir, presentaba prohibición para el adelantamiento de vehículos, y 2. El carril para el tránsito normal de vehículos estaba ocupado por varios camiones que estaban siendo requisados por integrantes de la Policía Nacional.

En este sentido, tenemos probado que el sector en donde se presentó el accidente de tránsito, en efecto se vio modificado en sus condiciones normales de movilidad, por la intervención de una autoridad de tránsito, en este caso, de la Policía de Carreteras, que modificó las condiciones normales de conducción por la vía.

### **3.4. LA IMPUTACIÓN DEL DAÑO A LA POLICIA NACIONAL**

Mediante la valoración de los medios de prueba, el Despacho deduce que la muerte del ciudadano Israel Gutiérrez Valencia, es imputable a la Policía Nacional porque a través de sus agentes, realizó un retén policial, que modificó las condiciones normales de tránsito en la vía, sin minimizar los riesgos que esta acción finalmente desencadenó.

Asimismo, el despacho considera que el daño no es imputable ni a Juan Augusto Ríos Osorio, ni a COLDETRANS S.A, dado que no se demostró que incumplieran reglamentos o regulaciones en relación con el sistema vial colombiano que hubiesen tenido incidencia – jurídica – en la materialización del accidente de tránsito. En el mismo sentido, las entidades Cooperativa Quindiana de Transporte y Aseguradora ALLIANZ, no se les atribuirá imputación alguna, en la medida en que por parte del despacho no se encontró responsabilidad de quienes las llamaron en garantía. Sobre este particular se profundizara en el respectivo acápite de exenciones de esta providencia.

### **3.5. LA FALLA DEL SERVICIO.**

El Código Nacional de Tránsito Terrestre, modificado por el Decreto 1809 de 1990, vigente a la fecha en que ocurrió el accidente, establece que, en los municipios, las autoridades encargadas de expedir las normas y adoptar las medidas necesarias para el mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas, son el alcalde y los secretarios de tránsito municipal (arts. 3º, 6º y 236).

El mismo estatuto establece restricciones a la circulación de peatones, animales y vehículos por las vías públicas y privadas abiertas al público, “para garantía de la seguridad y comodidad de sus habitantes” (art. 1º), de las cuales se destacan las contenidas en el artículo 138, que dispone la reducción de velocidad a un máximo de 30 kilómetros por hora, entre otros, en los lugares de concentración de personas y cuando transiten cerca de las aceras; el artículo 148, que dispone que el máximo de velocidad en zonas urbanas es de 60 km y el 156, que regula las obligaciones que están a cargo de los motociclistas.

Asimismo, resulta pertinente insistir en que de conformidad con los testimonios antes relacionados, para el momento del accidente, la referida carretera no contaba con señalización alguna de peligro y/o precaución. Por tanto, concluye el despacho que en el caso concreto dicha omisión del deber de efectuar la señalización mínima de la zona constituye una evidente falla del servicio.

Ahora bien, la Policía de Carreteras tenía el deber de efectuar la señalización correspondiente, de conformidad con la obligación impuesta a ella de asegurar la

<sup>17</sup> ARTÍCULO 73. PROHIBICIONES ESPECIALES PARA ADELANTAR OTRO VEHÍCULO. No se debe adelantar a otros vehículos en los siguientes casos:

En intersecciones

En los tramos de la vía en donde exista línea separadora central continua o prohibición de adelantamiento.



seguridad de la vía con el fin de que dicha carretera pudiera funcionar adecuadamente y que no constituyera un peligro para todo aquel que la transitara.

Cabe resaltar en este punto, que la obligación impuesta por el principio de señalización ni siquiera admite cumplimiento parcial, comoquiera que su finalidad, consistente en garantizar la circulación por las vías públicas en condiciones de seguridad, libertad y confianza, sólo se previene con eficiencia si la existencia de peligros y obstáculos sobre la vía, se encuentra debidamente señalizada, de conformidad con los requerimientos técnicos establecidos al respecto.

En ese sentido, el Consejo de Estado, respecto del “principio de señalización”, se ha manifestado en los siguientes términos:

*“La seguridad de la circulación en las vías públicas, no puede estar comprometida u obstaculizada por situaciones anormales, que en eventos como el de autos, constituyen una trampa mortal para los usuarios de las mismas, quienes al fin y al cabo solo ejercen una pluralidad de derechos y principios consagrados en todo el plexo normativo en esta materia, tales como los que se recogen en las siguientes disposiciones: artículos 678 y 1005 del Código Civil, artículo 8 del decreto 21 de 1909, que hacen referencia al derecho de uso y goce de las vías públicas; el artículo 1 inciso segundo del Código Nacional de Tránsito, el capítulo octavo de la ley 336 de 1996, que desarrollan el principio de la seguridad entre otros; el artículo 24 de la Constitución Política que se refiere a la libertad de locomoción con un derecho fundamental; y todos ellos se acompasan con el denominado principio de la señalización en materia de tránsito de vehículos, en efecto se ha dicho:*

*‘Sobre la importancia de la señalización la doctrina ha llegado inclusive a acuñar la expresión “Principio de señalización”, del cual se deriva que cuando las entidades que tienen a su cargo el deber de señalizar las vías públicas, omiten su cumplimiento o lo hacen de manera defectuosa comprometen las responsabilidades de las personas jurídicas en cuyo nombre actúan, por evidente falta o falla en el servicio público, a ellas encomendado. Se ve en este principio, que fuera de construir carreteras seguras y adecuadas a los requerimientos del tráfico y mantenerlas en buen estado, la administración tiene el deber primario de ejercer el control, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que ordenan su señalización y advierten los peligros. Si por falta o falla de la administración no se advierte a tiempo de los peligros; o advertida de ellos no los remedia; o deja pasar la oportunidad para hacerlo; en todos estos casos y otros similares, el Estado deberá la reparación de la totalidad de los daños y perjuicios que su falla en la prestación del servicio ocasione por la ausencia de señalización en las carreteras, lo que hace que no sean adecuadas y seguras.*

*‘La seguridad de los habitantes, o mejor de los usuarios de las vías públicas, es uno de los deberes propios de las entidades y personas vinculadas al control del tránsito en todo el territorio Nacional, así lo estableció el Decreto 1344 de 19701. Resulta evidente que cuando esa seguridad no es propiciada, antes bien, es cuestionada o puesta en peligro, por la inercia o negligencia de las autoridades llamadas a ejercer el control, las consecuencias gravosas para los particulares, que pueden seguirse de dichas omisiones o cumplimiento defectuosos de tales competencias, han de ser asumidas por las respectivas entidades públicas.*

*‘El artículo 112 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, considera las señales de tránsito así: Señales de reglamentación, o reglamentarias; señales de prevención o preventivas; y señales de información o informativas. Siendo las de prevención o preventivas aquellas que “tienen por objeto advertir al usuario de la existencia de un peligro y la naturaleza de este”. Reviste tanta importancia la disposición sobre estos dos tipos de señales (las reglamentarias y las preventivas), que el propio Código Nacional de Tránsito Terrestre, se ocupó de establecer las dimensiones y características que deben tener las mismas.*

*‘La resolución No. 5246 de 1985 proferida por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte - hoy Ministerio de Transporte - “por la cual se adopta como reglamento oficial el Manual sobre Dispositivo para control de Tránsito en calles y carreteras”, estableció en su primer considerando: “que la señalización de las calles y carreteras es un aspecto de gran importancia para la seguridad vial del país...”. Lo cual significa o comporta que la adecuada y debida señalización tiene una importancia mayúscula para el desempeño de las actividades de control de tránsito automotor. No se trata simplemente de una competencia facultativa o discrecional en cuanto a su ejercicio, por parte de las autoridades de tránsito,*

*son potestades de imperativo desarrollo, en la medida en que la disposición de dichas señales es un elemento insustituible de la seguridad vial del país. La resolución No. 8408 de 1985, establece la cantidad mínima de señales temporales a utilizar en las calles y carreteras<sup>1</sup>. La pluralidad misma de señales temporales, ordenada por esta resolución, en los sitios de peligro en las vías públicas, revela el interés del legislador, y de la propia entidad administrativa, por la seguridad de los usuarios de los medios de transporte terrestre.”<sup>18</sup>*

### 3.6 CONCLUSIONES PROBATORIAS

En primer término el despacho considera que la imputación en el presente asunto recae en cabeza de la autoridad pública que realizó un retén con alteración del funcionamiento normal de la vía, sin que se tomaran las medidas preventivas necesarias para minimizar los riesgos que una acción de este tipo conlleva. Por esta razón en el acápite de solución de las excepciones propuestas, se exonerará de responsabilidad a La Compañía Colombiana De Transporte “COLDETRANS” S.A y a Juan Augusto Ríos Osorio, dejando sin piso jurídico el llamamiento en garantía realizado en contra de La Cooperativa Quindiana De Transportadores Ltda y ALLIANZ SEGUROS S.A

Asimismo, se concluye que el causante material del accidente fue el tracto camión que impactó directamente a la motocicleta, pero que este impacto se dio cuando aquel estaba regresando a su carril reglamentario, luego de que fuera obligado a asumir esta acción, por un retén de la Policía de Carretas que no previó las consecuencias de su ubicación.

De otro lado no se logró demostrar dentro del expediente, que el conductor de la motocicleta – fallecido – hubiese violado reglamentos o normas de seguridad para la conducción de este tipo de vehículos, con incidencia factual en la materialización del daño.

## 4. SOBRE LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS

### 4.1 SOBRE LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LA POLICIA

Acerca de la excepción de **“Culpa exclusiva y determinante de la víctima”**, el despacho considera que no está llamada a prosperar, en la medida en que no fue probada por ningún medio por parte de la Policía Nacional. La parte demandada, simplemente se movió entre conjeturas y generalizaciones del posible comportamiento de la víctima, para fundamentar su defensa, dejando de lado las pruebas que debían sustentar este medio exceptivo.

La culpa exclusiva y determinante de la víctima debió quedar probada de manera tal, que rompiera de golpe la imputación en contra de la Policía, de manera que sin la actuación de la víctima directa, el daño no hubiese tenido ocurrencia.

Acerca de la excepción de **“Rompimiento del nexo causal”**, el despacho considera que no está llamada a prosperar, dado que en efecto se logró demostrar con las pruebas arrojadas al plenario, que la instalación insegura de un retén de la Policía, desencadenó que el tracto camión que resultó también implicado en el presente asunto, tomara el carril contrario (sin que nadie lo detuviera) y que envistiera de frente al ciudadano Israel Gutiérrez Valencia, cuando aquel transitaba por al lado reglamentario de la vía, sin que la Policía Nacional tomara las medidas necesarias para prevenirlo ante la invasión de carril que se venía presentando en el sector de la tragedia.

De nuevo resalta el despacho que a través de generalizaciones y suposiciones, la parte demandada pretenda mostrar que el exceso de velocidad y la pérdida de control de la moto, sumadas a la invasión de carril del tracto camión, todas sin prueba en el

---

<sup>18</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de octubre 4 de 2007. Exp: 16.058 y 21.112 acumulados. CP. Enrique Gil Botero.

expediente, pudieran romper en nexo de causalidad comprobado entre la actividad policial y el daño sufrido por las víctimas.

## 4.2 SOBRE LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO

**4.1.1** Acerca de la excepción de “*Hecho de un tercero*”, considera el despacho que está llamada a prosperar, dado que del material probatorio recaudado, se puede observar que el hecho dañoso – accidente de tránsito – que ocasionó la muerte del ciudadano, se presentó únicamente<sup>19</sup>, como consecuencia de la deficiente e insegura realización de un retén por parte de la Policía Nacional, que obligó a que el conductor del tracto camión que impactó en contra de la motocicleta, invadiera el carril contrario, ante la imposibilidad de continuar la marcha en el carril obstruido. Es decir, el despacho considera que la imputación jurídica del hecho, recae única y exclusivamente en la Policía Nacional, librando de responsabilidad a Juan Augusto Ríos Osorio. Con fundamento en lo descrito por el inciso tercero artículo 282 del Código General del Proceso, el juzgado se releva del análisis de las demás excepciones propuestas.

## 4.3 SOBRE LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR COLDETRANS S.A

**4.3.1** Acerca de la excepción de “*Hecho de un tercero*”, el despacho considera que está llamada a prosperar, pues tal cómo se ha venido argumentando, la imputación jurídica del daño recae únicamente en la Policía Nacional, que alteró las condiciones normales de funcionamiento de una vía pública para la realización de un retén, sin contar con las medidas de precaución que evitaran el fatal accidente en el que perdió la vida el ciudadano Israel Gutiérrez Valencia. Es decir y frente a lo anterior, el despacho considera que **COLDETRANS S.A**, queda libre de responsabilidad – conforme al criterio de imputación que se ha venido desarrollando – por los hechos que generan el presente juicio de responsabilidad. Con fundamento en lo descrito por el inciso tercero artículo 282 del Código General del Proceso, el juzgado se releva del análisis de las demás excepciones propuestas.

## 5. LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS

Conforme a lo descrito en la demanda, se reclaman para Omaira Guerrero Largo, como compañera permanente del fallecido, y para Arsoman Gutiérrez Navarrete y Bertilda Rosa Valencia como padres, perjuicios materiales en calidad de lucro cesante (Art. 1614 C.C.)

Al respecto examina el despacho que se debe hacer una análisis previo, para verificar la obligación alimentaria que tenía el fallecido para con sus padres, en la medida en que de las pruebas arrojadas, se ha podido verificar que aquel tenía un hogar constituido con la señora Guerrero Largo, y en tal medida, deben constatarse los elementos de la obligación alimentaria para acceder a su reconocimiento.

Al respecto ha expresado en sentencia de unificación del Consejo de Estado<sup>20</sup>:

*[E]l fundamento de la obligación alimentaria contenida en la legislación civil es doble: por un lado, la necesidad de quien los reclama y, por el otro, la capacidad de quien los debe. Esto significa que legalmente no se deben alimentos a quien tiene los medios para procurarse su propia subsistencia y que no está obligado a ellos aquel que no cuenta con los recursos económicos para proporcionarlos. (...) cuando la exigibilidad de esta obligación no surge por la simple relación de parentesco, sino que demanda la configuración de dos situaciones de hecho: por un lado que el peticionario carezca de bienes y, por tanto, requiera los alimentos que solicita y, por el otro, que la persona a quien se le piden los alimentos tenga los medios económicos para procurarlos. (...) la Sala unificará su jurisprudencia para señalar que, en*

<sup>19</sup> Se hace referencia al acaecimiento jurídico del hecho, sin hacer referencia al accidente desde el punto de vista fáctico, en el que claramente estuvieron vinculados, el mismo fallecido, el conductor del tracto camión y el retén realizado por agentes de la Policía Nacional.

<sup>20</sup> Consejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección tercera sala plena consejero ponente: danilo rojas betancourth san antonio, tolima, seis (6) abril de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 05001-23-31-000-2001-03068-01(46005) actor: dario de jesus santamaría lora y otros demandado: nación-ministerio de defensa, ejército nacional referencia: acción de reparación directa - sentencia de unificación

*ausencia de prueba que demuestre (i) que los hijos contribuyen económicamente con el sostenimiento del hogar paterno o materno, porque materialmente están en condiciones de hacerlo, es decir, porque ejercen una actividad productiva que les reporta algún ingreso, y (ii) que los padres son beneficiarios de la obligación alimentaria porque no tienen los medios para procurarse su propia subsistencia, bien porque están desempleados, enfermos o sufren de alguna discapacidad, no puede presumirse que la muerte de una persona menor de 25 años genera una pérdida de ingresos cierta a favor de sus padres. (...) Para la demostración de estos dos elementos son admisibles todos los medios de prueba; sin embargo, en lo que toca al primer elemento –la capacidad del deudor de la obligación alimentaria– el juez administrativo deberá valorar especialmente todos los hechos que sean indicativos de que el hijo sí ejercía alguna actividad productiva, como son el contexto familiar, cultural, de género y social en el que él y su familia subsistían, pues es bien sabido que en las zonas rurales todos los integrantes del núcleo familiar contribuyen de alguna manera con el sostenimiento económico del hogar. No obstante, en estos casos, para el cálculo del lucro cesante deberá presumirse que todos los hijos que están en edad de trabajar, contribuyen económicamente al mismo propósito, por lo que la indemnización que por concepto de lucro cesante se reconozca a favor de los padres del hijo[E]l fundamento de la obligación alimentaria contenida en la legislación civil es doble: por un lado, la necesidad de quien los reclama y, por el otro, la capacidad de quien los debe. Esto significa que legalmente no se deben alimentos a quien tiene los medios para procurarse su propia subsistencia y que no está obligado a ellos aquel que no cuenta con los recursos económicos para proporcionarlos. (...) cuando la exigibilidad de esta obligación no surge por la simple relación de parentesco, sino que demanda la configuración de dos situaciones de hecho: por un lado que el peticionario carezca de bienes y, por tanto, requiera los alimentos que solicita y, por el otro, que la persona a quien se le piden los alimentos tenga los medios económicos para procurarlos. (...) la Sala unificará su jurisprudencia para señalar que, en ausencia de prueba que demuestre (i) que los hijos contribuyen económicamente con el sostenimiento del hogar paterno o materno, porque materialmente están en condiciones de hacerlo, es decir, porque ejercen una actividad productiva que les reporta algún ingreso, y (ii) que los padres son beneficiarios de la obligación alimentaria porque no tienen los medios para procurarse su propia subsistencia, bien porque están desempleados, enfermos o sufren de alguna discapacidad, no puede presumirse que la muerte de una persona menor de 25 años genera una pérdida de ingresos cierta a favor de sus padres. (...) Para la demostración de estos dos elementos son admisibles todos los medios de prueba; sin embargo, en lo que toca al primer elemento –la capacidad del deudor de la obligación alimentaria– el juez administrativo deberá valorar especialmente todos los hechos que sean indicativos de que el hijo sí ejercía alguna actividad productiva, como son el contexto familiar, cultural, de género y social en el que él y su familia subsistían, pues es bien sabido que en las zonas rurales todos los integrantes del núcleo familiar contribuyen de alguna manera con el sostenimiento económico del hogar. No obstante, en estos casos, para el cálculo del lucro cesante deberá presumirse que todos los hijos que están en edad de trabajar, contribuyen económicamente al mismo propósito, por lo que la indemnización que por concepto de lucro cesante se reconozca a favor de los padres del hijo que fallece debe disminuirse en proporción al número de hijos que integran el hogar que fallece debe disminuirse en proporción al número de hijos que integran el hogar.*

Ahora bien, le corresponde al despacho verificar si en efecto, existía una relación alimentaria entre el fallecido y sus padres, en la medida en que este tenía un hogar constituido y por separado con Omaira Guerrero Largo quien fuera su compañera permanente.

Lo anterior, quedó acreditado en el plenario con las pruebas testimoniales que se relacionan a continuación.

Reposa como prueba testimonial, la declaración de Luz Damary Uchima Guevara, sobre la que el despacho no encuentra tacha alguna, dadas las características de espontaneidad y solvencia con que fue rendida. Sobre el testimonio tenemos que la declarante no fue testigo presencial de los hechos que rodearon el accidente de tránsito, pero sí de las relaciones de pareja entre Omaira Guerrero Largo y el señor Israel Gutiérrez Valencia; con lo que se ratificó la declaración extra juicio que rindió ante notario público. La testigo también declaró acerca de los perjuicios morales sufridos por la familia del fallecido.

La señora Uchima Guevara, manifestó que el fallecido sostenía a sus padres, por conocimiento directo de los actos que sufragaba en favor de estos. Indicó que el fallecido era muy responsable con aquellos.

Ahora bien, también reposa el testimonio de José Didier Chiquito Trejos, quien tampoco fue testigo presencial de los hechos, pero indicó que conoció las relaciones de pareja entre Omaira Guerrero Largo con el señor Israel Gutiérrez Valencia, ratificando la declaración extra juicio que rindió ante notario público.

Este testigo también declaró sobre los perjuicios morales sufridos por la familia del fallecido. Este testigo manifestó que el fallecido sostenía a sus padres, por conocimiento directo de los actos que sufragaba el fallecido a favor de sus padres.

En la misma dirección fue rendido el testimonio por parte de Roberto Elías Lemas Castro y Nulber Londoño Velazco, quienes expusieron que el fallecido velaba por el sostenimiento de sus padres y de su señora esposa.

Analizados los testimonios anteriores, el despacho da por probado que el fallecido tenía unión marital de hecho con la señora Omaira Guerrero Largo, sin que se pueda acreditar con certeza que habiendo formado una nueva unidad familiar, mantuviera una obligación alimentaria con sus progenitores.

Es decir, considera el despacho que la obligación alimentaria del fallecido con sus padres no está plenamente probada, mucho más cuando tenía un vínculo marital de hecho con la señora Guerrero Largo. En este sentido, considera el despacho que la relación alimentaria entre los padres y el fallecido no quedó debidamente demostrada, en la medida en que además de las testimoniales, no se probó de forma conclusiva que el fallecido velara integralmente por el sostenimiento del hogar conformado por los señores Arsoman Gutiérrez Navarrete y Bertilda Rosa Valencia.

## **5.1 PERJUICIOS MATERIALES**

Dilucidado lo anterior, se solicitó en el escrito de la demanda pagar a favor de Omaira Guerrero Largo, los perjuicios materiales que se le irrogaron con motivo de la muerte del ciudadano Israel Gutiérrez Valencia.

Reposa como prueba a folio 63 del cuaderno principal, certificación emitida por la Asociación de Mineros la Montaña, en donde el representante legal de la entidad, manifiesta que el señor Israel Gutiérrez Valencia laboraba con esa asociación en calidad de administrador, con una asignación mensual de \$1.500.000

Asimismo, los testigos Luz Damary Uchima Guevara, José Didier Chiquito Trejos y Nulber Londoño Velazco, también manifestaron a viva voz frente al despacho, que el fallecido devengaba como minero la suma de \$1.500.000.

Ahora bien, el testigo Roberto Elías Lemas Castro, indicó en el mismo sentido que el fallecido ganaba \$1.500.000 mensuales. El testigo hacía y hace parte de la junta directiva de la asociación, y expuso que observaba cuando se les pagaba a los mineros más o menos en el promedio descrito.

Este testigo también indicó que el fallecido, pagaba seguridad social por su trabajo en la asociación de mineros, sin expresar sobre que monto cotizaba al sistema. Aseveró que de toda esta información contable, existen registros en la asociación de mineros, en la medida en que se declara renta y se llevan los respectivos informes de registros y gastos.

Sobre la asignación mensual que devengaba el fallecido, el despacho extrae las siguientes conclusiones probatorias.

En primer término que no existe certeza acerca del valor que el ciudadano Israel Gutiérrez Valencia, recibía como consecuencia de sus actividades económicas en la

Asociación de Mineros la Montaña, dado que el mismo Roberto Elías Lemas Castro, quien hace parte de la asociación, expresó que el fallecido pagaba seguridad social, sin indicar sobre qué monto y qué en promedio un minero que trabajara para la asociación ganaba el valor de \$1.500.000.

A lo anterior se suma que este testigo, también dijo que de todas estas actividades existen los respectivos registros contables, pero esta prueba nunca fue allegada al plenario

Es decir, frente a lo anterior, tenemos que el valor de \$1.500.000 que presuntamente recibía como salario el fallecido, no pasa de ser una afirmación sin fundamentos contables a la que este despacho judicial le resta credibilidad, no solo porque tres de los testigos no tenían relación directa con este pago, sino porque quien la podía tener, es decir el testigo Roberto Elías Lemas Castro, refirió que esta información reposaba en documentación contable que no aportó al proceso.

Por lo a anterior, la liquidación sobre perjuicios materiales, partirá de la suma de un (1) salario mínimo legal vigente, conforme a los siguientes parámetros.

Hechos: 12/06/2013  
Fecha sentencia: 09/12/2019  
Fecha nacimiento: 07/11/1974

Para el cálculo de la indemnización se tomará el valor del salario mínimo al momento de los hechos actualizado a la fecha así.

<b>VALOR SALARIO 2013 (\$589.500)</b>	
VALOR A INDEXAR	\$ 589.500
INDICE FINAL (diciembre de 2019)	\$103,43
INDICE INICIAL (junio de 2013)	\$ 79,39
VALOR INDEXADO	\$768.005,85

Teniendo en cuenta que el valor obtenido resulta inferior al salario mínimo determinado para el año 2019, se procederá a continuar con la presente liquidación con el valor del salario mínimo actual

SALARIO MÍNIMO 2019	\$ 828.116
Mas 25 % correspondiente prestaciones sociales	\$ 1.035.145
<b>Menos 25% Manutención Fallecido</b>	<b>\$ 776.358,75</b>

**Lucro cesante**

La liquidación comprenderá dos períodos, el debido o consolidado que abarca el transcurrido desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la fecha de la presente providencia y el futuro o anticipado que corresponde al interregno comprendido entre el día siguiente de la fecha de la presente providencia y hasta la fecha de probabilidad de vida, con base en las siguientes formulas:

**Indemnización Debida o consolidada:**

$$S = Ra \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$$

- S = Es la suma resultante del período a indemnizar.
- Ra = Es la renta o ingreso mensual
- i= Interés puro o técnico: 0.004867

- n= Número de meses que comprende el período indemnizable: desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la fecha de la sentencia, esto es 77,93 meses

$$S = \$ 776.358,75 \frac{(1+0,004867)^{77,93} - 1}{0,004867}$$

$$S = \$ 73.360.263,03$$

**Indemnización futura:**

n= Número de meses que comprende el período indemnizable: desde la fecha de la sentencia hasta la fecha de probabilidad de vida (edad del señor Israel Gutiérrez Valencia), a la fecha de ocurrencia de los hechos la víctima tenía 38 años, por lo que se esperaban 42,7 de años de vida probable<sup>21</sup>.

Para efectos de la liquidación se descontará el número de meses que fueron liquidados en el período consolidado 77,93 meses, para un total de meses a indemnizar de 434,47 meses.

Donde:

$$S = Ra \frac{(1 + i)^n - 1}{i(1 + i)^n}$$

- S = Es la indemnización a obtener.
- Ra = Es la renta o ingreso mensual
- i= Interés puro o técnico: 0.004867
- n= Desde la fecha de la sentencia hasta la fecha de probabilidad de vida, esto es 367,83 meses.

$$S = \$ 776.358,75 \frac{(1+0,004867)^{434,47} - 1}{0,004867 (1,004867)^{434,47}}$$

$$S= \$140.028.646,14$$

TOTALES	
Indemnización Debida	\$ 73.360.263,03
Indemnización Futura	\$ 140.028.646,14
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 213.388.909,17</b>

Bajo ese paradigma, se condenará a la Policía Nacional, a reparar el perjuicio material causado, para lo cual, se liquidará la indemnización a favor de la señora **Omaira Guerrero Largo** equivalente a **\$213.388.909,17**

**5.2 PERJUICIOS MORALES**

Revisadas las pretensiones de la demanda, los registros civiles y las demás pruebas que obran en el expediente, el juzgado tiene por demostrado el perjuicio moral en cabeza de los demandantes, con ocasión de la muerte del ciudadano Israel Gutiérrez Valencia.

Los demandantes solicitaron el reconocimiento de perjuicios morales en la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales para la compañera permanente, los padres y hermanos de la víctima directa del daño.

<sup>21</sup> Resolución Número 1555 De 2010; (vigente para la fecha de los hechos)

En lo que concierne a la indemnización de perjuicios, se tiene que el grupo familiar del fallecido Israel Gutiérrez Valencia, está compuesto por su compañera permanente, sus padres y hermanos: OMAIRA GUERRERO LARGO compañera permanente, ARSOMAN GUTIERREZ NAVARRETE, padre, BERTILDA ROSA VALENCIA, madre, ALVARO ANTONIO GUTIERREZ VALENCIA, hermano, FERNANDO GUTIERREZ VALENCIA, en hermano, OTONIEL DE JESUS GUTIERREZ VALENCIA, hermano y UBER GUTIERREZ VALENCIA, hermano.

Lo anterior quedó corroborado, conforme se observa en los registros civiles obrantes en folios 53 al 62 del cuaderno principal. La relación marital de hecho existente entre OMAIRA GUERRERO LARGO y el occiso, se comprobó debidamente conforme a los testimonios rendidos en el proceso y conforme declaraciones extra procesales que fueron allegadas como prueba al expediente. Folios 66 al 68 del cuaderno 1 y testimonios de Luz Damary Uchima Guevara, José Didier Chiquito Trejos, Roberto Elías Lemas Castro y Nulber Londoño Velazco.

Lo anterior permite inferir<sup>22</sup> que los demandantes padecieron perjuicios morales, por la muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia, pues al quedar plenamente demostrado el parentesco, el Despacho deduce<sup>23</sup> que estos hechos les produjeron gran tristeza y congoja.

En relación con la suma máxima con que debe indemnizarse por el padecimiento de un perjuicio moral demostrado, el Consejo de Estado<sup>24</sup> unificó criterio respecto de la reparación de los perjuicios inmateriales, de la siguiente manera:

**“... 2.1 REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE**

*Para la reparación del daño moral, en caso de muerte, se han diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas.*

*Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio (100 SMLMV).*

*Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.*

*(...)*

*La siguiente tabla recoge lo expuesto:*

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE					
REGLA GENERAL					
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
	Relaciones afectivas conyugales y paterno filiales	Relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)	Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civil	Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil	Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
Porcentaje	100%	50%	35%	25%	15%
Equivalencia en salarios mínimos	100	50	35	25	15

*Para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva. Para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva....”*

<sup>22</sup> Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de mayo 11 de 2006, Exp. 14694, C.P. Ramiro Saavedra.

<sup>23</sup> Respecto de la prueba indiciaria ver entre otras: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de febrero 16 de 2001, Exp. 12703, C.P. María Elena Giraldo.

<sup>24</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Acta del veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014).



En el caso *sub examine*, el Despacho encuentra debidamente acreditado que el señor Israel Gutiérrez Valencia falleció el día 12 de Junio de 2013, tal como consta en el registro civil de defunción visible a folio 54 del cuaderno principal.

Con base en la presunción de daño moral que ha reconocido el Consejo de Estado, el Despacho reconocerá a este grupo familiar los perjuicios morales reclamados, de la siguiente manera.

DEMANDANTES	PARENTESCO	MONTO A RECONOCER
Omaira Guerrero Largo, Arsoman Gutiérrez Navarrete y Bertilda Rosa Valencia	Compañera y Padres del fallecido – Nivel 1	100 S.M.L.M.V. para cada uno.

DEMANDANTES	PARENTESCO	MONTO A RECONOCER
Álvaro Antonio Gutiérrez Valencia, Fernando Gutiérrez Valencia, Otoniel de Jesús Gutiérrez Valencia y Uber Gutiérrez Valencia.	Hermanos – Nivel 2	50 S.M.L.M.V. para cada uno.

6. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

Ahora bien, teniendo en cuenta que se negaran las pretensiones de la demanda en contra de COLDETRANS S.A y de Juan Augusto Ríos Osorio, se rechaza la prosperidad de los llamamientos en garantía que se realizaron en contra de ALLIANZ SEGUROS S.A y la Cooperativa Quindiana De Transporte LTDA, por simple sustracción de materia.

7. COSTAS

Conforme con lo indicado en el artículo 188 del C.P.A.C.A., salvo en los procesos donde se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá por las normas del CPC hoy CGP. Significa que la condena en costas equivale a un criterio objetivo donde no es necesario examinar si hubo o no culpa. Así las cosas, en el presente evento se ventila un asunto de interés particular, de tal manera que habrá lugar a condena en **costas**, en consecuencia, por Secretaría se liquidarán las costas por expensas, y como **agencias en derecho** dando aplicación al Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se fija la suma equivalente al **cinco por ciento (5%)** del valor de las pretensiones de la demanda a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

En mérito de lo expuesto el **JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

**PRIMERO: DECLARAR** administrativamente responsable a **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL**, por la muerte del ciudadano Israel Gutiérrez Valencia ocurrida como consecuencia de accidente de tránsito presentado el día 12 de Junio de 2013, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADAS**, las excepciones de “Culpa exclusiva y determinante de la víctima” y “Rompimiento del nexo causal”, propuestas por **LA POLICIA NACIONAL**, por lo expuesto en la parte motiva.

**TERCERO: DECLARAR** probada la excepción de “*culpa de un tercero*”, en este caso de la **POLICÍA NACIONAL**, propuesta por **Transportes COLDETRANS S.A** y por **Juan**

**Augusto Ríos Osorio**, por lo que se niegan las pretensiones de la demanda en contra de estos dos demandados.

**CUARTO: NEGAR** el llamamiento en garantía realizado en contra de ALLIANZ SEGUROS S.A y la Cooperativa Quindiana de Transporte LTDA, conforme a lo descrito en la parte motiva de esta sentencia.

**QUINTO:** Como consecuencia de lo anterior, **CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL** por concepto de **perjuicios materiales** sufridos con ocasión de la muerte de Israel Gutiérrez Valencia así: para OMAIRA GUERRERO LARGO (compañera permanente), la suma de \$213.388.909,17.

**SEXTO: NEGAR** el reconocimiento de perjuicios materiales reclamado por ARSOMAN GUTIÉRREZ NAVARRETE y BERTILDA ROSA VALENCIA, en su calidad de padres del fallecido, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

**SÉPTIMO:** Como consecuencia de lo anterior, **CONDENAR a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL** por concepto de **perjuicios morales** sufridos, con ocasión de la muerte de Israel Gutiérrez Valencia así:

Para OMAIRA GUERRERO LARGO en su condición de Compañera Permanente del señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (fallecido) una suma equivalente a CIEN (100) Salarios Mínimos Mensuales Vigentes.

Para ARSOMAN GUTIERREZ NAVARRETE, en su condición de Padre del señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (fallecido) una suma equivalente a CIEN (100) Salarios Mínimos Mensuales Vigentes.

Para BERTILDA ROSA VALENCIA, en su condición de Madre del señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (fallecido) una suma equivalente a CIEN (100) Salarios Mínimos Mensuales Vigentes.

Para ÁLVARO ANTONIO GUTIERREZ VALENCIA, en su condición de Hermano del señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (fallecido) una suma equivalente a cincuenta (50) Salarios Mínimos Mensuales Vigentes.

Para FERNANDO GUTIERREZ VALENCIA, en su condición de Hermano del señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (fallecido) una suma equivalente a cincuenta (50) Salarios Mínimos Mensuales Vigentes.

Para OTONIEL DE JESUS GUTIERREZ VALENCIA, en su condición de Hermano del señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (fallecido) una suma equivalente a cincuenta (50) Salarios Mínimos Mensuales Vigentes.

Para UBER GUTIERREZ VALENCIA, en su condición de Hermano del señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (fallecido) una suma equivalente a cincuenta (50) Salarios Mínimos Mensuales Vigentes.

**OCTAVO: NEGAR** las demás pretensiones de la demanda.

**NOVENO: CONDENAR EN COSTAS a LA POLICIA NACIONAL**, en consecuencia por la secretaría del despacho, se liquidaran las costas por expensas y como **agencias en derecho**, dando aplicación al Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se fija la suma equivalente al **cinco por ciento (5%)** del valor de la condena al momento de la ejecutoria de la sentencia.

**DÉCIMO: DISPONER** que se efectúen las comunicaciones del caso para el cabal cumplimiento de la sentencia (inciso final, Art. 192 del C.P.A.C.A.). **Anótese** en el Sistema Informático de Justicia XXI y; **procédase** al archivo del mismo, previa liquidación y devolución de remanentes de gastos del proceso, si los hubiere.

**DÉCIMO PRIMERO: PREVENIR** a las entidades demandadas acerca del contenido de los artículos 187 inciso 4, 194 y 195 del C.P.A.C.A.

**DÉCIMO SEGUNDO: DISPONER** que se **notifique** la sentencia en los términos del artículo 203 del C.P.A.C.A.

**DÉCIMO TERCERO:** Expídanse a costa de la parte interesada, las copias auténticas que sean solicitadas, con observancia de los parámetros legales establecidos en el artículo 114 del Código General del Proceso.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. G. A. Trejos', with a stylized, cursive script.

**JUAN GUILLERMO ÁNGEL TREJOS**  
**JUEZ**